MESA DE PARTES DIGITAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DOCUMENTOS DE BÚSQUEDA

Criterio de búsqueda: Número de RU

Fecha Desde: **Fecha Hasta:** **Estado:** Todos

Buscar | PDF | SOBRESALIR | COLUMNAS

nuevo

NUMERO DE RU	TIPO DE DOCUMENTO	NRO. DOCUMENTO	ASUNTO	REGISTRO FECHA	ESTADO	DESTINATARIOS	ARCHIVOS
1386823	OTROS	43379733	DENUNCIA CONSTITUCIONAL - CONTINUACIÓN DE ANEXOS DEL RU N° 1386806	22/01/2024 13:13	REGISTRADO	SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES	
1386806	OTROS	43379733	DENUNCIA CONSTITUCIONAL	22/01/2024 13:03	REGISTRADO	SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES	

2 resultados « ‹ 1 › » 10

Copyright © 2022 - Área de Proyectos

MESA DE PARTES DIGITAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DETALLE DEL DOCUMENTO

Datos de Documento | Seguimiento

Número de RU

Tipo de documento
OTROS

Número
43379733

Estado
REGISTRADO

Asunto
DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Nombres del Firmante
LUIS ANDRÉS

Apellidos del Firmante
SIESQUEN AMPUERO

adjuntos

documento
Denuncia y Anexos 01-08.pdf

Destinatarios

Destinotario
SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES

Copyright © 2022 - Área de Proyectos

MESA DE PARTES DIGITAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DETALLE DEL DOCUMENTO

Datos de Documento | Seguimiento

Número de RU

Tipo de documento
OTROS

Número
43379733

Estado
REGISTRADO

Asunto
DENUNCIA CONSTITUCIONAL - CONTINUACIÓN DE ANEXOS DEL RU N° 1386806

Nombres del Firmante
LUIS ANDRÉS

Apellidos del Firmante
SIESQUEN AMPUERO

adjuntos

documento
Denuncia y Anexos 09-16.pdf

Destinatarios

Destinotario
SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES

Copyright © 2022 - Área de Proyectos

MESA DE PARTES DIGITAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DETALLE DEL DOCUMENTO

Datos de Documento | Seguimiento

Número de RU 1386837

Tipo de Documento
OTROS

Número
SN

Estado
REGISTRADO

Asunto
DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA LOS CONGRESISTAS ALEJANDRO SOTO REYES Y WALDEMAR JOSE CERRON ROJAS POR INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y OTROS

Nombres del Firmante
ANGELA LUCILA

Apellidos del Firmante
PAUTRAT OYARZÚN

Adjuntos

Documento
1. Denuncia y Anexos 1 -11.pdf
2. Anexos 12 - 16.pdf

Destinatarios

Destinatario
COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO

Copyright © 2022 - Área de Proyectos

<u>SUMILLA</u>: DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA LOS CONGRESISTAS ALEJANDRO SOTO REYES Y WALDEMAR JOSE CERRON ROJAS POR INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y OTROS

SEÑOR CONGRESISTA
PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ANGELA LUCILA PAUTRAT OYARZUN, identificada con DNl N°09670957, con domicilio real en Pasaje La Huaca N° 101, Departamento 301, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima, y señalando domicilio procesal en Casilla Electrónica 48255 del Sistema de Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial, atentamente me presento y digo:

I. <u>PETITORIO</u>:

Que, al amparo de los artículos 99° y 100° de la Constitución Política del Perú y del artículo 89° del Reglamento del Congreso de la República, interpongo **DENUNCIA CONSTITUCIONAL** contra los congresistas **ALEJANDRO SOTO REYES y WALDEMAR JOSE CERRON ROJAS,** por **FLAGRANTE INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 38°, 66°, 67° 68° y 69° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ** y como presuntos autores de la comisión del **Delito Ambiental – Responsabilidad Funcional e Información Falsa – RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO POR OTORGAMIENTO ILEGAL DE DERECHOS** tipificado en el artículo 314° del

Código Penal en agravio del Estado y de la Sociedad, SOLICITANDO autorizar su procesamiento judicial, desafuero e inhabilitación de la función pública.

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS SOBRE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y EN ESPECIAL AL PATRIMONIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE:

1. Con fecha 31 de diciembre de 1993 entra en vigencia la Constitución Política del Perú en cuyo Artículo 2, numeral 22° de la Constitución Política del Perú se establece que toda persona tiene el Derecho Fundamental a gozar de un Ambiente Equilibrado y Adecuado al Desarrollo de la Vida y, asimismo, en su artículo 66° establece que los recursos naturales, renovables y no renovables (como los bosques amazónicos), son Patrimonio de la Nación y que por Ley Orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares.

2. Estas disposiciones constitucionales crearon un sistema de protección al medio ambiente y en especial al Patrimonio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, dentro del cual están los bosques, ecosistemas forestales, tierras forestales y tierras de protección que **NO SE PUEDEN CONVERTIR A USO AGRÍCOLA**; ello frente al avance informal de la deforestación de dichas áreas. Precisamente, por la actividad agrícola indiscriminada y depredación (intensiva y no intensiva) realizada dentro de las tierras forestales y tierras de protección.

3. Ante ello, debo señalar en primer lugar que, el 16 de julio de 2000 se publicó la Ley N° 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la cual

establecía como objeto el normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento con la valorización progresiva de los servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 66° y 67° de la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y los Convenios Internacionales vigentes para el Estado Peruano. En dicha normativa, se señalaba que, en los casos que haya tierras de aptitud agropecuaria en la selva, ello debe ser determinado previamente por el INRENA (Ahora Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura).

4. Asimismo, una vez INRENA haya determinado que dichas tierras serian para uso agropecuario, para que se puedan iniciar las actividades agrícolas, previamente debían tener la autorización del cambio de uso de dichas tierras forestales o de protección, mediante la tramitación de un expediente técnico y posterior a ello, solicitar una autorización para realizar el desbosque de dichas áreas; debiendo reiterar que antes de iniciarse las actividades agrícolas o agropecuarias en la selva amazónica, era obligatorio efectuar todos estos trámites administrativos; e incluso en todos los casos de cambio de uso autorizado, se debía reservar un 30% de la cobertura forestal; es decir, tampoco se podía hacer el desbosque total (100%) del predio.

5. Posteriormente, el 02 de setiembre de 2009 se publicó el Decreto Supremo N°017-2009-AG en el cual se establecían los procedimientos de Clasificación de Tierras por su capacidad de uso mayor. Ello para

determinar si las tierras en las cuales se querían desarrollar actividades agrícolas o agropecuarias tenían la capacidad de uso mayor para realizar dichas actividades.

6. Se debe señalar que, el Reglamento establecía que las tierras podían ser de cinco tipos: (i) tierras aptas para cultivo en limpio, (ii) tierras aptas para cultivos permanentes, (iii) tierras aptas para pastos, (iv) tierras aptas para producción forestal y (v) tierras de protección.

7. En ese sentido, si el resultado del Estudio de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor, determinaba que las tierras eran aptas para producción forestal o tierras de protección. Una vez emitida dicha clasificación, NO se podía realizar una actividad distinta a la señalada (agrícola o agropecuaria) y, por ende, no se podía solicitar posteriormente, el cambio de uso de la tierras ni solicitar ni ejecutar el desbosque en las mismas. Asimismo, si el resultado del Estudio de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor era que estas eran: tierras aptas para pastos, tierras aptas para cultivo en limpio o tierras aptas para cultivos permanentes **pero que no fue previamente aprobado por autoridad competente,** tampoco se puede realizar actividad agrícola o agropecuaria alguna y, por ende, tampoco se puede solicitar el cambio de uso de la tierras ni solicitar o ejecutar el desbosque de estas.

8. Posteriormente, el 22 de julio de 2011 se publicó la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (que derogo la Ley N° 27308) en la cual se reconocían los derechos y deberes de todas las personas entorno al Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, así como, un conjunto de principios aplicables a la gestión forestal y de fauna silvestre como es el dominio eminencial del Estado sobre los recursos del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, entre otros. Asimismo, se

estableció como finalidad de esta Ley, promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional, integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, en armonía con el interés social económico y ambiental de la Nación.

9. Como podemos observar, ambas normas regulaban las tierras de capacidad de uso mayor forestal y las tierras de capacidad de uso mayor para protección, con o sin cobertura boscosa como recursos forestales y también las reconocían como Patrimonio Forestal de la Nación. Adicionalmente, dichas normas prohibían la realización de actividades agropecuarias en tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal o de protección conforme lo estableció taxativamente los artículos 37° y 38° de la Ley N°29763 que habilitaban la realización de actividades agropecuarias en la Amazonia peruana siempre que, el SERFOR previamente hayan clasificado con capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes conforme al Reglamento de clasificación de tierras y autorice su cambio de uso actual a fines agropecuarios, debiendo contar previamente con opinión vinculante del Ministerio del Ambiente.

10. Mediante Decreto Supremo N°005-2022-MIDAGRI de fecha 22 de abril de 2022 se aprueba el nuevo Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (derogándose el Decreto Supremo 0017-2009-AG), estableciéndose en su artículo 6° que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios – DGAAA es responsable de la elaboración, supervisión, evaluación y aprobación de los estudios de levantamiento de suelos y clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, así como de su promoción y difusión

en el ámbito nacional y que, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR realiza la evaluación del estudio del levantamiento de cobertura vegetal (bosques) de acuerdo a sus competencias; estableciéndose que la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor está compuesta por los estudios de levantamiento de suelos y de levantamiento de cobertura vegetal (bosques).

11. En ese sentido, en virtud al actual Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, si el resultado del Estudio de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor, es de tierras aptas para pastos, tierras de aptitud forestal o tierras de protección, NO se puede realizar actividad agrícola o agropecuaria alguna en dichas tierras y; por ende, no se puede solicitar el cambio de uso de la tierras ni solicitar ni ejecutar el desbosque en las mismas e; igualmente, si el resultado del Estudio de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor, es de tierras aptas para cultivo en limpio o tierras aptas para cultivos permanentes pero que no ha sido previamente aprobado por autoridad competente, TAMPOCO se puede realizar actividad agrícola o agropecuaria alguna y, por ende, tampoco no se puede solicitar el cambio de uso de la tierras ni solicitar ni ejecutar el desbosque en las mismas; por lo que de incumplirse esta PROHIBICIÓN EXPRESA, se estaría incurriendo en una infracción forestal y en delito contra los bosques tipificado en el Código Penal.

FUNDAMENTOS DE HECHO DENUNCIADOS

12. Desde el año 2001 al 2020 se perdieron un total de 2'636,585 Hectáreas de bosques amazónicos en el Perú, conforme lo da a conocer el Monitoreo del Programa Nacional de Bosques del Ministerio del Ambiente, el cual agrega que la deforestación llegó a

las 203,272 Hectáreas en el año 2020, siendo ello devastador para la Amazonia peruana ya que esta cifra supera en 54,846 Hectáreas la cantidad de bosques perdidos el año anterior (2019), deforestación que es originada fundamentalmente (aunque no exclusivamente) por el desarrollo de actividades ilegales agrícolas y agropecuarias intensivas o no intensivas, con la correspondiente tala ilegal, deforestación, pérdida de biodiversidad, pérdida de servicios ecosistémicos, erosión de suelos y afectaciones a las quebradas y cuerpos de agua que generan dichas actividades.

13. Pese a lo expuesto en el párrafo anterior, en el Congreso de la República, se llevó a cabo un debate con relación a los proyectos de Ley 649/2021-CR y 894/2021-CR "Ley que modifica la Ley 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias, orientadas a promover la zonificación forestal". Ante ello, con fecha 30 de junio de 2022 se aprobó un texto sustitutorio que incluye la siguiente Disposición Complementaria Final:

> "Disposición Complementaria Final Única. Clasificación de tierras y reglas sobre cambio de uso para actividades agropecuarias existentes, los predios rústicos con título de propiedad o constancia de posesión, emitidos por autoridad competente hasta la entrada en vigencia de la presente ley o estén dentro de los alcances de la Ley 31145, Ley de saneamiento Físico-Legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales, contarán con la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM) para desarrollar cultivos en limpio, permanentes o pastos; estarán exceptuados del cumplimiento de las reglas sobre cambio de uso a que se

refiere el artículo 38 de La ley 29763 - Ley Forestal de Fauna Silvestre siempre que en esas áreas estén desarrollando exclusivamente actividades agropecuarias con anterioridad."

14. La referida Disposición Complementaria Final fue aprobada por el Congreso de la República con fecha 07 de julio de 2022, siendo suscrita la Autógrafa de Ley con fecha 13 de julio de 2022 y, enviada al Despacho Presidencial con fecha 14 de julio de 2022 para su promulgación en un plazo de quince días hábiles, plazo que venció el 08 de agosto de 2022.

15. El 08 de agosto 2022, la autógrafa de la Ley que modificaba la Ley 29763 **FUE OBSERVADA** por el Poder Ejecutivo y devuelta al Congreso para la continuación del trámite correspondiente, siendo que luego de varios debates infructuosos por parte de un sector congresal y pese a la gran oposición de entidades estatales y no estatales que defienden el Medio Ambiente y que incluso emitieron sendos informes avizorando el catástrofe ambiental que podía generar la aprobación de esta ley.

16. El 13 de diciembre de 2023, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), envió una carta al denunciado Alejandro Soto Reyes, Presidente del Congreso, solicitando se priorice el debate congresal para la aprobación de los proyectos de Ley cuestionados, denotándose así el interés promovido por los grupos empresariales para la aprobación de la cuestionada ley.

17. Recibida la comunicación aludida en el punto precedente, el proyecto de Ley fue aprobado el 14 de diciembre 2023, pero el 19 de

diciembre 2023 las congresistas Susel Ana María Paredes Piqué y Ruth Luque Ibarra formularon RECONSIDERACIONES a la votación que aprobó las polémicas modificaciones a la normativa ambiental y de recursos naturales.

18. Pese a que las reconsideraciones planteadas estuvieron publicadas en el ***portal web*** del Congreso de la Republica y que, debieron ser tramitadas y puestas a debate conforme lo establece el Reglamento del Congreso en el artículo 58°, los congresistas Alejandro Soto Reyes y Waldemar José Cerrón Rojas, ahora denunciados, en su condición de Presidente y Segundo Vicepresidente del Parlamento con fecha 10.01.2024 suscribieron la autógrafa de ley, sin considerar los pedidos de reconsideración presentados por las dos congresistas de la República, bajo el supuesto amparo legal que ***"el Oficial Mayor señalo que dichos pedidos fueron extemporáneos"*.**

19. Es evidente que los congresistas denunciados, han inobservado el debido proceso y faltando gravemente a sus obligaciones funcionales como Presidente y Segundo Vicepresidente del Congreso promulgaron una ley aun observada por dos congresistas de la república. Efectivamente, la promulgación de esta ley deviene en ilegal dado que, los ahora denunciados, abusando de las facultades otorgadas como miembros de la Mesa Directiva del Congreso de la República, retiraron los recursos de reconsideración planteadas por los autoridades de elección popular (representantes de los habitantes del país), con el único fin de beneficiar indebidamente a un pequeño grupo de empresas que estarían realizando la desforestación de nuestra selva peruana.

20. El interés indebido de los ahora denunciados, se evidencia porque como presidente y segundo vicepresidente del congreso, en otras

ocasiones donde algún congresista interponía un recurso de reconsideración, estos procedían con su trámite a fin de mantener la transparencia que siempre debe existir en este segundo poder del Estado, **pero para aprobar esta ley,** primero, desconocieron la interposición de dos recursos de reconsideración que ya se encontraban publicadas en el portal web del congreso (ahora retiradas) y bajo el penoso argumento que ***"el Oficial Mayor nos manifestó que eran extemporáneas"*** procedieron indebidamente a firmar y publicar dicha norma, lo que evidencia el interés personal irregular y que estarían cometiendo abuso de las facultades otorgadas por sus pares congresales, al designarlos miembros de la mesa directiva del Congreso de la Republica.

21. Muestra del ilegal accionar de los congresistas Alejandro Soto Reyes y Waldemar José Cerrón Rojas para la aprobación y publicación de esta norma, la congresista Ruth Luque Ibarra en su cuenta de "X" (anteriormente twitter.com) hizo público como se dio trámite a pedidos de reconsideración planteados en otros casos en el congreso de la República:

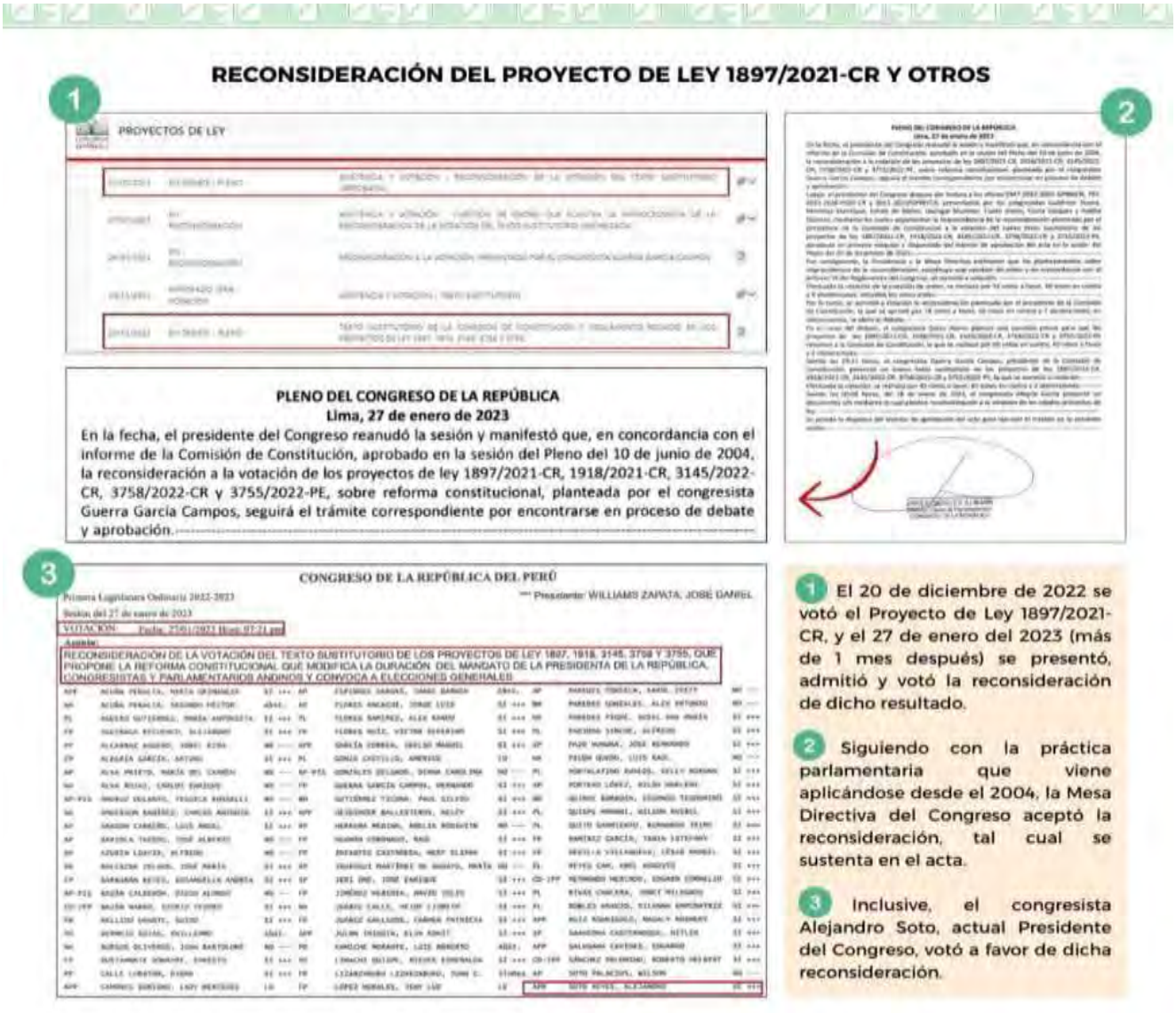
"***Frente a la no votación de la reconsideración de las modificaciones a la Ley de Flora y Fauna Silvestre y lo manifestado por el Presidente del @congresoperu. Debo señalar que dicha afirmación no es correcta y existen precedentes legislativos. Aquí lo explico:***

Hasta la fecha se admiten y votan reconsideraciones, tomando como base fundamentos en el informe de la Comisión de Constitución aprobado en sesión del Pleno el 10-06-2004.

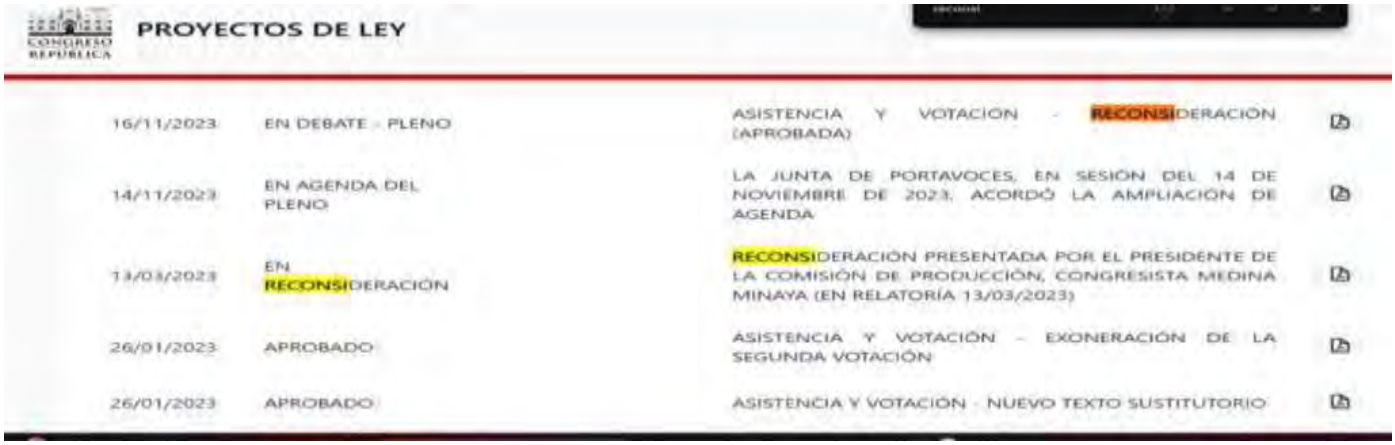
Ese fue, por ejemplo el caso de la reconsideración planteada por el Congresista Hernando Guerra García el 27-01-23 contra la primera

votación de los Proyectos de Ley 1897, 1918, 3145, 3758 y 3755/2021-CR que proponen "Ley de reforma constitucional que dispone el adelanto de elecciones generales al 2023 y el referéndum consultivo de convocatoria a asamblea popular constituyente" que se realizó el 20-12-22, <u>es decir 38 días después.</u>

Asimismo, el 27-01-23 la Dirección General Parlamentaria del Congreso suscribió un documento que da cuenta de que la justificación del Presidente del Congreso para someter a votación la reconsideración planteada por el congresista Guerra García es informe de la Comisión de Constitución, aprobado en la sesión del Pleno del 10-06-04.



También tenemos el caso de la reconsideración planteada en el proyecto de ley N.° 1296/2021-CR que propone la "Ley que crea el registro nacional de emolienteros tradicionales del Perú como expendedores de bebidas nutritivas y saludables". En ese caso, la reconsideración se presentó el 13-03-2023 contra la votación de la exoneración de segunda votación que se realizó el 26-01-23, es decir cerca de 46 días después. expendedores de bebidas nutritivas y saludables". Y Sr. Presidente @AlejandroSotoRe la votación de la reconsideración extraordinaria se realizó en su gestión del presidente el 16-11-23.



PROYECTOS DE LEY

16/11/2023	EN DEBATE - PLENO	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - RECONSIDERACIÓN (APROBADA)
14/11/2023	EN AGENDA DEL PLENO	LA JUNTA DE PORTAVOCES, EN SESIÓN DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023, ACORDÓ LA AMPLIACIÓN DE AGENDA
13/03/2023	EN RECONSIDERACIÓN	RECONSIDERACIÓN PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, CONGRESISTA MEDINA MINAYA (EN RELATORÍA 13/03/2023)
26/01/2023	APROBADO	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN
26/01/2023	APROBADO	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - NUEVO TEXTO SUSTITUTORIO

RECONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 1296/2021-CR



PROYECTOS DE LEY

16/11/2023	EN DEBATE - PLENO	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - RECONSIDERACIÓN (APROBADA)
14/11/2023	EN AGENDA DEL PLENO	LA JUNTA DE PORTAVOCES, EN SESIÓN DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023, ACORDÓ LA AMPLIACIÓN DE AGENDA
13/03/2023	EN RECONSIDERACIÓN	RECONSIDERACIÓN PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, CONGRESISTA MEDINA MINAYA (EN RELATORÍA 13/03/2023)
26/01/2023	APROBADO	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN
26/01/2023	APROBADO	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - NUEVO TEXTO SUSTITUTORIO
05/01/2023	EN AGENDA DEL PLENO	TEXTO SUSTITUTORIO DE LA COMISION DE PRODUCCIÓN

Siguiendo la práctica parlamentaria vigente desde el 2004, el Congreso, bajo la presidencia del congresista Alejandro Soto, votó la reconsideración del Proyecto de Ley 1296/2021-CR. Este proyecto de ley se votó el 5 de enero de 2023. Dos meses después, el 13 de marzo de 2023, se presentó y admitió la reconsideración de dicho resultado, y ocho meses después, el 16 de noviembre de 2023, fue votada la reconsideración.

Asimismo, tenemos el caso de la reconsideración planteada en el proyecto de ley N° 1439/2021-CR que proponía la "Nueva ley del artesano y desarrollo de la actividad artesanal". En ese caso, la reconsideración se presentó el 17-02-23 contra la exoneración de segunda votación que se realizó el 05-01-23, es decir cerca de 43 días después, y pese a ello fue sometida a votación:



PROYECTOS DE LEY

PROYECTO DE LEY 1439 Y OTROS

11/05/2023	EN DEBATE - PLENO	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - RECONSIDERACIÓN DE VOTACIÓN DEL TEXTO SUSTITUTORIO (APROBADA)
17/02/2023	EN RECONSIDERACIÓN	RECONSIDERACIÓN A LA VOTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 1439 Y OTROS, PRESENTADA POR LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE COMERCIO EXTERIOR Y DE PRODUCCIÓN
05/01/2023	APROBADO	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN
05/01/2023	APROBADO 1ERA. VOTACIÓN	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - TEXTO SUSTITUTORIO
05/01/2023	EN DEBATE - PLENO	TEXTO SUSTITUTORIO DE LA COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

RECONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 1439/2021-CR



PROYECTOS DE LEY

11/05/2023	EN DEBATE - PLENO	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - RECONSIDERACIÓN DE VOTACIÓN DEL TEXTO SUSTITUTORIO (APROBADA)
17/02/2023	EN RECONSIDERACIÓN	RECONSIDERACIÓN A LA VOTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 1439 Y OTROS, PRESENTADA POR LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE COMERCIO EXTERIOR Y DE PRODUCCIÓN
05/01/2023	APROBADO	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN
05/01/2023	APROBADO 1ERA. VOTACIÓN	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - TEXTO SUSTITUTORIO
05/01/2023	EN DEBATE - PLENO	TEXTO SUSTITUTORIO DE LA COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Proyecto de Ley 1439/2021-CR - El 5 de enero de 2023 se votó el proyecto de ley, y más de un mes después, el 17 de febrero de 2023 se presentó y admitió la reconsideración de dicho resultado, la cual se votó y aprobó el 11 de mayo de 2023.

Como resulta evidente la RECONSIDERACIÓN planteada a los proyectos de Ley 649, 849 y 2315/2021-CR, que proponen la "Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre" DEBIÓ votarse, pues se presentaron antes de la ejecución del acuerdo. Se ha decidido violar el procedimiento y es lamentable que hoy se decida alejarse de prácticas parlamentarias que en otros casos si se aplicaron e incluso se defendieron, pero hoy dicen lo contrario. Lo que debería explicarse es por qué decidieron alejarse de la práctica y procedimiento parlamentario. @congresoperu @RPPNoticias @MinamPeru".

22. La ausencia de votación de las reconsideraciones advierten serios cuestionamientos de las conductas del presidente del congreso Alejandro Soto Reyes y del segundo Vicepresidente Waldemar José Cerrón Rojas, ya que el Reglamento del Congreso establece que en todo proceso ordinario las reconsideraciones deben ser sometidas a votación en el Pleno del Congreso antes de continuar el proceso legislativo, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 58° del Reglamento del Congreso de la República, que precisa:

> ***CLASES DE VOTACIONES***
>
> *Art. 58°.- (…) Las reconsideraciones se presentan por escrito luego de las votaciones y su aprobación requiere el voto de más de la mitad del número legal de Congresistas. No proceden los pedidos de reconsideración sobre una reconsideración previamente votada, con excepción del pedido que presenten por una sola vez los voceros de los grupos parlamentarios que representen a los 3/5 del número legal de Congresistas, los que para su aprobación requieren el voto de los 2/3 del número legal de Congresistas. No se puede presentar reconsideraciones después de aprobada el acta o de la dispensa de dicha aprobación. (…)*

23. Esta iniciativa legislativa que venía siendo promovida desde hace dos años atrás, fue observada por diversas instituciones como son la Defensoría del Pueblo, los Ministerios de Agricultura, Ministerio del Ambiente, así como el SERFOR, de tal manera que el Ejecutivo observó en el 2022 dicha propuesta legislativa y devolvió al Congreso

para su revisión. Desde la sociedad civil se realizaron pronunciamientos y alertas sobre esta iniciativa y las organizaciones indígenas expresaron su rechazo ante dicha norma recordando que la Ley Forestal fue aprobada luego de un amplio proceso de consulta previa a los pueblos indígenas y cualquier modificación debería respetar sus derechos colectivos, lo que era de conocimiento de los ahora denunciados y debieron primar el respeto al debido proceso y al principio de transparencia en el ejercicio de las funciones otorgadas como presidente y segundo vicepresidente del congreso por sobre el interés económico de un grupo de empresas.

24. Como podrá observarse, los congresistas Alejandro Soto Reyes y Waldemar José Cerrón Rojas, ahora denunciados, infringieron el Reglamento del Congreso, al no tramitar el procedimiento de las reconsideraciones planteadas por las congresistas Ruth Luque Ibarra y Susel Ana María Paredes Piqué, para aprobar una norma que generará una deforestación ilegal a gran escala y servirá de manto de impunidad en casos administrativos y penales que actualmente están en trámite por tala ilegal. Ello, evidencia la comisión de un ilícito, por la APROBACIÓN de una Ley sin el debido cumplimiento normativo.

25. El ilícito penal en cuestión, es atribuido a funcionario público que en ejercicio de sus funciones realiza determinada conducta ilícita tipificada en nuestro ordenamiento jurídico, en este caso los denunciados Alejandro Soto Reyes y Waldemar José Cerrón Rojas en sus condiciones de Presidente y Segundo Vicepresidente del Congreso, desconociendo no solo el Reglamento del Congreso respecto a las reconsideraciones planteadas por dos congresistas que debieron exponerse en nueva votación, sino que conocían perfectamente de la oposición social y de los informes técnicos de las

entidades especializadas que coincidieron en señalar que la aprobación de la norma seria lesiva y generaría una masiva deforestación de los bosques en detrimento del patrimonio forestal de la nación, éste APROBO la ley en cuestión, ya que no consideró los estándares ambientales que debieron considerarse previos a la aprobación de la ley en contra de los intereses de la Sociedad y El Estado al verse afectado el patrimonio forestal de la Nación.

26. En tal sentido, la promulgación de la Disposición Complementaria Final Única de la Autógrafa de la Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal; convalida y legaliza de manera inconstitucional la deforestación de los bosques amazónicos cometida por personas naturales y jurídicas hasta antes de la promulgación de la citada Autógrafa de Ley y, fomentará que los propietarios y poseedores de predios ubicados en la Amazonia deforesten los bosques que se encuentran en dichas tierras sin necesidad de contar con los estudios pertinentes y sin contar con la aprobación de las autoridades competentes, lo cual va a generar de manera indudable la deforestación de nuestros bosques amazónicos, contraviniendo el texto expreso de la Constitución y la Ley, generándose una amenaza cierta y eminente al Derecho Fundamental a Gozar de un Ambiente Equilibrado y Adecuado para el Desarrollo de la Vida.

III. <u>FUNDAMENTOS DE DERECHO</u>:

1. Nuestro país tiene en su normativa constitucional el precepto de que toda persona tiene el derecho fundamental "a gozar de un ambiente

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida" (inciso 22, artículo 2 de la Constitución Política del Perú).

2. **El Tribunal Constitucional,** máxime intérprete de nuestra Constitución **ha dejado sentado que este derecho fundamental exige a todos los órganos del aparato estatal la obligación ineludible de proteger el medio ambiente y sus componentes,** en las condiciones adecuadas para garantizar la existencia de la persona en un ambiente sano, ya que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad (artículo 1 de la Constitución Política del Perú).

3. El Derecho Penal no puede estar ajeno a lo que hoy en día cobra mayor relevancia como es la protección del "medio ambiente"; bien jurídico protegido por esta rama del Derecho. Asimismo, a pesar de las posibles deficiencias, vacíos o complejidades que pueda presentar los tipos penales del Título XIII del libro segundo del Código Penal, denominados Delitos Ambientales conviene exaltar la intención del legislador para tipificar algunas conductas que atentan este bien jurídico, pues el medio ambiente y sus componentes están siendo tutelados ante posibles amenazas o riesgos creados por la actividad humana que puedan alterarla o dañarla.

4. Actualmente, el mundo y en especial nuestro país sufre grandes problemas ambientales, el cambio climático, deforestación, destrucción de la capa de ozono, contaminación del suelo, aire y agua, ruido, mal manejo de residuos sólidos, extinción de bosques, depredación de flora, fauna y recursos genéticos, entre otros, que afectan a la colectividad sin distinción alguna; así pues, el Derecho Penal juega un rol trascendental en la defensa del bien jurídico del medio ambiente.

5. En cuanto a la responsabilidad penal esta recae sobre el sujeto activo, siendo persona natural o persona jurídica y el sujeto pasivo es quien se ha visto perjudicado por la comisión del delito ambiental (Estado y Sociedad); puede ser un número determinado de personas o un **número indeterminado de personas, es decir la colectividad.**

<u>Fundamentación Jurídica</u>

A. DENUNCIA CONSTITUCIONAL POR INFRACCION DE LOS ARTÍCULOS 38°, 66°, 67° 68° y 69° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

1. La presente denuncia constitucional se plantea en mérito a lo dispuesto a los artículos 99° y 100° de la Constitución Política del Perú, que a la letra señalan:

> ***Artículo 99°.-*** *Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.*
>
> ***Artículo 100°.-*** *Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente.*

2. Esta denuncia se formula en clara infracción de los artículos de la Constitución Política del Perú 38°, 66°, 67°, 68° y 69°, que precisan:

Artículo 38°.- *Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.*

Artículo 66°.- *Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.*

Artículo 67°.- *El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.*

Artículo 68°.- *El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.*

Artículo 69°.- *El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada.*

3. La normatividad constitucional infringida claramente protege los recursos naturales de nuestro país considerados patrimonio de la nación, por ello la norma aprobada es atentatoria contra los intereses de toda la nación.

B. DELITO AMBIENTAL – RESPONSABILIDAD FUNCIONAL E INFORMACIÓN FALSA – RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO POR OTORGAMIENTO ILEGAL DE DERECHOS

1. Por otro lado, el delito de Responsabilidad Funcional e Información tipificado en el artículo 314 del Código Penal precisa:

El funcionario público que sin observar leyes, reglamentos, estándares ambientales vigentes, por haber faltado gravemente a sus obligaciones funcionales, autoriza el otorgamiento, renovación o cancelación de autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante en favor de la obra o actividad a que se refiere el presente Título, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de siete años, e inhabilitación de un año a siete años conforme al artículo 36 incisos 1, 2 y 4. El servidor público que sin observar leyes,

reglamentos, estándares ambientales vigentes se pronuncia favorablemente en informes u otro documento de gestión sobre el otorgamiento, renovación o cancelación de autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante en favor de la obra o actividad a que se refiere el presente Título, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de siete años, e inhabilitación de un año a siete años conforme al artículo 36 incisos 1, 2 y 4.

La misma pena será para el funcionario público competente para combatir las conductas descritas en el presente Título y que, por negligencia inexcusable o por haber faltado gravemente a sus obligaciones funcionales, facilite la comisión de los delitos previstos en el presente Título.

2. Ahora bien, el delito imputado es el Delito Ambiental – Responsabilidad Funcional e Información Falsa – Responsabilidad de Funcionario Público por Otorgamiento Ilegal de Derechos, es decir, el sujeto activo es un funcionario público, ahora bien los denunciados congresistas de la nación Alejandro Soto Reyes y Waldemar José Cerrón Rojas, son funcionarios públicos conforme lo estipula el artículo 21 del Reglamento del Congreso, que indica:

Artículo 21. Los Congresistas son funcionarios públicos al servicio de la Nación. No están comprendidos en la carrera administrativa, salvo en las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo 276, en lo que les fuera aplicable. No pueden ejercer los derechos de sindicación y huelga.

3. La conducta del agente (congresistas denunciados), según el título XIII, se adecua al tipo penal porque actúa contrariando las normas administrativas, leyes, límites máximos permisibles **u obviando autorización, permiso, concesión, certificado o cualquier tipo otorgado por la autoridad administrativa,** quien establecerá el incumplimiento de las mismas, siendo en este

caso que los denunciados pese a conocer los informes de los entes administrativos que coincidían en calificar a la norma como lesiva y que conforme a los términos plasmados en esta ley se legalizaría y/o formalizaría actividades desarrolladas de manera ilegal, trayendo consigo la impunidad (en el ámbito administrativo y penal) de quienes han desarrollado actividades sin contar con autorización alguna emitida por las autoridades administrativas correspondientes.

IV. MEDIOS DE PRUEBA

1. **La declaración de la Congresista Susel Ana María Paredes Piqué,** quien brindará los detalles de la reconsideración planteada contra la aprobación de la ley cuestionada.

2. **La declaración de la Congresista Ruth Luque Ibarra,** quien brindará los detalles de la reconsideración planteada contra la aprobación de la ley cuestionada y además presentará pruebas de cargo relacionadas a procedimientos regulares de reconsideraciones planteadas para la aprobación de otras leyes durante el ejercicio de las funciones de los denunciados miembros de la Mesa Directiva del Congreso de la República.

3. **Declaración de Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez, Oficial Mayor del Congreso,** (mencionado por el denunciado Alejandro Soto Reyes), quien deberá informar si las reconsideraciones planteadas fueron extemporáneas conforme descargó el citado denunciado.

4. **El link de la página web** sobre la publicación de la congresista Ruth Luque Ibarra que resalta los procesos de aprobación de leyes con

reconsideraciones planteadas que fueron admitidas por la mesa directiva del Congreso de la República del año próximo pasado 2023 https://x.com/RuthLuqueIbarra/status/1745879612486283286?s=20

5. **El link de la publicación** relacionada al análisis realizado por la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente https://epicentro.tv/tres-mil-casos-irian-al-archivo-por-ley-deforestar/

6. **Informe INFTEC N°D00003-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA-NCA del 15.07.2022** formulado por Natalia Curi Ayala, Abogada en Derecho Ambiental perteneciente a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR.

7. **Oficio N°250-2022-PR del 08.08.2022** suscrito por Pedro Castillo Terrones y Aníbal Torres Vásquez, ex Presidente de la República y ex Presidente del Consejo de Ministros respectivamente.

8. **Oficio N°0235-2022-DP del 27.08.2022** de la Defensoría del Pueblo dirigida al Congreso de la República.

9. **Carta del 03.11.2022** remitida por Graciela K. Reátegui Mori, Presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes al Congreso de la República.

10. **Carta N°0087-2022/ONAMIAP/LIMA del 24.11.2022,** remitida por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú al Congreso de la República.

11. **Carta del 23.11.2022** remitida por Wilfredo Tsamash Cabrera, Presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Kichwa de San Martín.

12. **Carta N°202-2022-DAR/DE del 28.11.2022** remitida por Cesar Gamboa Balvín, Director Ejecutivo de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales al Congreso de la República, adjuntando el pronunciamiento de diversas organizaciones indígenas y de la sociedad civil con más de 90 adhesiones que solicitan el archivo de la propuesta de modificación de la ley en cuestión.

13. **Carta del 23.03.2023** remitida por Lucila Pautrat Oyarzún, Presidente de Kené, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, dirigida a la Presidenta de la Comisión Agraria del Congreso de la República, solicitando la abstención de sustentar y solicitar la aprobación del Dictamen de Insistencia ante las observaciones del Presidente de la República a la Autógrafa recaída en el Proyecto de Ley N° 649/2021-CR, 89412021-CR y 2315/2021-CR con texto sustitutorio que Modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la Zonificación Forestal"

14. **Carta N°012-2023-CNA/CEN del 29.03.2023** remitida por Rosalia Clemente Tacsa, Presidente de la Confederación Nacional Agraria al Congreso de la República.

15. **Carta N°018-2023/PRESIDENTE-OBS del 13.04.2023,** remitido por Oseas Barbarán Sánchez, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú al Congreso de la República.

16. **Carta del 13.01.2023,** remitido por la CONFIEP al Presidente del Congreso.

17. **Carta del 04.01.2024** remitida por Teófilo Kukush Pati, representante del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wanpis al Congreso de la República.

18. **Carta del 09.01.2024** remitida por representantes de diversas organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas u Originarios al Congreso de la República.

19. **Carta del 09.01.2024,** remitida por la Confederación Nacional Agraria al Congreso de la República.

V. ANEXOS

1. Impresión de la información publicada en el link https://x.com/RuthLuqueIbarra/status/1745879612486283286?s=20

2. Impresión de la información publicada en el link https://epicentro.tv/tres-mil-casos-irian-al-archivo-por-ley-deforestar/

3. Copia fotostática simple del Informe INFTEC N°D00003-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA-NCA del 15.07.2022 formulado por Natalia Curi Ayala, Abogada en Derecho Ambiental perteneciente a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR.

4. Copia fotostática simple del Oficio N°250-2022-PR del 08.08.2022 suscrito por Pedro Castillo Terrones y Aníbal Torres Vásquez, ex Presidente de la República y ex Presidente del Consejo de Ministros respectivamente.

5. Copia fotostática simple del Oficio N°0235-2022-DP del 27.08.2022 de la Defensoría del Pueblo dirigida al Congreso de la República.

6. Copia fotostática simple del Carta del 03.11.2022 remitida por Graciela K. Reátegui Mori, Presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes al Congreso de la República.

7. Copia fotostática simple del Carta N°0087-2022/ONAMIAP/LIMA del 24.11.2022, remitida por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú al Congreso de la República.

8. Copia fotostática simple del Carta del 23.11.2022 remitida por Wilfredo Tsamash Cabrera, Presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Kichwa de San Martín.

9. Copia fotostática simple del Carta N°202-2022-DAR/DE del 28.11.2022 remitida por Cesar Gamboa Balvín, Director Ejecutivo de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales al Congreso de la República, adjuntando el pronunciamiento de diversas organizaciones indígenas y de la sociedad civil con más de 90 adhesiones que solicitan el archivo de la propuesta de modificación de la ley en cuestión.

10. Copia fotostática simple del Carta del 23.03.2023 remitida por Lucila Pautrat Oyarzún, Presidente de Kené, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, dirigida a la Presidenta de la Comisión Agraria del Congreso de la República, solicitando la abstención de sustentar y solicitar la aprobación del Dictamen de Insistencia ante las observaciones del Presidente de la República a la Autógrafa recaída en el Proyecto de Ley N° 649/2021-CR, 89412021-CR y 2315/2021-CR

con texto sustitutorio que Modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la Zonificación Forestal"

11. Copia fotostática simple del Carta N°012-2023-CNA/CEN del 29.03.2023 remitida por Rosalia Clemente Tacsa, Presidente de la Confederación Nacional Agraria al Congreso de la República.

12. Copia fotostática simple del Carta N°018-2023/PRESIDENTE-OBS del 13.04.2023, remitido por Oseas Barbarán Sánchez, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú al Congreso de la República.

13. Copia fotostática de la Carta del 13.01.2023, remitido por la CONFIEP al Presidente del Congreso

14. Copia fotostática simple del Carta del 04.01.2024 remitida por Teófilo Kukush Pati, representante del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wanpis al Congreso de la República.

15. Copia fotostática simple del Carta del 09.01.2024 remitida por representantes de diversas organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas u Originarios al Congreso de la República.

16. Copia fotostática simple del Carta del 09.01.2024, remitida por la Confederación Nacional Agraria al Congreso de la República.

POR TANTO:

A Ud. Señor Presidente de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, solicitamos se sirva tramitar la presente de conformidad a la normativa vigente.

OTROSI DIGO: Que, adjunto los datos de mis abogados Gino Giancarlo Dagnino Arriaran con Reg. CAL 26758, **celular 999 839 98**, correo electrónico ggdagnino@gmail.com y Luis Andrés Siesquen Ampuero con Reg. CAL 68869, celular **982903935**, correo electrónico siesquen1101@gmail.com y señalo domicilio procesal en la Casilla Electrónica N°**48255**, ambos con domicilio procesal en Calle José Domingo Orué N°231 Miraflores, a fin que se hagan llegar todas las notificaciones de Ley.

Lima, 19 de enero del 2024

GINO DAGNINO ARRIARÁN
Abogado
Reg. CAL N° 26758

LUIS A. SIESQUEN AMPUERO
ABOGADO
C.A.L. 68869

ANGELA LUCILA PAUTRAT OYARZUN
DNI N°09670957

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DEL PERÚ REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI

CUI
09670957-4

Primer Apellido
PAUTRAT

Segundo Apellido
OYARZUN

Prenombres
ANGELA LUCILA

Sexo
FEMENINO

Estado Civil
SOLTERA

1000368860

Fecha de Nacimiento
02 09 1971

Ubigeo de Nacimiento
140133

Fecha de Emisión
17 08 2017

Fecha de Caducidad
17 08 2025

Grupo de Votación
231850

Donación de Órganos
SI

09670957



Certificado de Sufragio | Constancia de Sufragio | Constancia de Sufragio

Departamento/Provincia/Distrito
LIMA/LIMA/SAN ISIDRO

Dirección
CALLE LOS CIPRESES 225

Jefe Nacional

Índice Derecho

I<PER09670957<7<<<<<<<<<<<<<<<
7109027F2508175PER<<<<<<<<<<<8
PAUTRAT<<ANGELA<LUCILA<<<<<<<<

Escaneado con CamScanner

ANEXO

01

29

← Post

Ruth Luque
@RuthLuqueIbarra

Frente a la no votación de la reconsideración de las modificaciones a la Ley de Flora y Fauna Silvestre y lo manifestado por el Presidente del @congresoperu. Debo señalar que dicha afirmación no es correcta y existen precedentes legislativos. Aquí lo explico: 🧵1/4

Hasta la fecha se admiten y votan reconsideraciones, tomando como base fundamentos en el informe de la Comisión de Constitución aprobado en sesión del Pleno el 10-06-2004.

Ese fue, por ejemplo el caso de la reconsideración planteada por el Congresista Hernando Guerra García el 27-01-23 contra la primera votación de los Proyectos de Ley 1897, 1918, 3145, 3758 y 3755/2021-CR que proponen "Ley de reforma constitucional que dispone el adelanto de elecciones generales al 2023 y el referéndum consultivo de convocatoria a asamblea popular constituyente" que se realizó el 20-12-22, es decir 38 días después.

Asimismo, el 27-01-23 la Dirección General Parlamentaria del Congreso suscribió un documento que da cuenta de que la justificación del Presidente del Congreso para someter a votación la reconsideración planteada por el congresista Guerra García es informe de la Comisión de Constitución, aprobado en la sesión del Pleno del 10-06-04.

Escaneado con CamScanner

RECONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 1897/2021-CR Y OTROS

1

PROYECTOS DE LEY

PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Lima, 27 de enero de 2023

En la fecha, el presidente del Congreso reanudó la sesión y manifestó que, en concordancia con el informe de la Comisión de Constitución, aprobado en la sesión del Pleno del 10 de junio de 2004, la reconsideración a la votación de los proyectos de ley 1897/2021-CR, 1918/2021-CR, 3145/2022-CR, 3758/2022-CR y 3755/2022-PE, sobre reforma constitucional, planteada por el congresista Guerra García Campos, seguirá el trámite correspondiente por encontrarse en proceso de debate y aprobación.----------

2

3

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Primera Legislatura Ordinaria 2022-2023

Sesión del 27 de enero de 2023

VOTACIÓN Fecha: 27/01/2023 Hora: 07:21 pm

Asunto:

RECONSIDERACIÓN DE LA VOTACIÓN DEL TEXTO SUSTITUTORIO DE LOS PROYECTOS DE LEY 1897, 1918, 3145, 3758 Y 3755, QUE PROPONE LA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LA DURACIÓN DEL MANDATO DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, CONGRESISTAS Y PARLAMENTARIOS ANDINOS Y CONVOCA A ELECCIONES GENERALES

1 El 20 de diciembre de 2022 se votó el Proyecto de Ley 1897/2021-CR, y el 27 de enero del 2023 (más de 1 mes después) se presentó, admitió y votó la reconsideración de dicho resultado.

2 Siguiendo con la práctica parlamentaria que viene aplicándose desde el 2004, la Mesa Directiva del Congreso aceptó la reconsideración, tal cual se sustenta en el acta.

3 Inclusive, el congresista Alejandro Soto, actual Presidente del Congreso, votó a favor de dicha reconsideración.

Escaneado con CamScanner

21

← Post

Ruth Luque
@RuthLuqueIbarra

2/4 También tenemos el caso de la reconsideración planteada en el proyecto de ley N.° 1296/2021-CR que propone la "Ley que crea el registro nacional de emolienteros tradicionales del Perú como expendedores de bebidas nutritivas y saludables". En ese caso, la reconsideración se presentó el 13-03-2023 contra la votación de la exoneración de segunda votación que se realizó el 26-01-23, es decir cerca de 46 días después. expendedores de bebidas nutritivas y saludables". Y Sr. Presidente @AlejandroSotoRe la votación de la reconsideración extraordinaria se realizó en su gestión del presidente el 16-11-23.

PROYECTOS DE LEY

16/11/2023	EN DEBATE - PLENO	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - RECONSIDERACIÓN (APROBADA)
14/11/2023	EN AGENDA DEL PLENO	LA JUNTA DE PORTAVOCES, EN SESIÓN DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023, ACORDÓ LA AMPLIACIÓN DE AGENDA
13/03/2023	EN RECONSIDERACIÓN	RECONSIDERACIÓN PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, CONGRESISTA MEDINA MINAYA (EN RELATORÍA 13/03/2023)
26/01/2023	APROBADO	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN
26/01/2023	APROBADO	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - NUEVO TEXTO SUSTITUTORIO

RECONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 1296/2021-CR

PROYECTOS DE LEY

16/11/2023	EN DEBATE - PLENO	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - RECONSIDERACIÓN (APROBADA)
14/11/2023	EN AGENDA DEL PLENO	LA JUNTA DE PORTAVOCES, EN SESIÓN DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023, ACORDÓ LA AMPLIACIÓN DE AGENDA
13/03/2023	EN RECONSIDERACIÓN	RECONSIDERACIÓN PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, CONGRESISTA MEDINA MINAYA (EN RELATORÍA 13/03/2023)
26/01/2023	APROBADO	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN
26/01/2023	APROBADO	ASISTENCIA Y VOTACIÓN - NUEVO TEXTO SUSTITUTORIO
05/01/2023	EN AGENDA DEL PLENO	TEXTO SUSTITUTORIO DE LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN

Siguiendo la práctica parlamentaria vigente desde el 2004, el Congreso, bajo la presidencia del congresista Alejandro Soto, votó la reconsideración del Proyecto de Ley 1296/2021-CR. Este proyecto de ley se votó el 5 de enero de 2023. Dos meses después, el 13 de marzo de 2023, se presentó y admitió la reconsideración de dicho resultado, y ocho meses después, el 16 de noviembre de 2023, fue votada la reconsideración.

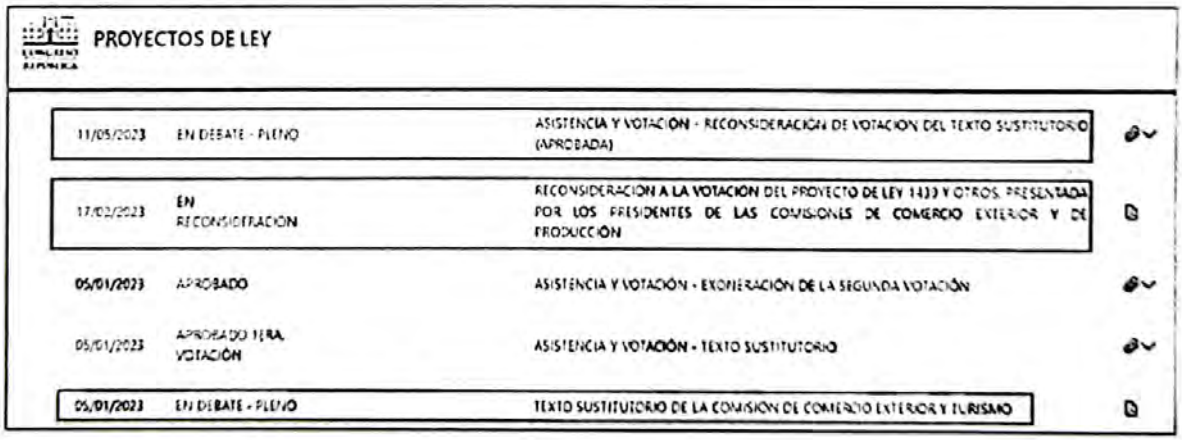
Escaneado con CamScanner

Ruth Luque
@RuthLuqueIbarra

3/4 Asimismo, tenemos el caso de la reconsideración planteada en el proyecto de ley N.° 1439/2021-CR que proponía la "Nueva ley del artesano y desarrollo de la actividad artesanal". En ese caso, la reconsideración se presentó el 17-02-23 contra la exoneración de segunda votación que se realizó el 05-01-23, es decir cerca de 43 días después, y pese a ello fue sometida a votación:



RECONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 1439/2021-CR



Proyecto de Ley 1439/2021-CR - El 5 de enero de 2023 se votó el proyecto de ley, y más de un mes después, el 17 de febrero de 2023 se presentó y admitió la reconsideración de dicho resultado, la cual se votó y aprobó el 11 de mayo de 2023.

Escaneado con CamScanner

Ruth Luque
@RuthLuqueIbarra

4/4 Como resulta evidente la RECONSIDERACIÓN planteada a los proyectos de Ley 649, 849 y 2315/2021-CR, que proponen la "Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre" DEBIÓ votarse, pues se presentaron antes de la ejecución del acuerdo. Se ha decidido violar el procedimiento y es lamentable que hoy se decida alejarse de practicas parlamentaria que en otros casos si se aplicaron e incluso se defendieron, pero hoy dicen lo contrario. Lo que debería explicarse es por qué decidieron alejarse de la práctica y procedimiento parlamentario. @congresoperu @RPPNoticias @MinamPeru

1:45 p. m. · 12 ene. 2024 · **3.022** Reproducciones

36 79 1

Escaneado con CamScanner

ANEXO

02

Tres mil casos irían al archivo por Ley "Deforestar"

Daniel Yovera
16 de enero de 2024 — 3 minutos de lectura



Un análisis preliminar de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente alerta sobre el otro efecto de la alteración de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que firmaron la semana pasada el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y el primer vicepresidente, Waldemar Cerrón. Investigados y procesados por deforestar los bosques sin autorización serían los primeros beneficiados.

Escaneado con CamScanner

tendrá un "impacto significativo" en la marcha de por lo menos 3 mil denuncias por delitos forestales que se encuentran en etapa de investigación, en la Fiscalía, y de procesamiento, en el Poder Judicial.

De acuerdo con lo que ha podido conocer Epicentro Tv, la entidad de defensa de los intereses del Estado en materia ambiental se encuentra analizando cómo el cambio de la ley, dispuesto por el presidente y el primer vicepresidente del Congreso, Alejandro Soto y Waldemar Cerrón, respectivamente, afectará a los casi 10 mil mil procesos vigentes en la actualidad. De momento, tiene claro que habrá perjuicio en 3 mil procesos, que se encuentran tanto en etapa de investigación preliminar y preparatoria, a nivel de fiscalías ambientales, penales y de criminalidad organizada, y en etapa de juzgamiento.

Todos esos casos se irían al archivo.

En la actualidad existen cerca de 10 mil casos abiertos en fiscalías y juzgados de todo el país, por "delitos contra los bosques o formaciones boscosas", ejecutados sin ningún tipo de autorización, sancionados por el artículo 310 del Código Penal. De todos ellos, la norma modificada impactaría con mayor fuerza e inmediatez en al menos 3 mil.

De éstos, hay casos que son emblemáticos por el tamaño de la deforestación –aquellos de más de 4 mil hectáreas– y son, de acuerdo con esta información, los casos fiscales "Melka" y "Menonitas", en Ucayali, y "Tamshi", en Loreto.

El caso "Melka", además, es investigado por presunta organización criminal en la capital peruana por la Fiscalía contra el Crimen Organizado a cargo del fiscal Álvaro Rodas.

Te puede interesar:

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



Si bien son funcionarios públicos o personas vinculadas al negocio industrial de la palma aceitera y el cacao quienes se encuentran bajo investigación, la modificatoria de la norma también podría alcanzar a quienes deforestaron bosques para iniciar actividades de minería ilegal, cultivos ilícitos, ganadería, agricultura migratoria, tráfico de tierras, entre otras.

El 10 de enero pasado Soto y Cerrón aprobaron por insistencia la "Ley que modifica la Ley 29763", Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El quid del cambio está en la única disposición complementaria final, que dice:

"Los predios privados que cuenten con títulos de propiedad o constancias de posesión emitidas por la autoridad competente con anterioridad a la vigencia de la presente ley o que se encuentren dentro de los alcances de la Ley 31145, Ley de Saneamiento Físico Legal y Formalización de Predios Rurales a Cargo de los Gobiernos Regionales, que no contengan masa boscosa y que desarrollen actividad agropecuaria, son considerados, de manera excepcional, como áreas de exclusión para fines agropecuarios y por tanto están exceptuados de realizar su clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, así como también

Escaneado con CamScanner

La disposición se refiere exclusivamente a los "predios privados" que ya tienen título de propiedad o constancia de posesión y que ya no tienen "masa boscosa", debido a que la misma fue talada sin autorización. Estos predios tienen, ahora, actividad agropecuaria y quedan fuera del alcance del artículo 38 de la Ley 29763, la Ley Forestal original.

Los propietarios o posesionarios de los predios favorecidos con la modificación de la ley, ya no tienen por qué preocuparse por el artículo 38, que disponía de manera primigenia:

"Cuando exista cobertura boscosa en tierras de dominio público técnicamente clasificadas como de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes, según el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, el Serfor puede autorizar su cambio de uso actual a fines agropecuarios, respetando la zonificación ecológico-económica, de nivel medio o superior, aprobada por el gobierno regional o gobierno local correspondiente, y previa opinión vinculante del Ministerio del Ambiente de acuerdo al procedimiento administrativo que aprueben ambas autoridades para tal fin.

Autorizado el cambio de uso actual para realizar el retiro de la cobertura boscosa, se procede según lo establecido en el artículo referido a desbosque en lo que corresponda.

En los casos de predios privados cuya cobertura vegetal actual contenga masa boscosa, el cambio de uso requiere autorización de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre sustentado en un estudio técnico de microzonificación".

Con el cambio en la ley, el Ministerio del Ambiente no emitirá ninguna opinión vinculante para cambiar el uso del suelo y su función quedará de lado, y el que taló sin permiso ya no requerirá de ninguna autorización del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para deforestar.

Deforestar" del Congreso.

Compartir



La plataforma global de e-commerce está en Perú |

Únete a Shopify y opera tu negocio a escala global

shopify

Pruébalo por 30 días



Próximo post

De defensor de un homicida a defensor del Pueblo en Huánuco

Anterior post

Pedro Castillo y sus ministros en jaque



Escaneado con CamScanner

Epicentro

Contenido de interés



Emergencia ambiental en Huancavelica | Entradas a Machu Picchu | Lluvias en Huánuco



Contraloría detecta presunta responsabilidad penal en Yarrow y Moyano



La distancia que nos separa del Congreso



¿Nuevo salvataje en Petroperú?



¿Licencias personales o vacaciones parlamentarias?



Ley forestal fue promulgada por el Congreso pese a reconsideraciones

Escaneado con CamScanner

Epicentro

Facebook

Twitter

Anuncia en Epicentro

Noticias Perú. Investigación. Política. Periodismo independiente. Análisis. Epicentro TV.

© Epicentro TV 2024

Escaneado con CamScanner

ANEXO

03

Firmado digitalmente por CURI AYALA Natalia FAU 20562836927 soft
Cargo: Abogada En Drecho Ambiental
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.07.2022 16:57:15 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun"

Magdalena Del Mar, 15 de Julio del 2022

INFTEC N° D000003-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA-NCA

A	:	**Dave Gregory Pogois Loayza** Director General Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
ASUNTO	:	Remite opinión sobre los proyectos de Ley N° 649/2021-CR y 894/2021-CR
REFERENCIA	:	Memo Mult. N° D000012-2022-MIDAGRI-DE

I. ANTECEDENTES:

1.1. Mediante Memo Mult N° D000012-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE de fecha 13 de julio de 2022, la Dirección Ejecutiva del SERFOR, solicitó, entre otros, a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, DGGSPFFS), la emisión de las consideraciones técnicas correspondiente a los Proyectos de Ley N° 649/2021-CR y 894/2021-CR.

II. ANÁLISIS:

2.1. Con fecha 07 de julio de 2022, el Pleno del Congreso de la República, aprobó el Texto Sustitutorio del Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 649/2021-CR y 894/2021-CR con texto sustitutorio, "Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la Zonificación Forestal".

2.2. En atención a ello, debemos precisar que, si bien el objeto de la propuesta legal mencionada en el párrafo precedente, busca modificar los artículos 29° y 33° de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS), así como, aprobar *disposiciones complementarias* orientadas a promover la zonificación forestal, con la finalidad de promover el desarrollo del proceso de zonificación forestal en las diferentes regiones del país; esta propuesta legal, en su Disposición Complementaria Final señala lo siguiente:

> ***"ÚNICA. Clasificación de tierras y reglas sobre el cambio de uso de las actividades agropecuarias existentes.***
>
> *Los predios rústicos con título de propiedad o constancia de posesión, emitidos por autoridad competente hasta la entrada en vigencia de la presente ley o estén dentro de los alcances de la Ley 31145, Ley de saneamiento físico-legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales, contarán con la clasificación de tierras por su capacidad de usos mayor (CTCUM) para desarrollar cultivos en limpio, permanentes o pastos; y, estarán exceptuados del cumplimiento de las reglas sobre cambio de uso a que se refiere el artículo 38° de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre siempre que en esas áreas estén desarrollando exclusivamente actividades agropecuarias con anterioridad."*

Firmado digitalmente por CALDERON VALENZUELA Ana Luisa FAU 20562836927 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.07.2022 16:53:36 -05:00

Firmado digitalmente por SANABRIA VILLALVA Henry FAU 20562836927 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.07.2022 15:38:04 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url: **https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/** Clave:

2.3 En referencia a la propuesta legal, es preciso señalar que la Constitución Política del Perú establece en su artículo 66° que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y su otorgamiento a particulares.

2.4 En virtud a ello, el literal b) del artículo 3° y el artículo 28° de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, considera recursos naturales, al suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de protección, siendo que los recursos naturales deben aprovecharse de forma sostenible, lo que implica un manejo racional de los recursos naturales teniendo en cuenta su capacidad de renovación, evitando su sobreexplotación y reponiéndolos cualitativa y cuantitativamente, de ser el caso.

2.5 Que el artículo 1° de la LFFS establece como finalidad de la ley la promoción de la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional, integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación; así como impulsar el desarrollo forestal, mejorar su competitividad, generar y acrecentar los recursos forestales y de fauna silvestre y su valor para la sociedad.

2.6 En esa línea, el literal f) del artículo 4° de la LFFS dispone que el patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación está constituido por las tierras de capacidad de uso mayor forestal y tierras de capacidad de uso mayor para protección, con bosque o sin ellos.

2.7 Al respecto, de la evaluación de dicha disposición, se debe tener en cuenta que la misma conllevaría a *"legalizar y/o formalizar"* actividades desarrolladas de manera ilegal, tales como, cambio de uso de la tierra, tala ilegal, deforestación, desbosque, usurpación de tierras, invasiones, ampliaciones de fronteras agrícolas, plantaciones ilícitas, entre otras que, con su realización afectarían el patrimonio forestal y de fauna silvestre, puesto que, fueron desarrolladas sin autorización alguna emitida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR ni las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre - ARFFS (incluyendo las Autoridades Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre - ATFFS), según la competencia de cada una de estas entidades, es decir, sin considerar criterios técnicos que permitan garantizar que la ejecución de las actividades no afecten el uso adecuado de la tierra.

2.8 Lo señalado tiene sustento y vinculación con lo dispuesto en la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha Contra la Tala Ilegal 2021-2015 - ENLTI, aprobada mediante Decreto Supremo N° 013-2021-MIDAGRI, en lo referido a las causas directas de la tala ilegal, siendo estas las siguientes:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url: **https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/** Clave:



2.9 En adición a ello, debemos recordar que la construcción de la referida estrategia fue realizada de manera articulada con las entidades integrantes de la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha Contra la Tala Ilegal (CMLTI); bajo dicho contexto, la aprobación del proyecto legal, en los términos señalados precedentemente, significaría un revés del Estado frente a las acciones adoptadas para hacer frente a las actividades ilegales que afecten el patrimonio forestal.

2.10 Asimismo, otro de los aspectos adversos que traería dicha propuesta normativa, es la generación de impunidad de las conductas irregulares realizadas por las personas naturales y jurídicas, tanto en el ámbito administrativo -instaurados por el MIDAGRI, ARFFS/ATFFS- así como a las investigaciones penales seguidas por el Ministerio Público, a través de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), por la comisión de delitos ambientales en su modalidad de delitos contra los recursos naturales.

2.11 En tal sentido, debe considerarse que, el marco normativo actual prohíbe que sobre las tierras de capacidad de uso mayor forestal y de capacidad de uso mayor para protección, con o sin cobertura vegetal, sean objeto de cambio de uso actual para fines agropecuarios (Artículo 37° de la LFFS). No obstante, de manera excepcional, la norma permite el retiro de la cobertura forestal para establecer cultivos o pastos (fines agropecuarios) sobre aquellas tierras (con bosques) que sean técnicamente clasificadas como de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio (A) o cultivos permanentes (C) de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor. Para ello se requiere la Autorización de Cambio de uso actual de las tierras previsto en el Reglamento para la Gestión Forestal.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url: **https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/** Clave:

2.12 La prohibición establecida en el artículo 37° de la LFFS tiene como premisa la urgencia de reducir el riesgo de la deforestación a través de la conservación de bosques para así garantizar el uso y conservación del patrimonio forestal. Sin embargo, el equilibrio integrado de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional y sostenible, conllevó que en el artículo 38° de la referida ley, se disponga que, en el caso de la existencia de cobertura boscosa en tierras de dominio público técnicamente clasificadas como de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes, según el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, el SERFOR puede autorizar su cambio de uso actual a fines agropecuarios, respetando la zonificación ecológico-económica, de nivel medio o superior, aprobada por el gobierno regional o gobierno local correspondiente, y previa opinión vinculante del Ministerio del Ambiente de acuerdo al procedimiento administrativo que aprueben ambas autoridades para tal fin. En todos los casos, en cada predio o unidad productiva se reserva un mínimo del treinta por ciento (30%) de la masa boscosa existente en tierras de aptitud agrícola, además de la obligación de mantener la vegetación ribereña o de protección.

2.13 Asimismo, según el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor[1] – RCTCUM, se considera "Capacidad de Uso Mayor" a la aptitud natural de una superficie geográfica para generar bienes y servicios en forma constante, bajo tratamientos continuos y usos específicos (véase el numeral 3.4 del artículo 3° del citado reglamento).

2.14 En tal sentido, en tierras de dominio público y en tierras de predios privados que tengan cobertura boscosa (bosque), pero que su "aptitud" sea para cultivos en limpio (A) o cultivos permanentes (C) se puede realizar el cambio de uso actual y posteriormente proceder a la ejecución del retiro de la cobertura forestal (desboque), siempre y cuando se haya realizado previamente los procedimientos establecidos para el caso.

2.15 Ahora bien, para la ejecución de la Clasificación de Tierras por su capacidad de Uso Mayor - CTCUM, la norma señala la aplicación del RCTCUM, bajo la rectoría del MIDAGRI. Así, la CTCUM, se constituye en un sistema técnico interpretativo cuyo único objetivo es asignar a cada unidad de tierra su uso y manejo más apropiado; por consiguiente, el RCTCUM tiene por finalidad promover y difundir el uso racional y continuado de las tierras para conseguir el óptimo beneficio social, económico y ambiental, en el marco de los principios del desarrollo sostenible, evitando la degradación de los ecosistemas.

2.16 Como puede notarse, la normativa actual establece que previo a una evaluación o clasificación de tierras realizadas por la autoridad, se determina su aptitud y en el caso de las tierras, ya sean del Estado o en predios privados, que tengan cobertura boscosa con aptitud para realizar cultivo en limpio o cultivos permanentes siguiendo los trámites previstos por la norma, se pueda finalmente realizar el desbosque para realizar actividades agropecuarias.

2.17 En efecto, el RCTCUM publicado en abril de este año ha contemplado información relevante y esencial a fin de poder aprobar la CTCUM, con el objetivo de promover y difundir el uso racional y continuado de las tierras en aras de conseguir el óptimo beneficio social, económico y ambiental, en el marco de los principios del desarrollo sostenible, evitando la degradación de los ecosistemas, así también, salvaguardar el patrimonio forestal.

[1] Aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2022-MIDAGRI publicado el 24 de abril de 2022.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url: **https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/** Clave:

2.18 La CTCUM está compuesta, entre otros, por un estudio de levantamiento de cobertura vegetal, el cual determina la dominancia o vigor o presencia - ausencia de la vegetación boscosa en un área de estudio, a fin de evitar que bosques primarios y los bosques relictos alto andinos sean clasificados con aptitud para el cultivo en limpio (A), cultivo permanente (C) o pastos (P).

2.19 Es así que, la normativa vigente no impide la paralización de actividades agropecuarias, por el contrario, permite la satisfacción de las necesidades actuales a través de un procedimiento regular, que tiene por objetivo prevenir, vigilar y evitar la deforestación y degradación ambiental, respetando además los derechos preexistentes o adquiridos. En tal sentido, el proyecto normativo desbarata los procedimientos vigentes que reglamentan la CTCUM.

2.20 Siendo así, el proyecto normativo, al señalar que *"los predios rústicos con títulos de propiedad o constancia de posesión […] estén dentro de los alcances de la Ley N° 31145 […] contarán con la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM) para desarrollar cultivos en limpio, permanentes o pastos",* estarían automáticamente brindándoles la CTCUM como cultivo en limpio (A), permanente (C) y pastos (P), por el solo hecho de tener el título o certificado de posesión sin importar su CTCUM real. Con ello, se fomenta que el CTCUM desaparezca como procedimiento técnico y sin evaluación técnica previa asignan una clasificación de la aptitud de la tierra.

2.21 Por otro lado, existe riesgos tangibles de que el proyecto normativo abre la puerta para presentar otra figura de ocupación de la tierra sin establecer plazos, sólo se menciona "que hayan tenido actividades agropecuarias con anterioridad".

2.22 Asimismo, con esta Disposición Complementaria y Final (DCF), se amplía la posibilidad de realizar el cambio de uso de la tierra para realizar actividades agropecuarias en posesionarios sin evaluaciones técnicas previas, considerando que el artículo 38° de la LFFS se aplicaba a los predios privados con títulos y no incluía a los posesionarios.

2.23 Además, la modificación de la norma facilitaría el tráfico de tierras en la Amazonía, pues automáticamente permitiría la deforestación en predios privados con título, así como a posesionarios, incluso que no estaban previstos en el artículo 38° de la LFFS. Dicha situación complejiza y agudiza aún más la afectación a las comunidades nativas en su proceso de titulación sobre las cuales se han superpuesto posesionarios y predios individuales.

2.24 El proyecto normativo al señalar que "*estarán exceptuados del cumplimiento de las reglas sobre cambio de uso a que se refiere el artículo 38° de la Ley 29763 […] siempre que en esas áreas estén desarrollando exclusivamente actividades agropecuarias"*, no sólo excluye la aplicación de los procedimientos y las herramientas técnicas mencionadas en el artículo 38° de la LFFS, sino que va en contra de otras disposiciones del mismo artículo como es el mantenimiento de al menos un treinta por ciento (30 %) de bosques incluso en predios privados. Además, se genera un incentivo negativo para fomentar la deforestación cuando cita la exclusividad de actividades agropecuarias.

2.25 Finalmente, el proyecto normativo se contrapone al Reglamento para la Gestión Forestal de la LFFS, cuando se señala que para los procesos de formalización de predios rurales "el mantenimiento de bosques naturales se considera como una forma de acreditar la explotación económica del predio" (artículo 123° del RGF).

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url: **https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/** Clave:

3 CONCLUSIONES

3.1 El Texto Sustitutorio del Dictamen recaído en los proyectos de Ley 649/2021-CR y 894/2021-CR con texto sustitutorio, "Ley que modifica la ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la Zonificación Forestal", se contrapone a las medidas adoptadas por el Estado, para hacer frente a las actividades ilegales, contenidas en la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Tala Ilegal.

3.2 La propuesta normativa en los términos plasmados legalizaría y/o formalizaría actividades desarrolladas de manera ilegal, trayendo consigo la impunidad (en el ámbito administrativo y penal) de quienes han desarrollado actividades sin contar con autorización alguna emitida por las autoridades administrativas correspondientes.

4 RECOMENDACIÓN

Remitir el presente informe a la Dirección General de Políticas y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, para continuar con el trámite respectivo.

Lo que informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Natalia Curi Ayala
Abogada en Derecho Ambiental
Dirección General de Gestión Sostenible del
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

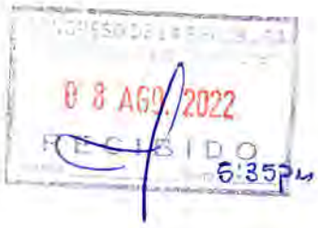
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url: **https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/** Clave:

ANEXO

04

PL 649 y OTROS

– AGRARIA



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

OFICIO Nº 250 -2022 –PR

Lima, 08 de agosto de 2022

Señora
LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Presidenta del Congreso de la República
Presente. -

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con relación a la Autógrafa de Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal. Al respecto consideramos conveniente observarla por lo siguiente[1]:

De la Autógrafa de Ley

1. La Autógrafa de la Ley modifica los artículos 29 y 33 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en los siguientes términos:

Ley Forestal y de Fauna Silvestre	Autógrafa de Ley
Artículo 29. Bosques de producción permanente Los bosques de producción permanente se establecen por resolución ministerial del Ministerio del Ambiente, a propuesta del Serfor, en bosques de las categorías I y II, con fines de producción permanente de madera y otros productos forestales diferentes a la madera, así como de fauna silvestre y la provisión de servicios de los ecosistemas El Estado promueve la gestión integral de estos bosques. Para ello, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre elabora, directamente o a través de terceros, y aprueba el Plan Maestro de Gestión que contiene, como mínimo, la identificación de sitios que requieran tratamiento especial para asegurar la sostenibilidad del aprovechamiento, las rutas de acceso, las vías comunes y los puntos de control. Previo a su establecimiento, el Estado realiza la evaluación de impacto ambiental y la consulta a la población que pueda verse afectada por su establecimiento. Son supervisados por el jefe de la correspondiente Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS).	Artículo 29. Bosques de producción permanente Los bosques de producción permanente se establecen por resolución ministerial del Ministerio **de Desarrollo Agrario y Riego**, a propuesta del Serfor, **sobre** bosques de categorías I y II **de la zonificación forestal,** con fines de producción permanente de madera y otros productos forestales diferentes a la madera, así como de fauna silvestre y la provisión de servicios de los ecosistemas. El Estado promueve la gestión integral de estos bosques. Para ello, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre elabora, directamente o a través de terceros, y aprueba el Plan Maestro de Gestión que contiene, como mínimo, la identificación de sitios que requieran tratamiento especial para asegurar la sostenibilidad del aprovechamiento, las rutas de acceso, las vías comunes y los puntos de control. Previo a su establecimiento, el Estado realiza la evaluación de impacto ambiental y la consulta a la población que pueda verse afectada por su establecimiento. **Los bosques de producción permanente** son supervisados por el jefe de la correspondiente Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS).
Artículo 33. Aprobación de la zonificación forestal La zonificación forestal es aprobada mediante resolución ministerial del Ministerio del Ambiente a	Artículo 33. Aprobación de la zonificación forestal La zonificación forestal es aprobada mediante resolución ministerial del Ministerio **de Desarrollo Agrario y Riego**, a propuesta del Serfor **y en base**

[1] Sobre la base del Informe N° 00353-2022-2022-MINAM/SG/OGAJ, Informe N° 1066-2022-MIDAGRI-SG/OGAJ e Informe N° D001074-2022-PCM-OGAJ

propuesta del Serfor en coordinación con la autoridad regional forestal y de fauna silvestre.	**al expediente técnico elaborado por el gobierno regional.**

Asimismo, la Autógrafa de Ley contiene dos Disposiciones Complementarias Transitorias (DCT) y una Disposición Complementaria Final (DCF):

a) **Primera DCT:** suspende la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes. Para la implementación de esta disposición, el gobierno regional acredita ante el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) los avances en la aplicación de la Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, según los criterios establecidos en la disposición. Lo dispuesto no aplica al otorgamiento de concesiones forestales maderables.
b) **Segunda DCT:** durante el periodo de suspensión de la exigencia de la zonificación forestal, no se otorgarán títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre en áreas que se encuentren en trámite de reconocimiento, de titulación o de ampliación de comunidades campesinas y nativas, así como en áreas que se encuentren en trámite para el establecimiento de reservas territoriales, pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial.
c) **Única DCF:** los predios rústicos con título de propiedad o constancia de posesión, emitidos por autoridad competente hasta la entrada en vigencia de la presente ley o estén dentro de los alcances de la Ley 31145 (Ley de Saneamiento Físico-Legal y Formalización de Predios Rurales a Cargo de los Gobiernos Regionales), contarán con la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM) para desarrollar cultivos en limpio, permanentes o pastos; y estarán exceptuados del cumplimiento de las reglas sobre cambio de uso a que se refiere el artículo 38 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, siempre que en esas áreas estén desarrollando exclusivamente actividades agropecuarias con anterioridad.

Observaciones a la Autógrafa de Ley

2. En primer lugar, debemos resaltar que el Capítulo II "Del ambiente y los recursos naturales" de la Constitución Política del Perú establece importantes lineamientos y roles que debe seguir el Estado en la defensa del medio ambiente. Así, el artículo 67 de la Carta Magna señala que el Estado "Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales". Por otro lado, el artículo 68 determina que "El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas". Finalmente, el artículo 69 de la Constitución establece que es tarea del Estado promover "el desarrollo sostenible de la Amazonia **con una legislación adecuada**". Estas disposiciones son concordantes con los **derechos fundamentales a la vida y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de ella**, reconocidos en los numerales 1 y 22 del artículo 2 de la Constitución.

   De forma concordante, el artículo 1 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, establece como finalidad y objeto de la misma, **promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre** dentro del territorio nacional, integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación; así como impulsar el desarrollo forestal, mejorar su competitividad, generar y acrecentar los recursos forestales y de fauna silvestre y su valor para la sociedad. Ello, con un enfoque ecosistémico en el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, ratificado por 196 países. Por lo tanto, comprende el marco legal para regular, promover y supervisar la actividad forestal y de fauna silvestre para lograr su finalidad.

El artículo 25 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre señala que la zonificación forestal se delimitan obligatoria, técnica y participativamente las tierras forestales. Los resultados de la zonificación forestal definen las alternativas de uso del recurso forestal y de fauna silvestre y se aplican con carácter obligatorio. El ordenamiento forestal es el proceso de determinación de unidades forestales y de títulos habilitantes y forma parte del ordenamiento territorial.

Asimismo en su artículo 26, señala que la zonificación forestal constituye un proceso obligatorio técnico y participativo de delimitación de tierras forestales, que se realiza en el marco del enfoque ecosistémico y siguiendo la normativa sobre la **zonificación ecológico-económica**, en lo que corresponda, considerando los procesos en marcha, los instrumentos de planificación y gestión territorial regional con los que se cuente y respetando los usos y costumbres tradicionales de las tierras comunales, conforme a la Constitución Política del Perú y la ley. El artículo 33 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sobre la **aprobación de la zonificación forestal**; establece que este instrumento es aprobado mediante resolución ministerial del **Ministerio del Ambiente** (MINAM) a propuesta del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) en coordinación con la autoridad regional forestal y de fauna silvestre.

En dicho contexto el artículo 37 de la mencionada ley, dispone que en tierras de capacidad de uso mayor forestal y de capacidad de uso mayor para protección, con o sin cobertura vegetal, **se prohíbe el cambio de uso actual a fines agropecuarios**. Por consiguiente, se prohíbe el otorgamiento de títulos de propiedad, certificados o constancias de posesión en tierras de dominio público con capacidad de uso mayor forestal o de protección con o sin cobertura forestal, así como cualquier tipo de reconocimiento o instalación de infraestructura pública de servicios, bajo responsabilidad de los funcionarios involucrados.

Al respecto, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1013, Ley de creación del MINAM, el sector ambiente tiene como objetivo la **conservación del ambiente**, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.

En ese contexto, el MINAM desarrolla diferentes acciones para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas y el desarrollo sostenible de la Amazonía. Ello, orientando la prevención de la degradación del ambiente y de los recursos naturales y revertir los procesos negativos que los afectan, priorizando los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales.

Adicionalmente, el Decreto Legislativo N° 1013 señala que este sector tiene la función de establecer la política, los criterios, las herramientas y los procedimientos de carácter general para el Ordenamiento Territorial Nacional, en coordinación con los tres niveles de gobierno, y conducir su proceso. En ese contexto, la función conferida al MINAM respecto a la conservación y protección del ambiente, asegurando el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta y el ordenamiento territorial, se articula a lo establecido por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Entonces, corresponde al MINAM aprobar la Zonificación Forestal y garantizar la aplicación del principio ecosistémico de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, asegurando la articulación técnica y objetiva para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, garantizando su correspondencia con instrumentos vinculados a la gestión territorial y ambiental tales como la Zonificación Ecológica y Económica, la Estrategia Regional de Diversidad Biológica Amazónica, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, las áreas naturales protegidas, entre otros.

A la fecha el MINAM viene realizando la aprobación de la Zonificación Forestal de manera eficiente, efectuando de manera oportuna y en el menor plazo de tiempo las coordinaciones interinstitucionales correspondientes (SERFOR, Gobiernos Regionales, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, entre otras). Actualmente, el MINAM ha aprobado 4 cuatro expedientes técnicos de Zonificación Forestal, correspondientes a los departamentos de Amazonas, Loreto, Ucayali y San Martín.

En ese marco, **la Autógrafa de Ley no constituye una legislación adecuada, no solo para la protección de la Amazonía, sino de todo el ecosistema nacional, desnaturalizando así el objeto y fin de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre**.

Así, su Única Disposición Complementaria Final establece que los predios rústicos con título de propiedad o constancia de posesión contarán con la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM) para desarrollar cultivos en limpio, permanentes o pastos, quedando exceptuados del cumplimiento de las reglas sobre cambio de uso a que se refiere el artículo 38 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, siempre que en esas áreas estén desarrollando exclusivamente actividades agropecuarias con anterioridad.

Esta norma podría originar una mayor afectación sobre los bosques de la Amazonía, siendo que el proceso de formalización y titulación de predios rústicos, así como el otorgamiento de constancias de posesión, debe desarrollarse con posterioridad al proceso técnico de CTCUM, por lo que es necesario que se garantice que este proceso se realice cumpliendo la prohibición de otorgar estos derechos en tierras con capacidad de uso mayor forestal o de protección. Es decir, esta disposición da a entender que los predios privados con título y constancia de posesión ya no van a tener el requisito de la zonificación forestal para el cambio de uso de suelo, sino que solo se va a basar en la CTCUM.

Ello representa una amenaza de deforestación masiva y pone en peligro la existencia de los bosques en la Amazonía, en la medida que dicha clasificación no asegura la inexistencia de cobertura arbórea de áreas para agricultura y ganadería, pues la clasificación se basa solo en capacidades de uso mayor. Así, si en un predio rural que en general viene siendo utilizado para agricultura y ganadería, y adicionalmente tiene una parte de bosque, podrá ser utilizado para aquellas actividades económicas, con la consecuente tala y quema para su cambio de uso. De esta forma, se legalizará el cambio de uso no autorizado de tierra, que forma parte del patrimonio forestal de la Nación.

En relación a la cobertura de bosques en el país, se debe mencionar que de acuerdo al análisis de deforestación de bosques realizados por el Programa Nacional de Conservación de Bosques y Cambio Climático (PNCBCC) se evidencia un incremento de la deforestación durante el año 2020, la cual alcanza las 203,272 hectáreas (ha) de pérdida de bosques, representando un 37% mayor en comparación con el reporte de

2019. En esa línea, se identificó que en el 2020 se degradaron más ecosistemas que en cualquier año previo; particularmente los departamentos con mayor degradación fueron Loreto (4,549,040.64 ha perdidas), seguido por Ucayali (2,321,331.66 ha perdidas), San Martín (2,256,313.23 ha perdidas), Madre de Dios (1,645,677.99 ha perdidas) y Cusco (1,527,004.98 ha perdidas).

Gráfico N° 1: Estimación anual de la superficie degradada a nivel nacional (ha) con información hasta el 2020, siendo el año base el 2015.



Fuente: Geoservidor – áreas degradadas a nivel nacional. https://geoservidor.minam.gob.pe/monitoreo-y-evaluacion/restauracion-de-areas-degradadas/

En este contexto, es importante considerar que la reactivación de la economía que no se realice con un enfoque sostenible puede representar un problema para la conservación para los bosques, incluyendo el patrimonio forestal (maderable y no maderable) así como a los servicios ecosistemas que los bosques proveen, tan importantes para la actividad agrícola, como la provisión de agua, el control de la erosión (protección del suelo y nutrientes, evitar colmatación de infraestructura de riesgo, etc.), la regulación de riesgos (derrumbes, huaicos, inundaciones, etc.),polinización de cultivos, entre otros.

En esa línea, es importante resaltar que, en 2020, el Perú aumentó sus compromisos ante la Convención de Cambio Climático y definió en un 40 % su meta para reducir sus emisiones para el 2030, así como llegar al carbono cero en 2050. Sin embargo, el nivel de deforestación alcanzado en 2020 y que podría repetirse en 2021, pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Es pertinente resaltar la importancia del estudio de capacidad de uso mayor (CUM) que, como herramienta técnica, permite promover y difundir el uso racional y continuado de las tierras para lograr el óptimo beneficio social, económico y ambiental, en el marco de los principios del desarrollo sostenible, evitando la degradación de los ecosistemas. En esa línea, cuando la capacidad de uso mayor de una zona con cobertura forestal es agrícola, está permitido el retiro de la cobertura forestal, para lo que se requiere de una autorización de cambio de uso actual de la tierra y de una autorización de desbosque respectivamente. El problema se da cuando este cambio de uso ocurre de manera no autorizada, retirando la cobertura forestal sin conocer la capacidad de uso mayor del suelo y por lo tanto sin la autorización correspondiente, como ocurre con la mayoría de los procesos vinculados a la agricultura migratoria que se desarrolla sobre suelos forestales o incluso de protección.

Cabe señalar que la Única Disposición Complementaria Final de la Autógrafa de Ley, al proponer que ya no se exija a los predios con título o constancia de posesión, el requisito de la zonificación forestal para el cambio de uso de suelo, sino que solo se van a basar en la CTCUM, arriesgando la existencia de los bosques en la Amazonia del país, contraviene lo establecido en el artículo 1 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, el cual prescribe que toda persona tiene el deber de contribuir con la conservación del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación de acuerdo a los procedimientos establecidos por la autoridad nacional y regional y a los instrumentos de planificación y gestión del territorio. Por tanto, contraviene el principio de coherencia normativa, al no tomar en consideración la sostenibilidad del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación y el marco normativo vigente que lo regula. Este principio ha sido reconocido por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico N°48 de la Sentencia EXP. N°047-2004-AI/TC[2].

De otro lado, la iniciativa legislativa, no ha sustentado técnicamente, cual es la línea base de los predios rústicos que buscaría amparar con la Única Disposición Complementaria Final de la Autógrafa de Ley, pues dicha información resulta importante a los efectos de evaluar el impacto en la afectación de los recursos forestales y de fauna silvestre, al legalizar el cambio de uso no autorizado de tierras, que forman parte del patrimonio forestal de nuestro país.

Por otro lado, se advierte una falta de justificación de las razones por las cuales se propone la suspensión de la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes, teniendo en consideración que, la zonificación forestal es un proceso técnico y participativo, el mismo que debe estar articulado con la Zonificación Económica Ecológica, el ordenamiento territorial, y, la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, conforme lo establece la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, constituyendo así, un proceso obligatorio técnico y participativo de delimitación de tierras forestales.[3]

En ese sentido, se observa que la Autógrafa de Ley no cuenta con el análisis de los posibles impactos negativos en el bosque, como la masiva deforestación y afectación de los recursos forestales y de fauna silvestre, ya que estaría dando apertura a la legalidad del cambio de uso no autorizado de tierras que forman parte del patrimonio forestal y de fauna silvestre.

Por consiguiente, **la propuesta legislativa no solo contraviene la finalidad y objetivos de la propia Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sino también lo previsto en los numerales 1 y 22 del artículo 2 y los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución Política del Perú**, referidos a promover el uso sostenible de los recursos naturales y a conservación de la diversidad biológica, atentando contra el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada, y poniendo en grave riesgo el derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida de las personas.

---

2 "48.De lo dicho se concluye que la normatividad sistémica descansa en la **coherencia normativa**. Dicha noción **implica la existencia de la unidad sistémica del orden jurídico, lo que, por ende, indica la existencia de una relación de armonía entre todas las normas que lo conforman**.
Asimismo, presupone una **característica permanente del ordenamiento que hace que este sea tal por constituir un todo pleno y unitario**.
Ella alude a la necesaria e imprescindible compenetración, compatibilidad y conexión axiológica, ideológica, lógica, etc., entre los deberes y derechos asignados; amén de las competencias y responsabilidades establecidas que derivan del plano genérico de las normas de un orden constitucional". (El énfasis es nuestro)

3 Artículo 26 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Por las razones expuestas, se observa la Autógrafa de Ley, en aplicación del artículo 108 de la Constitución Política del Perú.

Atentamente,

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 29763, LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, Y APRUEBA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ORIENTADAS A PROMOVER LA ZONIFICACIÓN FORESTAL

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto modificar los artículos 29 y 33 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal, con la finalidad de promover el desarrollo del proceso de zonificación forestal en las diferentes regiones del país.

Artículo 2. Modificación de los artículos 29 y 33 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Modificanse los artículos 29 y 33 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, quedando redactados de la siguiente manera:

*"**Artículo 29. Bosques de producción permanente***

Los bosques de producción permanente se establecen por resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a propuesta del Serfor, sobre bosques de categorías I y II de la zonificación forestal, con fines de producción permanente de madera y otros productos forestales diferentes a la madera, así como de fauna silvestre y la provisión de servicios de los ecosistemas.

El Estado promueve la gestión integral de estos bosques. Para ello, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre elabora, directamente o a través de terceros, y aprueba el Plan Maestro de Gestión que contiene, como mínimo, la identificación de sitios que requieran tratamiento especial para asegurar la sostenibilidad del aprovechamiento, las rutas de acceso, las vías comunes y los puntos de control. Previo a su establecimiento, el Estado realiza la evaluación de impacto ambiental y la consulta a la población que pueda verse afectada por su establecimiento.

Los bosques de producción permanente son supervisados por el jefe de la correspondiente Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS).

Artículo 33. Aprobación de la zonificación forestal

La zonificación forestal es aprobada mediante resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a propuesta del Serfor y en base al expediente técnico elaborado por el gobierno regional".

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. Zonificación forestal y otorgamiento de títulos habilitantes

Suspéndase la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes. Para la implementación de la presente disposición, el gobierno regional acreditará ante el Serfor los avances en la aplicación de la Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, según los criterios que se indican a continuación:

a) Hasta por dos años, contabilizados a partir de la publicación de la presente ley, siempre que el gobierno regional haya instalado el comité técnico.

b) Hasta por un año, adicional al plazo mencionado en el literal a), siempre que se cuente con el expediente técnico de zonificación forestal listo para su socialización.

En cualquiera de los supuestos antes mencionados, el gobierno regional debe considerar las variables, criterios o fuentes de información que la Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, aprobada por el Serfor, para la identificación de una categoría de zonificación forestal, la cual debe ser compatible con el título habilitante solicitado.

Lo dispuesto en la presente disposición complementaria transitoria no se aplica para el otorgamiento de concesiones forestales maderables.

SEGUNDA. Prohibición de otorgamiento de títulos habilitantes

Durante el período de suspensión de la exigencia de la zonificación forestal establecido en la primera disposición complementaria transitoria, no se otorgarán títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre en áreas que se encuentren en trámite de reconocimiento, de titulación o de ampliación de

comunidades campesinas y nativas; así como en áreas que se encuentren en trámite para el establecimiento de reservas territoriales, pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Clasificación de tierras y reglas sobre cambio de uso para actividades agropecuarias existentes

Los predios rústicos con título de propiedad o constancia de posesión, emitidos por autoridad competente hasta la entrada en vigencia de la presente ley o estén dentro de los alcances de la Ley 31145, Ley de Saneamiento Físico-Legal y Formalización de Predios Rurales a Cargo de los Gobiernos Regionales, contarán con la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM) para desarrollar cultivos en limpio, permanentes o pastos; y estarán exceptuados del cumplimiento de las reglas sobre cambio de uso a que se refiere el artículo 38 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, siempre que en esas áreas estén desarrollando exclusivamente actividades agropecuarias con anterioridad.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los trece días del mes de julio de dos mil veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ANEXO

05

Defensoría del Pueblo

Firmado digitalmente por: REVOLLAR ANAÑOS Eliana FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/08/2022 17:51:35

Defensoría del Pueblo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Lima, 27 de agosto de 2022

OFICIO N°0235-2022-DP

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite y Digitalización de Documentos
29 AGO 2022
RECIBIDO
Firma ____ Hora 3:28 pm

Señora
Lady Camones Soriano
Presidenta
Congreso de la República
Presente.-

Asunto: Oposición a la autógrafa de proposición de la Ley que modifica la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle y, al mismo tiempo, expresarle nuestra posición institucional contraria a la autógrafa que plantea la modificación de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante la autógrafa)[1]. La oposición de la Defensoría del Pueblo responde a que la aprobación de los cambios propuestos pondrán en riesgo nuestra diversidad biológica y los valores científicos y culturales que aportan a la población y al desarrollo sostenible, motivo por el cual fue recientemente observada por el Presidente de la República.

En efecto, la autógrafa no solo contraviene la finalidad y objeto de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sino que su aprobación también vulnera los mandatos constitucionales del Estado de promover el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica[2], así como el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada[3], poniendo en grave riesgo la protección de un conjunto de derechos humanos, como el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida de las personas.

Sobre el particular, es importante señalar que la aprobación de esta modificación normativa, tendrá mayores repercusiones en los derechos de los pueblos indígenas, puesto que los bosques tienen vinculación con los territorios de las comunidades amazónicas. Al respecto, consideramos necesario recordar que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre es considerada como la primera medida legislativa sometida a consulta previa[4]. No obstante, advertimos que esta situación u otras relacionadas a posibles afectaciones de pueblos indígenas, no ha sido desarrollada en la exposición de motivos de las iniciativas legislativas que dieron origen a la autógrafa.

[1] La autógrafa se deriva de los Proyectos de Ley N° 694, N° 894 y N° 2315; asimismo, la Junta de Portavoces del Congreso de la República acordó, en sesión del 24 de agosto de 2022, su exoneración de dictamen de la Comisión Agraria.
[2] Artículo 68° de la Constitución Política del Perú.
[3] Artículo 69° de la Constitución Política del Perú.
[4] Más información en: https://bit.ly/3e1Ocgv

R.U: 928988

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: REVOLLAR AÑAÑOS Eliana FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/08/2022 17:51:35

Ahora bien, es oportuno recordar que casi el 60% del territorio nacional está cubierto de bosques, siendo la Amazonía la región en la que se encuentra el 94% de ellos[5]; destacan los bosques húmedos amazónicos, que albergan una de las más altas concentraciones de especies del planeta[6], y cuya conservación es prioritaria para el Estado y la lucha contra el cambio climático, de cuyas consecuencias somos uno de los países más vulnerables. Debemos señalar que esta afectación ha causado múltiples cambios en los pueblos y las propias comunidades indígenas, pues, como se sabe, los recursos naturales y bosques forman parte de su desarrollo integral como colectividad, reconocimiento que ha sido recogido en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Aunado a ello, en los últimos 20 años el Perú ha perdido más de 2,6 millones de hectáreas de bosques[7], que equivalen a la suma de la superficie de las regiones Callao, Ica y Tumbes. Adicionalmente, durante el año 2020, la deforestación en el país alcanzó la cifra récord de 203.000 hectáreas[8], que equivale a más de 15 veces la superficie del Callao.

Pese a que para garantizar su protección se requieren políticas públicas y una legislación coherente, la autógrafa plantea, en su Disposición Complementaria Final, habilitar con constancia de posesión o título de propiedad a los poseedores de predios rústicos[9], para que continúen realizando de manera exclusiva actividades agropecuarias en los predios que han sido deforestados pata tal efecto, sin haber contado previamente con una adecuada clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM), y las autorizaciones de cambio de uso de suelos y desboque que exige la legislación vigente[10]. Todo ello en desmedro de las tierras de capacidad de uso mayor forestal y de protección, que permiten el mantenimiento de los bosques y la conservación de las fuentes de agua y cabeceras de cuencas.

Al respecto, cabe recordar que la CTCUM, así como las autorizaciones de cambio de uso de suelos y desboque, son fundamentales para garantizar que las actividades agrícolas y ganaderas se desarrollen únicamente en tierras aptas para cultivos y pastos, y no en tierras forestales o de protección, con o sin cobertura boscosa.

Sobre el particular, resulta importante señalar que en el Perú el 82% de la deforestación obedece a la tala y quema de bosques para abrir pequeñas chacras, y que el 80% de las áreas que han sido deforestadas para la agricultura y ganadería contaban con tierras no aptas para estas actividades[11], lo que

---

[5] Disponible en: https://www.minam.gob.pe/programa-bosques/peru-pais-de-bosques/
[6] JENKINS, Clinton N., PIMMB, Stuart L. y JOPPA, Lucas N. 2013. "Global patterns of terrestrial vertebrate diversity and conservation". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. San Luis, 2016, volumen 111, número 28, pp. E2602–E2610. Consulta: 29 de mayo de 2017.
Disponible en: http://www.pnas.org/content/110/28/E2602.full#ack-1
[7] Minam. Geobosques. Pérdida de bosque (2001–2020). Disponible en:
https://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php
[8] Ídem.
[9] Emitidos hasta el inicio de la vigencia de la autógrafa o que estén sujetos a la Ley N° 31145, Ley de saneamiento físico-legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales.
[10] Única Disposición Complementaria Final de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, según Texto Sustitutorio.
[11] Minam. Geobosques. Pérdida de bosqueS 2020. Disponible en:
http://www.bosques.gob.pe/archivo/brochure-deforestacion-pnvb.pdf

Firmado digitalmente por: REVOLLAR AÑAÑOS Eliana FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/08/2022 17:51:35

Defensoría del Pueblo

evidencia la imperiosa necesidad de exigir el cumplimiento de las obligaciones anteriormente mencionadas.

Por otro lado, la autógrafa plantea que en lugar del Ministerio del Ambiente (Minam), sea el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) la entidad pública que conduzca los procesos creados para establecer los bosques de producción permanente de las categorías I y II[12], y apruebe la zonificación forestal[13], en perjuicio de la conservación y manejo sostenible de los bosques. Cabe recordar que el Minam tiene a su cargo la rectoría del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), que comprende las entidades públicas de los tres niveles de gobierno que ejercen competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales[14], mientras que el Midagri promueve las actividades agrícolas y ganaderas en su condición de ente rector de dichos subsectores.

En tal sentido, es de vital importancia que sea el Minam, y no el Midagri, la institución responsable del Estado para establecer los bosques de producción permanente de las categorías I y II, así como para aprobar la zonificación forestal, con el fin de garantizar la articulación técnica y objetiva entre el uso del recurso forestal y de fauna silvestre, y otros recursos naturales, bajo un enfoque ecosistémico que privilegia la evaluación de las potencialidades y limitaciones del territorio, utilizando criterios físicos, biológicos, ambientales, sociales, económicos y culturales, entre otros.

Sumado a ello, resulta pertinente señalar que los graves riesgos detallados por la Defensoría del Pueblo, también han sido advertidos por el Minam y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), rector en esta materia; entidades que han manifestado públicamente su rechazo al texto sustitutorio, debido a los serios impactos que su promulgación generaría en la diversidad biológica del país[15].

Como lo hemos señalado anteriormente, la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, fue la primera ley sometida a un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios antes de su aprobación legislativa, debido a que en su contenido existían disposiciones que incidían en sus derechos. Al respecto, es importante recordar que el Convenio 169 de la OIT, que fue ratificado por el Estado peruano el 26 de noviembre de 1993 y entró en vigencia en 1995, establece en su artículo 6° que toda medida legislativa o administrativa que el Estado busque implementar y que afecte directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas debe ser sometida a un proceso de consulta previa.

Para ahondar en el tema, el Tribunal Constitucional ha señalado que tratándose de medidas legislativas, existe la necesidad de distinguir cuando menos tres modos en que pueden ser objeto de consulta previa: i) medidas dirigidas a regular aspectos que conciernen en forma exclusiva a los pueblos indígenas; ii) normas de alcance general que podrían implicar una afectación

---

[12] Modificación del artículo 33° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, según Texto Sustitutorio.
[13] Modificación del artículo 29° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, según Texto Sustitutorio.
[14] Numeral 2.1 del artículo 2° de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 28145.
[15] Minam. Comunicado del 14 de julio de 2022. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/631804-texto-sustitutorio-de-proyectos-de-ley-649-2021-y-894-2021-aprobados-por-el-poder-legislativo-ponen-en-riesgo-nuestra-diversidad-biologica; Serfor. Comunicado del 14 de julio de 2022.
Disponible en:
https://twitter.com/SerforPeru/status/1547721417885503496?s=20&t=bGJhSmqhAlMndS4TB3IhSA

Firmado digitalmente por: REVOLLAR AÑAÑOS Eliana FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/08/2022 17:51:35

Defensoría del Pueblo

"indirecta" a los pueblos indígenas; y, c) medidas específicas relacionadas con pueblos indígenas dentro de normas de alcance general[16].

En ese sentido, considerando que el desarrollo normativo de la autógrafa en cuestión contiene regulaciones que impactarán en los derechos de los pueblos indígenas, es imprescindible que el Congreso de la República evalúe si corresponde la implementación de espacios de participación indígena o un proceso de consulta previa, bajo las premisas del Tribunal Constitucional.

En atención a lo expuesto, la Defensoría del Pueblo sostiene que la autógrafa valida y promueve la ilegalidad, poniendo en riesgo la institucionalidad ambiental, el ordenamiento territorial y forestal, así como la conservación de los bosques y la biodiversidad que albergan, afectando los derechos humanos de la población, particularmente de los pueblos indígenas de la Amazonía, cuya identidad, cultura y vida dependen de los bosques y los recursos y servicios que provee.

Asimismo, le recordamos que es clave que toda iniciativa o medida pública sea el resultado de un análisis objetivo y técnico, asegurando el respeto de derechos humanos, y su coherencia con el legítimo interés de promover el bienestar de la población, en especial de los pueblos indígenas. Para conseguirlo, resulta fundamental que la iniciativa o medida sea la más adecuada para lograr la finalidad pública que persigue, y que también goce de viabilidad ambiental y social, lo que no ha ocurrido en el proceso de debate y aprobación de la autógrafa en mención[17].

En tal sentido, en el marco de nuestras competencias establecidas en el artículo 162° de la Constitución Política del Perú, a través de su despacho, la Defensoría del Pueblo recomienda al Pleno del Congreso de la República, desestimar la autógrafa de proposición de la Ley que modifica la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en atención a su deber constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como el derecho a un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de la vida de las personas y comunidades, aún más en un contexto que busca promover el desarrollo sostenible.

Sin otro particular, me valgo de la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Eliana Revollar Añaños
Defensora del Pueblo (e)

AMASPPI

C.c. Señor Wilber Rozas Beltrán. - Ministro del Ambiente
C.c. Señora Nelly Paredes del Castillo. - Director Ejecutivo (e) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

---

[16] STC N° 022-2009-PI/TC, fundamentos jurídicos 19 al 23.
[17] Tal como ha sido señalado por el Presidente de la República en las observaciones remitidas a la autógrafa que nos ocupa.

ANEXO

06

62
Folios

Lima, 03 de noviembre de 2022

Señores y señoras
José Williams Zapata
Presidente del Congreso de la República
Lima, Perú

Margot Palacios Huamán
Presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología
Lima, Perú

Nilza Chacón Trujillo
Presidenta de la Comisión Agraria
Lima, Perú

Asunto: Ejercitamos derecho de petición a fin de que se someta a consulta previa la Autógrafa de la Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal

1. Organizaciones solicitantes

La **Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU)** es una organización indígena afiliada a la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y a su vez a AIDESEP. Fundada en 1971, cuenta con 42 años de vida institucional en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del río Ucayali, siendo una de las organizaciones más antiguas y representativas del movimiento indígena amazónico a nivel nacional.

En la actualidad representa a 35 comunidades nativas pertenecientes a los pueblos shipibo-konibo, asháninka, isconahua y awajún.

Su presidente y representante legal es la apu **Graciela Reátegui Mori**, lídera del pueblo shipibo-konibo y ciudadana peruana, identificado con DNI N.° 44051007. Cuenta con domicilio legal en el inmueble ubicado en la avenida Yarinacocha 1553, interior 1, en el distrito de Yarinacocha y ciudad de Pucallpa.

2. Petición

Solicitamos a sus despachos lo siguiente:

i. Iniciar un proceso de consulta previa, libre e informada con relación a la **Autógrafa de la Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal** (en adelante, el Proyecto de Ley), incluyendo a todas las

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

organizaciones representativas de los pueblos indígenas amazónicos a nivel nacional, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 2, 6 y 9 de la Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas y originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

ii. Suspender, mientras dure el proceso de consulta previa, libre e informada según los estándares nacionales e internacionales en la materia, cualquier acto administrativo o legislativo destinado a la aprobación del Proyecto de Ley.

3. Fundamentación

Las organizaciones solicitantes consideramos que el Proyecto de Ley en mención promueve la deforestación de los bosques amazónicos, así como la invasión y despojo de los territorios donde habitan ancestralmente las comunidades y pueblos indígenas a nivel nacional. En consecuencia, constituye una amenaza cierta a nuestros derechos territoriales y ambientales, por lo que el Congreso de la República tiene la obligación de iniciar un proceso de consulta previa, libre e informada que incluya al conjunto de organizaciones representativas del movimiento indígena en toda la Amazonía peruana.

Fundamentamos nuestra solicitud en los argumentos que se presentan a continuación.

3.1. Sobre el impacto directo en los derechos fundamentales de los pueblos indígenas amazónicos

El Proyecto de Ley impacta directa y negativamente en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas amazónicos de carácter territorial y ambiental, al punto de convertirse en una amenaza cierta hacia los mismos. Estos derechos se encuentran reconocidos en forma unánime por la Constitución Política del Estado y los principales instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Los derechos territoriales de los pueblos indígenas comprenden la propiedad colectiva sobre sus territorios ancestrales, de conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política del Estado; el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y los artículos 14 y 15 del Convenio N.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

Asimismo, el derecho de los pueblos indígenas a gozar de un medio ambiente –como el del resto de la ciudadanía nacional– está reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución Política del Estado; el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y los artículos 4 y 7 del Convenio N.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

Cabe reiterar que nos encontramos ante una amenaza cierta de violación a los derechos mencionados, cuya relevancia jurídica es aún mayor a la simple "afectación directa" que se exige como requisito para iniciar un proceso de consulta previa, libre e informada.

64

Escaneado con CamScanner

Para el Tribunal Constitucional (TC), existe afectación directa cuando estamos ante "cambios relevantes y directos en la situación jurídica". En sus palabras, la consulta procede ante actos normativos y administrativos "susceptible[s] de afectar directamente a los pueblos indígenas, ya que implica cambios relevantes y directos en la situación jurídica de éstos"[1]. Posteriormente, el TC precisó que "no se requiere la detección de una afectación, sino que basta con que tal afectación directa sea potencial"[2].

En el Derecho Internacional, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el criterio para evaluar la pertinencia de la consulta previa está vinculado a la evaluación y análisis del impacto de la medida en el valor de los territorios de los pueblos según sus propias cosmovisiones.

> *"Los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en* ***las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios, tomando en consideración la especial relación entre los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales"*** [3] *[Resaltado nuestro]*

En el presente caso, el Proyecto de Ley genera un impacto que excede el de la afectación directa, produciéndose además una amenaza de violación a derechos fundamentales que exige la realización de un proceso de consulta previa, libre informada para la salvaguarda de nuestros territorios y el medio ambiente.

3.2. Sobre el contexto en que se aprueba el Proyecto de Ley

Como recuerda Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)[4] citando el informe de Ministerio del Ambiente intitulado "Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático"[5], una de las principales causas de la deforestación en el Perú es la expansión de la agricultura. Esta actividad alcanza un 51.6 % a nivel nacional.

Asimismo, según esta fuente, el 48.4 % proviene de otras causas vinculadas al cambio de uso de la tierra, como la ganadería pequeña y mediana escala; también actividades extractivas ilegales e informales como la minería y tala ilegal, el cultivo de coca y la expansión de infraestructura con proyectos de hidroeléctricas, hidrocarburos y carreteras.

De igual manera, citando al Global Forest Watch[6], DAR precisa que con la pandemia este proceso de deforestación se ha incrementado. Mientras que en 2019 se deforestaron 231, 257 hectáreas (ha) de bosques; en 2020 se perdieron 278, 656 ha. Es decir, la deforestación se incrementó entonces en 20.5 %. En 2021, se deforestaron 225,203 ha de bosques en el Perú.

---

[1] STC. Exp. N.° 00022-2009-PI/TC, f.j. 19.
[2] STC. Exp. N.° 00012-2015-AI/TC, f.j. 102.
[3] CIDH (2009). *Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos*, párr. 273.
[4] Ver: https://dar.org.pe/normas-que-impactan-bosques-analisis-de-la-reciente-norma-que-debilitaria-la-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre/.
[5] Ver: http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf.
[6] Ver: https://www.globalforestwatch.org/.

Escaneado con CamScanner

3.3. Sobre la amenaza a los derechos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas amazónicos

A las organizaciones solicitantes nos preocupa de manera especial la disposición única final del Proyecto de Ley, referida a la clasificación de suelos y de cambio de uso para promover actividades agropecuarias existentes. El problema es que con ella es que busca "legalizar" el cambio de uso no autorizado de tierras forestales que forman parte del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación.

Al respecto, señala el Proyecto de Ley:

> ***"ÚNICA. - Clasificación de tierras y reglas sobre cambio de uso para actividades agropecuarias existentes***
>
> *Los predios rústicos con título de propiedad o constancia de posesión, emitidos por autoridad competente hasta la entrada en vigencia de la presente ley o estén dentro de los alcances de la Ley 31145, Ley de saneamiento físico-legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales,* ***contarán con la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM) para desarrollar cultivos en limpio, permanentes o pastos; y, estarán exceptuados del cumplimiento de las reglas sobre cambio de uso a que se refiere el artículo 38 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, siempre que en esas áreas estén desarrollando exclusivamente actividades agropecuarias con anterioridad"***. [Resaltado nuestro]

El Proyecto de Ley, en consecuencia, viola el artículo 38 de la actual Ley 29763, que regula las condiciones en que es posible acceder a la autorización cambio de uso en tierras con capacidad de uso mayor cultivos en limpio o permanentes que cuentan con cobertura forestal actual. Señala la Ley 29763:

> ***Artículo 38. Uso de tierras de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes con cobertura forestal actual***
>
> *Cuando exista cobertura boscosa en tierras de dominio público técnicamente clasificadas como de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes, según el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor,* ***el SERFOR puede autorizar su cambio de uso actual a fines agropecuarios, respetando la zonificación ecológico-económica, de nivel medio o superior, aprobada por el gobierno regional o gobierno local correspondiente, y previa opinión vinculante del Ministerio del Ambiente*** *de acuerdo al procedimiento administrativo que aprueben ambas autoridades para tal fin.*
>
> *Autorizado el cambio de uso actual para realizar el retiro de la cobertura boscosa, se procede según lo establecido en el artículo referido a desbosque en lo que corresponda.*
>
> ***En los casos de predios privados cuya cobertura vegetal actual contenga masa boscosa, el cambio de uso requiere autorización de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre sustentado en un estudio técnico de microzonificación.***
>
> *En todos los casos, en cada predio o unidad productiva* ***se reserva un mínimo del treinta por ciento de la masa boscosa existente en tierras de aptitud agrícola, además de la obligación de mantener la vegetación ribereña o de protección. [Resaltado nuestro]***

El impacto en territorios indígenas, donde habitan las comunidades y pueblos originarios de la Amazonía, es aún mayor por la vinculación que existe entre ciertas actividades

agropecuarias y el tráfico ilegal de tierras. En ese sentido, existe evidencia que comprueba incluso la realización de actividades ilícitas que ponen en riesgo la vida e integridad de la población.

A nuestro juicio, el Proyecto de Ley promueve la deforestación por las siguientes razones:

i. La cobertura forestal, los ecosistemas forestales, la fauna silvestre y los servicios ecosistémicos que brindan los ecosistemas forestales son recursos naturales y patrimonio de la Nación, tal como lo establecen el artículo 66 de la Constitución Política del Perú (1993) y la Ley N° 26821.

ii. Por ello, ni las tierras forestales, ni los ecosistemas forestales se otorgan en propiedad a particulares, por tanto, no son propiedad del titular de un predio incluso si: 1). categorizado como tierra de aptitud agrícola; y 2) en base a dicha categorización fue titulado o reconocida la posesión de los particulares.

iii. Si un predio rústico con título de propiedad o posesión no cuenta con un estudio previo de clasificación de tierras que determine su capacidad de uso agrícola, entonces proviene de un proceso de titulación nulo, adulterado, fraudulento o corrupto. Por lo que esta iniciativa legislativa estaría **CONVALIDANDO** la invasión de tierras públicas, de aptitud agrícola, forestal o de protección, y su titulación fraudulenta, como ocurre en varios procesos actuales de investigación fiscal por tráfico de tierras (tales como Barranquita, Tamshiyacu, Cochanía, Ocho Sur P. Ocho Sur U., así como invasiones a territorios indígenas como ocurre en Santa Clara de Uchunya etc.) debilitando el cumplimiento de las normas forestales, y boicoteando los procesos de investigación fiscal por deforestación, tala ilegal, tráfico de tierras, invasión de bosques, y la violencia asociada a ellos.

iv. Ello, en virtud a que una vez producido el retiro de la cobertura forestal y la instalación de cultivos agrícolas será muy difícil determinar la aptitud originaria del suelo, pero en base a los registros históricos si se puede determinar el tipo de cobertura vegetal existente previamente, y en la mayoría de los casos se puede probar que existía cobertura forestal, fauna y ecosistemas forestales que brindaban servicios ecosistémicos, con lo cual también se estaría CONVALIDANDO la deforestación y tala ilegal NO AUTORIZADA, así como la matanza de especies de fauna, alteración del paisaje y pérdida de servicios ecosistémicos.

v. Tampoco se estaría respetando la reserva ecológica del 30% de la cobertura forestal en predios agrícolas donde se hubiera autorizado el cambio de uso, ni se estaría respetando la intangibilidad de la faja fiscal (área de protección de los ecosistemas acuáticos que contempla el mantenimiento de la vegetación en un radio o perímetro de 50 metros a cada lado de los ríos, quebradas o lagunas) protegidos tanto por la Ley forestal, como por la ley de aguas.

vi. Esta iniciativa, lejos de ayudar a formalizar las actividades económicas ilegalmente establecidas (de café, cacao, palma aceitera, coca, entre otros) favorece a las mafias de tráfico de tierras, invasión de bosques y violencia que abastece de tierras a la gran industria que ha deforestado miles de hectáreas vulnerando las normas forestales y ambientales, además de promover la invasión de bosques, la deforestación y tierras comunales para adjudicarse áreas mediante

Escaneado con CamScanner

67

Escaneado con CamScanner

la instalación de cualquier cultivo agrícola de rápido crecimiento, sin considerar plazos razonables para la implementación de sistemas agrícolas intensivos.

3.4. Sobre la incompatibilidad del Proyecto de Ley con los derechos fundamentales de los pueblos indígenas amazónicos

Como se ha mencionado, el Proyecto de Ley en mención tiene por objetivo legitimar a aquellos que vienen realizando actividades agropecuarias de forma ilegal con anterioridad, incluyendo para ello las zonas donde existen territorios indígenas pendientes de ser titulados.

En ese sentido, el Proyecto de Ley está destinado a favorecer a los posesionarios que carecen de títulos de propiedad, generalmente invasores dedicados al tráfico ilegal de tierras. Se facilita, por tanto, la ocupación de colonos de tierras de en la Amazonia, pues permite la deforestación en predios privados con título y a posesionarios[7]. Esta medida, como se ha sostenido, afecta gravemente a los derechos territoriales y ambientales de las comunidades y pueblos indígenas amazónicos.

Con relación al medio ambiente, debemos comenzar por delimitar su contenido constitucional protegido de. El Tribunal Constitucional (TC), a través de su jurisprudencia[8], ha desarrollado el contenido del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y equilibrado a la vida, reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución, señalado que este se compone de dos elementos: **a) el derecho a gozar de ese medio ambiente; y b) el derecho a que ese medio ambiente se preserve.**

En relación con el primer componente, el Tribunal Constitucional ha precisado que el derecho «comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido»[9].

En relación con el segundo componente de este derecho, el Tribunal hace referencia a la obligación del Estado de protegerlo en forma efectiva, en su rol de garante; así, «[e]l derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute [...] tal obligación alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente»[10].

En este contexto, la obligación del Estado no se materializa en acciones dispersas y aisladas, sino se le impone –entre otros– el deber de contar con una política pública en

---

[7] https://dar.org.pe/normas-que-impactan-bosques-analisis-de-la-reciente-norma-que-debilitaria-la-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre/

[8] STC. Exp. N° 03510-2003-AA/TC, fundamento 2.d.

[9] *Ibidem.*

[10] *Ibidem.*

63 sesenticinco

Escaneado con CamScanner

materia de control del uso de plaguicidas altamente tóxicos, bien diseñada y ejecutada, con el objetivo de preservar el medio ambiente y optimizar su protección frente a cualquier amenaza. Ello, igualmente, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución, que señala: «[e]l Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales».

Para el TC, este artículo «establece la obligación perentoria del Estado de instituir la política nacional del ambiente. Ello implica un conjunto de acciones que el Estado se compromete a desarrollar o promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran afectarlo. Esta política nacional -entendida como el conjunto de directivas para la acción orgánica del Estado a favor de la defensa y conservación del ambiente- debe permitir el desarrollo integral de todas las generaciones de peruanos que tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de su existencia»[11].

Este componente supone dos obligaciones: a) **abstenerse de adoptar acciones que afecten el medio ambiente** (dimensión subjetiva del derecho); y b) adoptar todas las medidas necesarias para su protección (dimensión objetiva del derecho). En relación con la primera, el TC ha precisado que «[en] su faz reaccional, el Estado asume la obligación de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten el medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana»[12].

Sobre la segunda, el Tribunal ha señalado inteligentemente que «[e]n su dimensión prestacional, impone al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades, entre las cuales cabe mencionar la de expedir disposiciones legislativas destinadas a que desde diversos sectores se promueva la conservación del ambiente. Desde luego, no sólo supone tareas de conservación, **sino también de prevención que se afecte a ese ambiente equilibrado**»[13] [Resaltado nuestro].

Asimismo, cabe señalar que la medida afectará de manera especial a las comunidades y pueblos indígenas asentados sobre territorios pendientes de titular, es decir, cuya propiedad aún no ha sido reconocida por las autoridades competentes de los gobiernos regionales amazónicos. Mientras no se concreten sus procedimientos de titulación o ampliación territorial o georreferenciación, son susceptibles de que las autoridades locales entreguen sus tierras a sus espaldas a terceros invasores, como evidencia la práctica de tráfico ilegal de tierras en toda la Amazonía. Este problema es crítico, por ejemplo, en regiones como Ucayali debido a la expansión de cultivos ilegales de palma aceitera y hoja de coca.

La pretendida "legalización" de la ocupación violenta de espacios donde habitan los pueblos indígenas amazónicos, en consecuencia, los expone al peligro, a la pérdida de los recursos naturales que garantizan su subsistencia, así como a situaciones de amenaza a su propia seguridad física.

---

[11] STC. Exp. N.° 03510-2003-AA/TC, fundamento 2.f.
[12] STC. Exp. N.° 00018-2001-AI/TC, fundamento 10
[13] STC. Exp. N.° 03510-2003-AA/TC, fundamento 2.e



Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ANEXO 1-A

Escaneado con CamScanner


REPUBLICA DEL PERU REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL CUI
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI 44051007-3
COPIA
Primer Apellido
REATEGUI
Segundo Apellido
MORI
Pre Nombres
GRACIELA KARINA
Nacimiento Fecha y Ubigeo
29 11 1984 250102
Sexo Estado Civil
F S
Fecha Inscripción
07 02 2005
Fecha Emisión
19 03 2019
Fecha Caducidad
19 03 2027
I<PER44051007<9<<<<<<<<<<<<<<<
8411291F2703198PER<<<<<<<<<<<4
REATEGUI<<GRACIELA<KARINA<<<<<


CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
Departamento
UCAYALI
Provincia
CORONEL PORTILLO
Distrito
YARINACOCHA
Dirección
PSJ EL PESCADOR MZ 1319 LT 2
Observaciones
Donación de Organos NO
Grupo de Votación 243047

72
Folios

Escaneado con CamScanner

ANEXO 1-B

Escaneado con CamScanner

23
Se-Tomo Razón

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° VI - SEDE PUCALLPA
Oficina Registral de PUCALLPA

Código de Verificación:
01181371
Solicitud N° 2022 - 5600727
14/09/2022 11:33:01

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE ASOCIACIONES

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA**:

Que, en la partida electrónica N° 07001968 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de PUCALLPA, consta registrado y vigente el **nombramiento** a favor de REATEGUI MORI, GRACIELA KARINA, identificado con DNI. N° 44051007 , cuyos datos se precisan a continuación.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DEL UCAYALI Y AFLUENTES
LIBRO: ASOCIACIONES
ASIENTO: C0006
CARGO: PRESIDENTE

FACULTADES:
ARTÍCULO 39. El presidente tiene la responsabilidad de asumir la representación de la FECONAU, cada vez que sea necesario ejercer la coordinación y supervisión de las tareas de los diferentes miembros del consejo directivo, firmar todos los documentos oficiales de la FECONAU, convocar a reuniones, así como presentar los informes respectivos.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:
COPIA CERTIFICADA DE FECHA 25/01/2022, EXPEDIDA POR NOTARIO PÚBLICO DE PUCALLPA DR. FERNANDO RUBÉN INGA CÁCERES.

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
NINGUNO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 2

Derechos Pagados: 2022-31-22896 S/ 28.00
Tasa Registral del Servicio S/ 28.00

Verificado y expedido por YARLEQUE ARMAS, YESMINEY ESTEFANI, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Pucallpa, a las 15:46:20 horas del 14 de Septiembre del 2022.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140 DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2013-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL. ARTICULO 61 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD: EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

Escaneado con CamScanner

sunarp

ZONA REGISTRAL N° VI - SEDE PUCALLPA
Oficina Registral de PUCALLPA

Código de Verificación:
01181371
Solicitud N° 2022 - 8000727
14/09/2022 11:33:01

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140 DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARP/WEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL_FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL. ARTICULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

ANEXO

07

CONGRESO DE LA REPUBLICA
AREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
25 NOV. 2022
RECIBIDO
Firma: Hora: 12:23 pm

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú

ONAMIAP

Lima, 24 de noviembre de 2022

CARTA N°0087-2022/ONAMIAP/LIMA

Señora
Chacón Trujillo Nilza Merly
Presidenta de la Comisión Agraria del Congreso

Señor
Martínez Talavera Pedro Edwin
Vice Presidente de la Comisión Agraria del Congreso

Señor
García Correa Idelso Manuel
Secretario de la Comisión Agraria del Congreso

Señor
Ciccia Vásquez Miguel Angel
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

Señor
Coayla Juárez Jorge Samuel
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

Señora
Cordero Jon Tay María del Pilar
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

Señora
Córdova Lobatón María Jessica
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

Señora
Julón Irigoín Elva Edhit
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

Señora
López Morales Jeny Luz
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

Señora
Medina Hermosilla Elizabeth Sara
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

RU: 1011010

Señora
Portero López Hilda Marleny
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

Señor
Quiroz Barboza Segundo Teodomiro
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

Señor
Quispe Mamani Wilson Rusbel
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

Señora
Rivas Chacara Janet Milagros
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

Señora
Robles Araujo Silvana Emperatriz
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

Señor
Sánchez Palomino Roberto Helbert
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

Señor
Valer Pinto Héctor
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

Señor
Zea Choquechambi Oscar
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

Señor
Zeballos Madariaga Carlos Javier
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

Señora
Zeta Chunga Cruz María
Titular de la Comisión Agraria del Congreso

Cc:

Señora
Nelly Aedo Rueda
Jefa del Programa de Pueblos Indígenas
Defensoría del Pueblo

Organización Nacional de
Mujeres Indígenas Andinas
y Amazónicas del Perú

ONAMIAP

Señor
Williams Zapata José Daniel
Presidente
Congreso de la República

Asunto.: Solicitamos reunión para el 25 de noviembre con el fin de exponer los argumentos para el archivamiento de la AUTOGRAFA 649/2021-CR, 894/2021-CR Y 2315/2021-CR "Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal"

De nuestra mayor consideración:

Reciba el saludo cordial de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP; organización nacional representativa de mujeres indígenas, con 16 bases en diez regiones del país, que viene luchando por el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos como mujeres y Pueblos Indígenas.

El objeto de la presente es para solicitar reunión para el 25 de noviembre con el fin de exponer los argumentos para el archivamiento de la AUTOGRAFA de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR Y 2315/2021-CR "Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal", dado que, el 7 de julio del 2022, el Pleno del Congreso aprobó **SIN CONSULTA PREVIA** el Dictamen del Proyecto de Ley "Ley que Modifica al Artículo 29 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre e Incorporan Disposiciones Complementarias Orientadas a Promover la Zonificación Forestal", dicha iniciativa legaliza la deforestación de bosques con el objeto de promover la agricultura en la Amazonia. El Proyecto de Ley busca quitarle un rol determinante al Ministerio del Ambiente y en su lugar, otorgárselo al Ministerio de Agricultura para promover la agricultura en los bosques. Además, promueve y facilita el otorgamiento de derechos sobre los bosques sin que se haya culminado la zonificación forestal. Y exime de responsabilidad penal y administrativa a todos los titulares de predios agrarios en la Amazonía, incluso cuando hayan deforestado ilegalmente grandes extensiones de bosque. En consecuencia, se consume una violación a los derechos de los Pueblos Indígenas, por los argumentos siguientes:

I. Omisión de Consulta Previa

En el procedimiento de aprobación del proyecto de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR Y 2315/2021-CR "Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal", se solicitó información al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agrario-SERFOR, Organizaciones no Gubernamentales, agricultores. Sin embargo, a pesar de vulnerar los derechos de los Pueblos Indígenas no se solicitó opinión a ninguna organización indígena, pueblo indígena, tampoco al Ministerio de Cultura, que, es el ente rector del Estado en materia de pueblos indígenas. **En ese sentido, el Congreso ha vulnerado los derechos a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado.**

En la actualidad el Poder Legislativo tiene pendiente la aprobación de una Ley que reglamente la Consulta Legislativa; sin embargo, el derecho a la consulta previa en el Perú está vigente desde 1995, por lo tanto, no hay eximente de responsabilidad del Congreso para no respetar los derechos de los Pueblos Indígenas a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado, cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectar sus derechos.

La Comisión de Agraria antes que el mencionado proyecto sea aprobado por el congreso debió mínimamente informar a las organizaciones indígenas sobre el Proyecto de Ley en curso y solicitar y considerar la opinión correspondiente.

II. Derechos vulnerados

Como ha sido señalado en el acápite anterior, el Congreso ha vulnerado los derechos a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado, al no haber notificado a las organizaciones indígenas sobre la medida legislativa a aprobarse susceptible de vulnerar sus derechos.

Sin perjuicio de ello, este Proyecto de Ley en su contenido vulnera otros derechos:

a) Propiedad Comunal

El Proyecto de Ley en referencia tiene como objeto "formalizar áreas de bosque amazónico a través de certificados de posesión emitidos por autoridad competente en territorio de los pueblos indígenas". En el Perú el Estado ha promovido sistemáticamente la agricultura en la Amazonía, otorgando predios agrarios, muchos de estos se superponen al territorio colectivo ancestral de los Pueblos Indígenas y han significado una forma de despojo territorial. Pero además de ello, como se sabe, para realizar actividades agrícolas en la Amazonía se ha tenido que deforestar millones de hectáreas de bosque, siendo la deforestación una causa principal de la crisis climática que actualmente enfrentamos. En ese marco, el proyecto cuestionado sería

inconstitucional al contravenir el artículo 89 de la Constitución Política del Estado peruano, el cual establece que la propiedad comunal es imprescriptible.

> ***Constitución Política del Perú de 1993***
> *Artículo 89°*
> *Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.*
> *Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece.* ***La propiedad de sus tierras es imprescriptible****, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.*
> *El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.*

> ***Convenio 169 de la OIT***
> *Artículo 14*
> *Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además,* ***en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.*** *A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.*

b) Derecho a la vida y subsistencia

Es evidente que el Estado, a través del Congreso está vulnerando el derecho a la vida y subsistencia de las poblaciones indígenas del Perú. El PL en referencia, pone en peligro la vida y subsistencia de los pueblos indígenas, puesto que, el precitado proyecto de ley tiene el propósito de despojar el territorio de los pueblos indígenas. En consecuencia, privará de los recursos naturales existentes en su territorio, pondrá en peligro el acceso al agua de los pueblos indígenas, elemento indispensable para el desarrollo y existencia de los pueblos ancestrales y milenarios del Perú. En ese marco, el despojo territorial que promueve este proyecto de ley, "busca extinguir las tradiciones y costumbres, de tal modo que ponga en peligro la propia subsistencia del grupo y de sus integrantes". (Corte IDH, caso Saramaka, sentencia de fondo, párr. 128).

> ***Constitución Política del Perú 1993***
> ***Artículo 2°.***
> ***Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad****, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.*

c) Derecho a los recursos naturales.

El Congreso está vulnerando el acceso a los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas, el uso y disfrute de estos recursos para los pueblos indígenas constituyen la base de las economías de subsistencia. En ese sentido, el Convenio 169 de la OIT Y la

DNUDPI refiere que los pueblos indígenas tienen los siguientes derechos:

Convenio 169 de la OIT y Declaración de las Naciones Unidas Sobre Derechos de Los Pueblos Indígenas
Artículo 7 y 15

- *Derecho a los recursos que tradicionalmente han poseído.*
- *Derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales.*
- *Derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar los recursos que poseen por tradición o que hayan adquirido de otra forma.*
- *Obligación del Estado de proteger los recursos naturales de los Pueblos Indígenas.*
- *Obligación del Estado de asegurar los derechos a las tierras, territorios y recursos de los Pueblos Indígenas, respetando las costumbres, tradiciones y los sistemas de tenencia de los Pueblos Indígenas.*
- *Derecho a la conservación y protección del medio ambiente y la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos.*
- *Obligación del Estado de tomar medidas en cooperación con los Pueblos indígenas, para proteger y preservar el medio ambiente de sus territorios.*

III. Amenazas del Proyecto de Ley

Como organizaciones indígenas manifestamos nuestra preocupación porque este PL so pretexto de promover la agricultura en la Amazonía, legaliza la deforestación de bosques dentro de los territorios indígenas. En tal sentido, pretende legitimar el despojo territorial a los pueblos indígenas, es una amenaza para la subsistencia de las poblaciones indígenas, por tanto, ataca a la diversidad cultural, al territorio, a los recursos naturales.

Además, porque el proyecto cuestionado sería inconstitucional al contravenir el artículo 89 de la Constitución Política del Estado peruano, el cual establece que la propiedad comunal es imprescriptible, en ese marco, el precitado proyecto de ley aprobado, pretende legalizar la deforestación en territorio de los pueblos indígenas, en consecuencia, formalizar la propiedad a través de certificados de posesión. Asimismo, por quebrantar lo dispuesto en los numerales 1 y 22 del artículo 2 y los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución Política del Perú, referidos a promover el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica, atentando contra el desarrollo sostenible de la Amazonia con una legislación adecuada, y poniendo en grave riesgo el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida de los personas, y más específicamente de los pueblos indígenas.

IV. El Legislativo debe allanarse a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo.

Como hemos señalado líneas arriba, la Comisión de Agraria del Congreso, solicitó opinión a distintos sectores: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agrario-SERFOR, Organizaciones no Gubernamentales, agricultores. El PL no es viable porque entre otros motivos, "se afecta la integridad física de las poblaciones indígenas, así mismo, su identidad, territorio, sus recursos naturales, en tal sentido, proponemos que dicho PL en referencia sea consultado con los pueblos indígenas.

Preocupa sobremanera, que la Comisión de Agraria no haya solicitado la opinión de los pueblos indígenas, así mismo, del Ministerio de Cultura, ente rector en materia de Pueblos Indígenas.

En ese contexto, el Estado a través de sus entidades gubernamentales "debe garantizar la propiedad efectiva de los pueblos indígenas y abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de su territorio" (Corte IDH, Xucuru vs Brasil, párr. 114).

En ese tenor, conforme al Acuerdo del Consejo Directivo 80-2003-2004/CONSEJO-CR, y por los fundamentos antes expuestos, **solicitamos que la Comisión Agraria del Congreso reconsidere el Dictamen y se ALLANE a las observaciones formuladas por el Presidente de la Republica.**

Sin otro particular, y esperando que nuestras opiniones sean consideradas y atendidas, agradecemos la atención a la presente.

Por lo expuesto, solicitamos acceder a nuestra petición por ser de justicia.

Atentamente,

PRESIDENTA ONAMIAP

Presidenta
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú

ANEXO

08

Lima, 23 de noviembre de 2022

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRÁMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
28 NOV. 2022
RECIBIDO
Firma: Hora: 2:20

P.L. 894/2021-CR

Señores y señoras
José Williams Zapata
Presidente del Congreso de la República
Lima, Perú

Margot Palacios Huamán
Presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología
Lima, Perú

Nilza Chacón Trujillo
Presidenta de la Comisión Agraria
Lima, Perú

Asunto: Ejercitamos derecho de petición a fin de que se someta a consulta previa la Autógrafa de la Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal

1. Organizaciones solicitantes

La **Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Kichwa de San Martín (CODEPISAM)** es una organización indígena afiliada a AIDESEP, que se organiza como organización regional indígena más importante de la Región San Martín.

En la actualidad representa a más de 130 comunidades nativas pertenecientes a los pueblos awajún, kichwa y shawi, establecidos en la región San Martín.

Su presidente y representante legal es Wilfredo Tsamash Cabrera, líder del pueblo awajún y ciudadano peruano, identificado con DNI N° 43996171, y con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11036206, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tarapoto, ZONA REGISTRAL N° III – SEDE MOYOBAMBA. Cuenta con domicilio legal en el Pasaje Limatambo N° 121, Barrio Comercio del Distrito de Tarapoto, Provincia y Región San Martín.

2. Petición

Solicitamos a sus despachos lo siguiente:

i. Iniciar un proceso de consulta previa, libre e informada con relación a la **Autógrafa de la Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal** (en adelante, el Proyecto de Ley), incluyendo a todas las

RJ 1012268

organizaciones representativas de los pueblos indígenas amazónicos a nivel nacional, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 2, 6 y 9 de la Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas y originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

ii. Suspender, mientras dure el proceso de consulta previa, libre e informada según los estándares nacionales e internacionales en la materia, cualquier acto administrativo o legislativo destinado a la aprobación del Proyecto de Ley.

3. Fundamentación

Las organizaciones solicitantes consideramos que el Proyecto de Ley en mención promueve la deforestación de los bosques amazónicos, así como la invasión y despojo de los territorios donde habitan ancestralmente las comunidades y pueblos indígenas a nivel nacional. En consecuencia, constituye una amenaza cierta a nuestros derechos territoriales y ambientales, por lo que el Congreso de la República tiene la obligación de iniciar un proceso de consulta previa, libre e informada que incluya al conjunto de organizaciones representativas del movimiento indígena en toda la Amazonía peruana.

Fundamentamos nuestra solicitud en los argumentos que se presentan a continuación.

3.1. Sobre el impacto directo en los derechos fundamentales de los pueblos indígenas amazónicos

El Proyecto de Ley impacta directa y negativamente en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas amazónicos de carácter territorial y ambiental, al punto de convertirse en una amenaza cierta hacia los mismos. Estos derechos se encuentran reconocidos en forma unánime por la Constitución Política del Estado y los principales instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Los derechos territoriales de los pueblos indígenas comprenden la propiedad colectiva sobre sus territorios ancestrales, de conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política del Estado; el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y los artículos 14 y 15 del Convenio N.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

Asimismo, el derecho de los pueblos indígenas a gozar de un medio ambiente –como el del resto de la ciudadanía nacional– está reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución Política del Estado; el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y los artículos 4 y 7 del Convenio N.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

Cabe reiterar que nos encontramos ante una amenaza cierta de violación a los derechos mencionados, cuya relevancia jurídica es aún mayor a la simple "afectación directa" que se exige como requisito para iniciar un proceso de consulta previa, libre e informada.

Para el Tribunal Constitucional (TC), existe afectación directa cuando estamos ante "cambios relevantes y directos en la situación jurídica". En sus palabras, la consulta procede ante actos normativos y administrativos "susceptible[s] de afectar directamente a los pueblos indígenas, ya que implica cambios relevantes y directos en la situación jurídica de éstos"[1]. Posteriormente, el TC precisó que "no se requiere la detección de una afectación, sino que basta con que tal afectación directa sea potencial"[2].

En el Derecho Internacional, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el criterio para evaluar la pertinencia de la consulta previa está vinculado a la evaluación y análisis del impacto de la medida en el valor de los territorios de los pueblos según sus propias cosmovisiones.

> *"Los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en* ***las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios, tomando en consideración la especial relación entre los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales"*** [3] *[Resaltado nuestro]*

En el presente caso, el Proyecto de Ley genera un impacto que excede el de la afectación directa, produciéndose además una amenaza de violación a derechos fundamentales que exige la realización de un proceso de consulta previa, libre informada para la salvaguarda de nuestros territorios y el medio ambiente.

3.2. Sobre el contexto en que se aprueba el Proyecto de Ley

Como recuerda Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)[4] citando el informe de Ministerio del Ambiente intitulado "Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático"[5], una de las principales causas de la deforestación en el Perú es la expansión de la agricultura. Esta actividad alcanza un 51.6 % a nivel nacional.

Asimismo, según esta fuente, el 48.4 % proviene de otras causas vinculadas al cambio de uso de la tierra, como la ganadería pequeña y mediana escala; también actividades extractivas ilegales e informales como la minería y tala ilegal, el cultivo de coca y la expansión de infraestructura con proyectos de hidroeléctricas, hidrocarburos y carreteras.

De igual manera, citando al Global Forest Watch[6], DAR precisa que con la pandemia este proceso de deforestación se ha incrementado. Mientras que en 2019 se deforestaron 231, 257 hectáreas (ha) de bosques; en 2020 se perdieron 278, 656 ha. Es decir, la deforestación se incrementó entonces en 20.5 %. En 2021, se deforestaron 225,203 ha de bosques en el Perú.

---

[1] STC. Exp. N.° 00022-2009-PI/TC, f.j. 19.
[2] STC. Exp. N.° 00012-2015-AI/TC, f.j. 102.
[3] CIDH (2009). *Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos*, párr. 273.
[4] Ver: https://dar.org.pe/normas-que-impactan-bosques-analisis-de-la-reciente-norma-que-debilitaria-la-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre/.
[5] Ver: http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf.
[6] Ver: https://www.globalforestwatch.org/.

3.3. Sobre la amenaza a los derechos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas amazónicos

A las organizaciones solicitantes nos preocupa de manera especial la disposición única final del Proyecto de Ley, referida a la clasificación de suelos y de cambio de uso para promover actividades agropecuarias existentes. El problema es que con ella es que busca "legalizar" el cambio de uso no autorizado de tierras forestales que forman parte del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación.

Al respecto, señala el Proyecto de Ley:

> ***"ÚNICA. - Clasificación de tierras y reglas sobre cambio de uso para actividades agropecuarias existentes***
>
> *Los predios rústicos con título de propiedad o constancia de posesión, emitidos por autoridad competente hasta la entrada en vigencia de la presente ley o estén dentro de los alcances de la Ley 31145, Ley de saneamiento físico-legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales,* ***contarán con la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM) para desarrollar cultivos en limpio, permanentes o pastos; y, estarán exceptuados del cumplimiento de las reglas sobre cambio de uso a que se refiere el artículo 38 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, siempre que en esas áreas estén desarrollando exclusivamente actividades agropecuarias con anterioridad".*** [Resaltado nuestro]

El Proyecto de Ley, en consecuencia, viola el artículo 38 de la actual Ley 29763, que regula las condiciones en que es posible acceder a la autorización cambio de uso en tierras con capacidad de uso mayor cultivos en limpio o permanentes que cuentan con cobertura forestal actual. Señala la Ley 29763:

> ***Artículo 38. Uso de tierras de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes con cobertura forestal actual***
>
> *Cuando exista cobertura boscosa en tierras de dominio público técnicamente clasificadas como de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes, según el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor,* ***el SERFOR puede autorizar su cambio de uso actual a fines agropecuarios, respetando la zonificación ecológico-económica, de nivel medio o superior, aprobada por el gobierno regional o gobierno local correspondiente, y previa opinión vinculante del Ministerio del Ambiente*** *de acuerdo al procedimiento administrativo que aprueben ambas autoridades para tal fin.*
>
> *Autorizado el cambio de uso actual para realizar el retiro de la cobertura boscosa, se procede según lo establecido en el artículo referido a desbosque en lo que corresponda.*
>
> ***En los casos de predios privados cuya cobertura vegetal actual contenga masa boscosa, el cambio de uso requiere autorización de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre sustentado en un estudio técnico de microzonificación.***
>
> *En todos los casos, en cada predio o unidad productiva* ***se reserva un mínimo del treinta por ciento de la masa boscosa existente en tierras de aptitud agrícola, además de la obligación de mantener la vegetación ribereña o de protección****. [Resaltado nuestro]*

El impacto en territorios indígenas, donde habitan las comunidades y pueblos originarios de la Amazonía, es aún mayor por la vinculación que existe entre ciertas actividades

agropecuarias y el tráfico ilegal de tierras. En ese sentido, existe evidencia que comprueba incluso la realización de actividades ilícitas que ponen en riesgo la vida e integridad de la población.

A nuestro juicio, el Proyecto de Ley promueve la deforestación por las siguientes razones:

i. La cobertura forestal, los ecosistemas forestales, la fauna silvestre y los servicios ecosistémicos que brindan los ecosistemas forestales son recursos naturales y patrimonio de la Nación, tal como lo establecen el artículo 66 de la Constitución Política del Perú (1993) y la Ley N° 26821.

ii. Por ello, ni las tierras forestales, ni los ecosistemas forestales se otorgan en propiedad a particulares, por tanto, no son propiedad del titular de un predio incluso si: 1). categorizado como tierra de aptitud agrícola; y 2) en base a dicha categorización fue titulado o reconocida la posesión de los particulares.

iii. Si un predio rústico con título de propiedad o posesión no cuenta con un estudio previo de clasificación de tierras que determine su capacidad de uso agrícola, entonces proviene de un proceso de titulación nulo, adulterado, fraudulento o corrupto. Por lo que esta iniciativa legislativa estaría **CONVALIDANDO** la invasión de tierras públicas, de aptitud agrícola, forestal o de protección, y su titulación fraudulenta, como ocurre en varios procesos actuales de investigación fiscal por tráfico de tierras (como los casos de Santa Rosillo de Yanayacu, Anak Kurutuyaku, Tupac Amarú de la zona del Bajo Huallaga; y Shimpiyacu y Huascayacu en la zona del Alto Mayo) debilitando el cumplimiento de las normas forestales, y boicoteando los procesos de investigación fiscal por deforestación, tala ilegal, tráfico de tierras, invasión de bosques, y la violencia asociada a ellos.

iv. Ello, en virtud a que una vez producido el retiro de la cobertura forestal y la instalación de cultivos agrícolas será muy difícil determinar la aptitud originaria del suelo, pero en base a los registros históricos si se puede determinar el tipo de cobertura vegetal existente previamente, y en la mayoría de los casos se puede probar que existía cobertura forestal, fauna y ecosistemas forestales que brindaban servicios ecosistémicos, con lo cual también se estaría CONVALIDANDO la deforestación y tala ilegal NO AUTORIZADA, así como la matanza de especies de fauna, alteración del paisaje y pérdida de servicios ecosistémicos.

v. Tampoco se estaría respetando la reserva ecológica del 30% de la cobertura forestal en predios agrícolas donde se hubiera autorizado el cambio de uso, ni se estaría respetando la intangibilidad de la faja fiscal (área de protección de los ecosistemas acuáticos que contempla el mantenimiento de la vegetación en un radio o perímetro de 50 metros a cada lado de los ríos, quebradas o lagunas) protegidos tanto por la Ley forestal, como por la ley de aguas.

vi. Esta iniciativa, lejos de ayudar a formalizar las actividades económicas ilegalmente establecidas (de café, cacao, palma aceitera, coca, entre otros) favorece a las mafias de tráfico de tierras, invasión de bosques y violencia que abastece de tierras a la gran industria que ha deforestado miles de hectáreas vulnerando las normas forestales y ambientales, además de promover la invasión de bosques, la deforestación y tierras comunales para adjudicarse áreas mediante

la instalación de cualquier cultivo agrícola de rápido crecimiento, sin considerar plazos razonables para la implementación de sistemas agrícolas intensivos.

3.4. Sobre la incompatibilidad del Proyecto de Ley con los derechos fundamentales de los pueblos indígenas amazónicos

Como se ha mencionado, el Proyecto de Ley en mención tiene por objetivo legitimar a aquellos que vienen realizando actividades agropecuarias de forma ilegal con anterioridad, incluyendo para ello las zonas donde existen territorios indígenas pendientes de ser titulados.

En ese sentido, el Proyecto de Ley está destinado a favorecer a los posesionarios que carecen de títulos de propiedad, generalmente invasores dedicados al tráfico ilegal de tierras. Se facilita, por tanto, la ocupación de colonos de tierras de en la Amazonia, pues permite la deforestación en predios privados con título y a posesionarios[7]. Esta medida, como se ha sostenido, afecta gravemente a los derechos territoriales y ambientales de las comunidades y pueblos indígenas amazónicos.

Con relación al medio ambiente, debemos comenzar por delimitar su contenido constitucional protegido de. El Tribunal Constitucional (TC), a través de su jurisprudencia[8], ha desarrollado el contenido del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y equilibrado a la vida, reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución, señalado que este se compone de dos elementos: **a) el derecho a gozar de ese medio ambiente; y b) el derecho a que ese medio ambiente se preserve.**

En relación con el primer componente, el Tribunal Constitucional ha precisado que el derecho «comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido»[9].

En relación con el segundo componente de este derecho, el Tribunal hace referencia a la obligación del Estado de protegerlo en forma efectiva, en su rol de garante; así, «[e]l derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute [...] tal obligación alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente»[10].

En este contexto, la obligación del Estado no se materializa en acciones dispersas y aisladas, sino se le impone –entre otros– el deber de contar con una política pública en

---

[7] https://dar.org.pe/normas-que-impactan-bosques-analisis-de-la-reciente-norma-que-debilitaria-la-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre/

[8] STC. Exp. N° 03510-2003-AA/TC, fundamento 2.d.

[9] *Ibídem.*

[10] *Ibídem.*

materia de control del uso de plaguicidas altamente tóxicos, bien diseñada y ejecutada, con el objetivo de preservar el medio ambiente y optimizar su protección frente a cualquier amenaza. Ello, igualmente, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución, que señala: «[e]l Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales».

Para el TC, este artículo «establece la obligación perentoria del Estado de instituir la política nacional del ambiente. Ello implica un conjunto de acciones que el Estado se compromete a desarrollar o promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran afectarlo. Esta política nacional -entendida como el conjunto de directivas para la acción orgánica del Estado a favor de la defensa y conservación del ambiente- debe permitir el desarrollo integral de todas las generaciones de peruanos que tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de su existencia»[11].

Este componente supone dos obligaciones: a) **abstenerse de adoptar acciones que afecten el medio ambiente** (dimensión subjetiva del derecho); y b) adoptar todas las medidas necesarias para su protección (dimensión objetiva del derecho). En relación con la primera, el TC ha precisado que «[en] su faz reaccional, el Estado asume la obligación de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten el medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana»[12].

Sobre la segunda, el Tribunal ha señalado inteligentemente que «[e]n su dimensión prestacional, impone al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades, entre las cuales cabe mencionar la de expedir disposiciones legislativas destinadas a que desde diversos sectores se promueva la conservación del ambiente. Desde luego, no sólo supone tareas de conservación, **sino también de prevención que se afecte a ese ambiente equilibrado**»[13] [Resaltado nuestro].

Asimismo, cabe señalar que la medida afectará de manera especial a las comunidades y pueblos indígenas asentados sobre territorios pendientes de titular, es decir, cuya propiedad aún no ha sido reconocida por las autoridades competentes de los gobiernos regionales amazónicos. Mientras no se concreten sus procedimientos de titulación o ampliación territorial o georreferenciación, son susceptibles de que las autoridades locales entreguen sus tierras a sus espaldas a terceros invasores, como evidencia la práctica de tráfico ilegal de tierras en toda la Amazonía. Este problema es crítico, por ejemplo, en regiones como Ucayali debido a la expansión de cultivos ilegales de palma aceitera y hoja de coca.

La pretendida "legalización" de la ocupación violenta de espacios donde habitan los pueblos indígenas amazónicos, en consecuencia, los expone al peligro, a la pérdida de los recursos naturales que garantizan su subsistencia, así como a situaciones de amenaza a su propia seguridad física.

---

[11] STC. Exp. N.° 03510-2003-AA/TC, fundamento 2.f.
[12] STC. Exp. N.° 00018-2001-AI/TC, fundamento 10
[13] STC. Exp. N.° 03510-2003-AA/TC, fundamento 2.c

Así lo demuestran los casos de Santa Rosillo de Yanayacu y Anak Kurutuyaku, donde narcotraficantes y traficantes de madera han ocupado la mayor parte del territorio comunal instalar cultivos de hoja de coca, pozas de maceración y narcopistas, en donde los líderes viven en constante amenaza y hoy en día cuentan con alerta temprana de defensores de derechos humanos en el marco del Mecanismo Intersectorial instaurado por Decreto Supremo N° 004-2021-JUS.

En consecuencia, el Proyecto de Ley constituye una amenaza a los derechos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas amazónicos, razón que amerita que el mismo sea sometido a un proceso de consulta previa, libre e informada, según los estándares nacionales e internacionales en la materia.

ANEXOS:

Anexo 1-A: DNI del presidente de CODEPISAM, Wilfredo Tsamash Cabrera.

Anexo 1-B: Vigencia de poder de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín.

POR TANTO:

Le solicitamos, señores congresistas, dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley N.° 29875 y, en consecuencia, realizar un procedimiento de consulta previa, libre e informada de la Autógrafa de la Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal.

COORDINADOR DE DESARROLLO Y DEFENSA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - CODEPISAM - DE LA REGIÓN SAN MARTÍN

Wilfredo Tsamash Cabrera
Presidente de CODEPISAM

REPUBLICA DEL PERU REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI

CUI 43996171-1



43996171

TSAMASH

Primer Apellido
TSAMASH

Segundo Apellido
CABRERA

Pre Nombres
WILFREDO

Nacimiento: Fecha y Ubigeo
17 11 1986 **210509**

Sexo
M

Estado Civil
S

Fecha Inscripción
04 01 2005
Fecha Emisión
27 02 2020
Fecha Caducidad
27 02 2028



I<PER43996171<0<<<<<<<<<<<<<<<
8611172M2802275PER<<<<<<<<<<<6
TSAMASH<<WILFREDO<<<<<<<<<<<<

CHIPE	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO



Indice Der. 000583 000583 0232

Departamento
SAN MARTIN

Provincia
RIOJA

Distrito
AWAJUN

Dirección
CC.NN BAJO NARANJILLO

Observaciones
Donación de Organos **NO**

Grupo de Votación **241949**

BERNARDO JUAN PACHAS BERTANO
JEFE NACIONAL (I)

ZONA REGISTRAL Nº III - SEDE MOYOBAMBA
Oficina Registral de TARAPOTO

Código de Verificación:
87625803
Solicitud N° 2022 - 7237331
24/11/2022 11:48:47

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE ASOCIACIONES

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA**:

Que, en la partida electrónica N° 11036206 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de TARAPOTO, consta registrado y vigente el **poder** a favor de TSAMASH CABRERA, WILFREDO, identificado con DNI. N° 43996171 , cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COORDINADORA DE DESARROLLO Y DEFENSA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA REGION SAN MARTIN
LIBRO: ASOCIACIONES
ASIENTO: A00012
CARGO: PRESIDENTE

FACULTADES:
ASIENTO A00005:
ARTÍCULO 35 – SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE:

a. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA ASOCIACIÓN ANTE LOS PODERES DEL ESTADO Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE LA REPRESENTACIÓN PROCESAL A QUE SE REFIERE LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, LA DECLARACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LA LEY DE COMUNIDADES NATIVAS N° 22175 Y LOS ARTÍCULOS 89°, 149°, 2° INC. 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.

b. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS Y SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y PRESIDIRLAS;

c. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES, EL ESTATUTO, REGLAMENTOS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y LOS ACUERDOS TOMADOS DE LA ASAMBLEA GENERAL;

d. CONVOCAR A ELECCIONES GENERALES O COMPLEMENTARIAS;

e. DIRIMIR SU DOBLE VOTO EN CASOS DE EMPATE;

f. EXPONER A LA ASAMBLEA GENERAL LA MEMORIA ANUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO;

g. FIRMAR LOS DOCUMENTOS QUE LA ASOCIACIÓN LE REMITA;

h. CELEBRAR CONTRATOS Y/O SUSCRIBIR CONVENIO CON OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE LA ASOCIACIÓN, PREVIO ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DE LA ASAMBLEA GENERAL;

i. MANTENER INFORMADO A LOS REPRESENTANTES DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN DE TODO LO CONCERNIENTES A SU CARGO;

j. INVITAR A OTRAS ORGANIZACIONES A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, CUANDO SEA PERTINENTE;

SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO DE ECONOMÍA, TODO TIPO DE GESTIONES BANCARIAS, ABRIR, CERRAR, TRANSFERIR Y MOVER CUENTAS BANCARIAS, GIRAR, ENDOSAR, Y COBRAR CHEQUES, ACEPTAR, RECEPTAR, GIRAR, RENOVAR, DESCONTAR Y PROTESTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARÉS, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, ASÍ COMO OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. CUIDAR QUE LOS LIBROS DE LA ASOCIACIÓN SE LLEVEN CON LAS FORMALIDADES DE LA LEY BAJO SU RESPONSABILIDAD.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:
COPIA CERTIFICADA N° 144, DE FECHA 26/09/2022, OTORGADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE TARAPOTO,

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

ABG. VÍCTOR DANIEL CORAL PÉREZ.

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
NINGUNO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 2

Derechos Pagados: 2022-99999-2582487 S/ 28.00
Tasa Registral del Servicio S/ 28.00

Verificado y expedido por DAVILA HUATAY, NOELENE, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Moyobamba, a las 12:25:56 horas del 25 de Noviembre del 2022.

Abog. Noelene Dávila Huatay
ABOGADO CERTIFICADOR - CAS
Zona Registral N° III - Sede Moyobamba

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

ANEXO

09

DAR
DERECHO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
AREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
29 NOV. 2022
RECIBIDO
Firma: Horas: 6:10 p.m.

Lima, 28 de noviembre de 2022

CARTA N° 202-2022-DAR/DE

Señor:
JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA
Presidente
Congreso de la República del Perú
Presente.-

Asunto: Envío de carta de pronunciamiento de representantes de sociedad civil y organizaciones Indígenas sobre la autógrafa observada por el ejecutivo que propone la ley que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre

De nuestra mayor consideración,

Reciba el cordial saludo a nombre de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), asociación civil que busca contribuir al fortalecimiento de la gobernanza ambiental y promoción del ejercicio de los derechos humanos para el desarrollo de una Cuenca Amazónica inclusiva, equitativa y sostenible.

Presentamos adjunto el Pronunciamiento desde las Organizaciones Indígenas y Sociedad Civil con más de 90 adhesiones quienes solicitan el archivo de la propuesta de modificación de la Ley Forestal promovida por el Congreso que promovería la deforestación en la Amazonía Peruana, recogida en la autógrafa con los Proyectos de Ley N° 649, N° 894 y N° 2315/2021-CR.

La junta de portavoces del Congreso de la República en sesión del 23 de noviembre ha exonerado del Dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República (en adelante Comisión de Pueblos) a los Proyectos de Ley 649, 894 y 2315/2021-CR, autógrafa observada por el Ejecutivo, que propone la ley que modifica la LFFS.

La exclusión del Dictamen de la Comisión de Pueblos, contraviene el acuerdo del Pleno del Congreso de agosto pasado, cuando se debatió la autógrafa de la ley, que mediante cuestión previa envió el proyecto a la Comisión de Pueblos, precisamente para recoger sus aportes y analizar el impacto de dicha autógrafa sobre los derechos de los pueblos indígenas así como sobre los bosques y el medio ambiente.

Desde la sociedad civil y las organizaciones indígenas consideramos necesario que la Junta de portavoces respete el acuerdo del Pleno y se recoja el Dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología; la misma que debe consultar a la sociedad civil y expertos los efectos de la propuesta. El debate debe incluir la posición y análisis de los pueblos indígenas, a quienes afectaría directamente la propuesta de norma.

Desde las Organizaciones Indígenas se han emitido numerosos pronunciamientos en rechazo a esta autógrafa, señalando que la misma debe pasar por el proceso de Consulta Previa Libre e Informada, alertando que se pone en riesgo los territorios indígenas. Instamos a los señores congresistas a considerar que la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos, fueron consultados ampliamente a los

RU 10137147

En Lima seguimos trabajando de manera remota. Para cualquier comunicación, por favor, escribir al correo: dar@dar.org.pe

pueblos indígenas, como resultado de las mesas de diálogo establecidas tras los lamentables sucesos de Bagua.

Por lo tanto, exhortamos al Congreso de la República defender los derechos de los pueblos indígenas así como el derecho al medio ambiente.

Atentamente,

César Gamboa Balbín
Director Ejecutivo
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

PRONUNCIAMIENTO:

ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ARCHIVAR LA AUTÓGRAFA QUE MODIFICA Y DEBILITA LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, OBSERVADA POR EL EJECUTIVO

Las organizaciones indígenas y la sociedad civil manifestamos nuestra profunda preocupación ante la propuesta de modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre promovida por el Congreso denominada, que promovería la deforestación en la Amazonía peruana, recogida en la autógrafa con los Proyectos de Ley N° 649, N° 894 y N° 2315/2021-CR denominada "Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la Zonificación Forestal". Esta modificación de la ley forestal agudizará la disputa[1] por tierras y la violencia contra los defensores de la Amazonía, que se ha cobrado la vida de 14 líderes indígenas desde el 2020.[2]

El pasado 04 de noviembre del 2022, la Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó un Dictamen[3] insistiendo en la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) que, entre otras cosas, elimina la obligación de contar con una autorización previa antes de realizar actividades agropecuarias que impliquen retirar los bosques. Esta propuesta ha sido recientemente agendada para su debate en el Pleno del Congreso de la República y se estima pueda entrar a debate en los próximos días.

La junta de portavoces del Congreso de la República en sesión del 23 de noviembre[4] ha exonerado del Dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República (en adelante Comisión de Pueblos) a los Proyectos de Ley 649, 894 y 2315/2021-CR, autógrafa observada por el Ejecutivo, que propone la ley que modifica la LFFS.

La exclusión del Dictamen de la Comisión de Pueblos, contraviene el acuerdo del Pleno del Congreso de agosto pasado, cuando se debatió la autógrafa de la ley, que mediante cuestión previa envió el proyecto a la Comisión de Pueblos, para recoger sus aportes y analizar el impacto de dicha autógrafa sobre los derechos de los pueblos indígenas así como sobre los bosques y el medio ambiente.

Desde la sociedad civil consideramos necesario que la Junta de portavoces respete el acuerdo del Pleno y se recoja el Dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología; la misma que debe consultar a la sociedad civil y expertos los efectos de la propuesta. El debate debe incluir la posición y análisis de los pueblos indígenas, a quienes afectaría directamente la propuesta de norma.

Desde las Organizaciones Indígenas se han emitido numerosos pronunciamientos[5] en rechazo a esta autógrafa, señalando que la misma debe pasar por el proceso de Consulta Previa Libre e Informada, alertando que se pone

---

[1] Mongabay Latam. 2017. Bosques de Ucayali: un botín para los traficantes de tierras en Perú. Por Yvette Sierra Praeli. https://es.mongabay.com/2017/09/bosques-ucayali-botin-los-traficantes-tierras-peru/ , Mongabay Latam. 2018. Tráfico de tierras en Ucayali: funcionarios detenidos por pertenecer a mafia. Por Yvette Sierra Praeli. https://es.mongabay.com/2018/12/trafico-tierras-ucayali-bosques-desaparecen/. Epicentro_TV y Proética. 2022. Documental Los Expedientes de la Tala. https://youtu.be/MghPe07XKw0

[2] Ojo Público 2022. Defensores ambientales: La Impunidad somete a los deudos a un duelo eterno. https://ojo-publico.com/3516/defensores-ambientales-el-duelo-eterno-de-sus-deudos

[3] Ver enlace del Dictamen de insistencia por la Comision Agraria del Congreso de la Republica: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NTY1MDU=/pdf/PL%20649%20Y%20OTROS%20(U)

[4] Oficio 1160 - 2022 - 2023 - ADP - D/CR. Carta de la junta de portavoces del Congreso de la República dirigida a la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

[5] https://twitter.com/aidesep_org/status/1564251528713707520?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet, https://twitter.com/OrpioA/status/1564265318263947270?t=tyAwfN-TTnciqT4mG_Mfpg&s=08, https://twitter.com/aidesep_org/status/1595869523701375089, https://www.facebook.com/501896603296148/posts/pfbid0r8Zjx4o6ekfB6wQZRhBW2pzfRRR3sEYmZUHSk73RjbyAAE7f2UApZC1GngMHnSB6l/?d=w&mibextid=, https://www.facebook.com/PERUDAR/videos/823341775459749/,

en riesgo los territorios indígenas. Instamos a los señores congresistas a considerar que la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos, fueron consultados ampliamente a los pueblos indígenas, como resultado de las mesas de diálogo establecidas tras los lamentables sucesos de Bagua. Los intentos de modificar por insistencia la citada norma, sin tomar en cuenta las preocupaciones de los pueblos indígenas, evidencia la impericia e irrespeto de la vida no solo de los pueblos indígenas sino de toda la humanidad porque atentar contra la Amazonía es ecocidio y recrudece aún más la crisis climática actual.

Cabe señalar que a la fecha la Defensoría del Pueblo[6], el Ministerio de Desarrollo Agrario[7] y Riego, el Ministerio de Cultura[8] y el Ministerio del Ambiente[9] han señalado los riesgos y vicios de la propuesta. La sociedad civil, a nivel nacional e internacional ha compartido varios análisis[10] sobre el impacto de la autógrafa y ha observado la falta de análisis técnico de la misma. Considerando que la pérdida de bosques asciende a 2,774,562 hectáreas en el periodo 2001-2021[11] es vital que tanto el Ejecutivo y el Legislativo contemplen la magnitud del daño que ocasiona la propuesta de modificatoria. Se agudizarán los problemas de tala ilegal, cambio de bosques a monocultivos, incremento de los cultivos ilícitos - narcotráfico, tráfico de tierras, pérdida de biodiversidad por degradación de ecosistemas, procesos de sabanización, incendios forestales, despojo de tierras de población indígena, conflictos atomizados, ocupación desordenada del territorio por proyectos de conectividad y extractivos de gran escala. Generando gran inseguridad ciudadana, mayor exposición y vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos, sobrepasando con creces la capacidad del estado para el control, fiscalización ambiental.

Asimismo, la propuesta del Congreso desconoce los esfuerzos del Ejecutivo en los procesos de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor y de zonificación forestal, que coadyuvan a un manejo ordenado del territorio. Según información pública del MIDAGRI[12] a la fecha se han aprobado tres resoluciones de dirección general de la DGAAA con fines de titulación en los departamentos amazónicos de San Martín, Loreto, Amazonas y Ucayali que cubren un total de 13 millones de hectáreas clasificadas por su capacidad de uso mayor. Además, respecto a la zonificación, de acuerdo al SERFOR[13], si bien el avance del proceso a nivel nacional es de 19.37%; se tienen avances significativos en las cinco regiones amazónicas que concentran mayor área de bosques, la

---

https://twitter.com/onamiap/status/1596211812378103808?s=20&t=qicvYkpVF-zHN_nG5qrW2w,
https://twitter.com/onamiap/status/1596215731347128320?s=20&t=qicvYkpVF-zHN_nG5qrW2w,
https://twitter.com/Servindi/status/1595923973786959872?s=20&t=qicvYkpVF-zHN_nG5qrW2w,
https://twitter.com/aidesep_org/status/1595869523701375089?s=20&t=qicvYkpVF-zHN_nG5qrW2w

[6] https://twitter.com/defensoria_peru/status/1563692262302818304?s=24&t=xlVa2vPrxl8kx7VOcOZYmw,
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1595909066177785857?s=19

[7] https://twitter.com/midagriperu/status/1563668835630305281?t=n39TavNVxifiHZuAnLpASw&s=08

[8] https://twitter.com/MinCulturaPe/status/1563702301176565761?t=loITGI1REMpW0ST7npjBQQ&s=08

[9] https://twitter.com/MinamPeru/status/1563910414798229506?t=DIpfyKJBUV0TI0_FiJhpqg&s=08 ,
https://twitter.com/MinamPeru/status/1563642707079155712?t=mz-0ICg2i9Z-ecXN0TTrUg&s=08

[10] DAR. 2022. Normas que impactan bosques: Análisis de la reciente norma que debilitaría la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. https://dar.org.pe/normas-que-impactan-bosques-analisis-de-la-reciente-norma-que-debilitaria-la-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre/, Actualidad Ambiental. 2022. Sin sustento técnico: Congreso aprobó propuesta que debilitaría la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. https://www.actualidadambiental.pe/congreso-aprobo-propuesta-que-debilitaria-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre/

[11] Como se sustenta en el Oficio N° 250-2022-PR con las observaciones del Ejecutivo, según el Programa Nacional de Conservación de Bosques y Cambio Climático del MINAM el año 2020 se alcanzó las 203,272 hectáreas de pérdida de bosques, representando un incremento del 37% de pérdida de bosques comparando con el año 2019. Ese mismo año también se degradaron más ecosistemas que en cualquier año previo; particularmente las regiones con mayor degradación fueron Loreto (4,549,040.64 ha perdidas), seguido por Ucayali (2,321,331.66 ha perdidas), San Martin (2,256,313.23 ha perdidas), Madre de Dios (1,645,677.99 ha perdidas) y Cusco (1,527,004.98 ha perdidas).

[12] Resoluciones de Dirección General N°s 300-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, N° 410-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, N°656-2022-MIDAGRI-DVDIAR-DGAAA.

[13] https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1rBWlgdSv6bgul4RaAyMnpnW9myR3t-sB/page/HHh6B

PRONUNCIAMIENTO:

ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ARCHIVAR LA AUTÓGRAFA QUE MODIFICA Y DEBILITA LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, OBSERVADA POR EL EJECUTIVO

región de San Martín tiene aprobada su zonificación forestal totalmente, Amazonas tiene un avance del 93.71%, Huánuco: 57%, Loreto: 43.24% y Ucayali: 93.71%.

De otro lado, la aprobación de esta modificatoria de la ley forestal, no sólo promovería el avance de la deforestación en la Amazonía peruana y crearía un mal precedente jurídico al otorgar impunidad a grandes empresas que han deforestado la Amazonía ilegalmente durante los últimos años, sino que además pone a nuestro país en riesgo de no cumplir con los compromisos internacionales suscritos como la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+ suscrita entre los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania (DCI), el Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos, los compromisos internacionales en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y de Diversidad biológica (CDB), entre otros, para combatir el cambio climático, la reducción de gases de efecto invernadero en el país y la protección de nuestra biodiversidad.

Solo el cumplimiento de las políticas nacionales, la legislación nacional y los compromisos internacionales, permitirán el manejo sostenible de las más de 68 millones de hectáreas de bosques, que representan casi el 60% del territorio y que la población presente y futura pueda disfrutar de los diversos servicios ecosistémicos que brindan los bosques, que son la base de la producción de los sectores agropecuarios, forestal y pesquero, además, evitan la dispersión de enfermedades zoonóticas como la COVID-19 y próximas pandemias, y sus impactos sociales y económicos. Un retroceso de esta magnitud en la legislación forestal peruana, no solo perjudicará a los pueblos indígenas y población local amazónica cuya vida depende de los bosques, sino a toda la población en su conjunto, por eso hacemos un llamado al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo y Legislativo a que se continúe con los esfuerzos de fortalecer la gobernanza del sector forestal y que el Congreso archive definitivamente el dictamen de los Proyectos de Ley N° 649, N° 894 y N° 2315/2021-CR.

Suscriben:

1. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP
2. Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central – ARPI SC
3. Consejo Machiguenga del Río Urubamba - COMARU
4. Organización Regional Aidesep Ucayali - ORAU
5. Comunidad Campesina de San Pedro de Casta
6. Comunidad Amalai - Cusco
7. Institución Nativa Oyate Sonqoyoc
8. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR
9. Animal Defenders International - ADI
10. Agencia De Investigación Ambiental (EIA- Environmental Investigation Agency)
11. Asociación Servicios Educativos Rurales

PRONUNCIAMIENTO:

ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ARCHIVAR LA AUTÓGRAFA QUE MODIFICA Y DEBILITA LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, OBSERVADA POR EL EJECUTIVO

12. Asociación Amazónicos Por La Amazonía - AMPA
13. Asociación Nacional Del Centro -ANC
14. Asociación Marianista de Acción Social - AMAS Marianistas
15. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor - Pasco
16. Asociación de Cosecha y Siembra de Agua (ASYCA) - San Pedro de Casta
17. Asociación Arariwa
18. Asociación civil JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía
19. Asociación ProPurús
20. Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
21. Asociación Tecnología Ecología y Desarrollo – DETEC
22. Asociación para el Desarrollo y Conservación de los Recursos Naturales del Perú – ACRENAP
23. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible - IDLADS
24. Instituto de Defensa Legal - IDL
25. CASA PERÚ
26. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
27. Centro Bartolomé De Las Casas - CBC
28. Centro para el Desarrollo de los Pueblos AYLLU - CUSCO
29. Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación - CEDEP Perú
30. Centro de Investigación y Educación Popular Alternativa
31. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
32. Centro de Culturas Indígenas del Perú CHIRAPAQ
33. Comisión Episcopal De Acción Social - CEAS
34. Casa del Protector Marcahuasi
35. Centro de Desarrollo Agropecuario
36. CUIDAR

PRONUNCIAMIENTO:

ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ARCHIVAR LA AUTÓGRAFA QUE MODIFICA Y DEBILITA LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, OBSERVADA POR EL EJECUTIVO

37. Centro de Derechos y Desarrollo - CEDAL
38. Confederación General de Trabajadores del Perú - CGTP
39. Centro de Prevención de la Mujer - CPM Micaela Bastidas
40. Centro de Desarrollo Andino - CDA SISAY
41. Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional - CEPRODEP
42. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado - CIPCA de Piura
43. Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
44. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - DESCO
45. Centro de Estudios para el Desarrollo Regional - CEDER de Arequipa
46. Centro Bartolomé de las Casas de Cusco
47. Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte- CEDEPAS Norte
48. Centro de Investigación y Promoción Popular CENDIPP
49. Centro de Desarrollo Agropecuario - CEDAP Ayacucho
50. Comisión de Ecología y Cuidado de la Creación de la Diócesis de Lurín
51. Centro de Investigación, Capacitación, Asesoría y Promoción-CICAP
52. Derechos Humanos Sin Fronteras - DHSF
53. Diócesis de Chosica - Departamento de Dignidad Humana
54. ECODES Tiempo de Actuar
55. Fomento de la Vida - FOVIDA
56. Fondo Socioambiental del Perú
57. Grupo Pastoral Cuencas Sinodales
58. Centro de educación y comunicación ILLA
59. Iniciativa Interreligiosa Para Los Bosques Tropicales - IRI PERÚ
60. Instituto Del Bien Común
61. Instituto Runa Pacha - IRUPA
62. Grupo Género y Economía

PRONUNCIAMIENTO:

ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ARCHIVAR LA AUTÓGRAFA QUE MODIFICA Y DEBILITA LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, OBSERVADA POR EL EJECUTIVO

63. Grupo Propuesta Ciudadana - GPC
64. Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Kené
65. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático - MOCICC
66. Movimiento Manuela Ramos
67. Movimiento Laudato Si Perú
68. Asociación Paz y Esperanza
69. Plataforma de Empresas y Derechos Humanos
70. Red Ambiental Peruana- RAP
71. Red Muqui
72. Red Eclesial Panamazónica - REPAM - PERÚ
73. Red Uniendo Manos Perú
74. Red Infanto Juvenil por el Buen Vivir - REDINJUV
75. Red Agua Desarrollo y Democracia - REDAD
76. Pastoral Social de Dignidad Humana.
77. Red Pueblos Indígenas y Ecología Integral
78. Red Latinoamericana Iglesias y Minería - Nodo Perú
79. Red Wiphalas / Wiphalas Network
80. Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE
81. Red Nacional De Conservación Voluntaria Y Comunal "AMAZONÍA QUE LATE"
82. Servicios Educativos Rurales (SER)
83. Sociedad Zoológica de Fráncfort Perú-SZF
84. SEDYS Trujillo-Perú- Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad.
85. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA
86. Taller de Derecho Ambiental José Antonio Bonifaz Moreno
87. TierrActiva Perú
88. Tierra Firme

PRONUNCIAMIENTO:

ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ARCHIVAR LA AUTÓGRAFA QUE MODIFICA Y DEBILITA LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, OBSERVADA POR EL EJECUTIVO

89. Vicariato Apostólico de Iquitos
90. Asociación Yunkawasi
91. Rosa Guillen Velarde DNI 06098186
92. Josefina Huamán DNI 07242254
93. Giuliana Larrea Aguinaga - 40826401
94. Ramón Rivero Mejía DNI 40684427
95. Maya Carlina Corminboeuf, antropóloga suiza/boliviana
96. Gloria E. Sarmiento Valenzuela DNI 22091995
97. Hugo Che Piu Deza DNI 10726429
98. Alexis Díaz Limaco DNI 09870846
99. Rosario Narvàez Vargas DNI 07594485
100. Lucía Ruiz Ostoic DNI 08767259
101. Ivan Brehaut Larrea DNI 25738550
102. Irma Elvira Ganoza Macchiavello. 07831713
103. Julia Carmen Espinoza Bernal, DNI 25614801
104. Félix Rojas Orellana DNI 28311915
105. Isabel Coral Presidenta DNI 09373151
106. Ibis Fernández Honores - DNI: 07399151
107. Carmen Valverde Garaban Presidenta DNI 07952336
108. Carmen Aleman, Directora DNI 08673234
109. César Ipenza DNI 40287902

PRONUNCIAMIENTO:

ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ARCHIVAR LA AUTÓGRAFA QUE MODIFICA Y DEBILITA LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, OBSERVADA POR EL EJECUTIVO

Las organizaciones indígenas y la sociedad civil manifestamos nuestra profunda preocupación ante la propuesta de modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre promovida por el Congreso denominada, que promovería la deforestación en la Amazonía peruana, recogida en la autógrafa con los Proyectos de Ley N° 649, N° 894 y N° 2315/2021-CR denominada "Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la Zonificación Forestal". Esta modificación de la ley forestal agudizará la disputa[1] por tierras y la violencia contra los defensores de la Amazonía, que se ha cobrado la vida de 14 líderes indígenas desde el 2020.[2]

El pasado 04 de noviembre del 2022, la Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó un Dictamen[3] insistiendo en la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) que, entre otras cosas, elimina la obligación de contar con una autorización previa antes de realizar actividades agropecuarias que impliquen retirar los bosques. Esta propuesta ha sido recientemente agendada para su debate en el Pleno del Congreso de la República y se estima pueda entrar a debate en los próximos días.

La junta de portavoces del Congreso de la República en sesión del 23 de noviembre[4] ha exonerado del Dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República (en adelante Comisión de Pueblos) a los Proyectos de Ley 649, 894 y 2315/2021-CR, autógrafa observada por el Ejecutivo, que propone la ley que modifica la LFFS.

La exclusión del Dictamen de la Comisión de Pueblos, contraviene el acuerdo del Pleno del Congreso de agosto pasado, cuando se debatió la autógrafa de la ley, que mediante cuestión previa envió el proyecto a la Comisión de Pueblos, para recoger sus aportes y analizar el impacto de dicha autógrafa sobre los derechos de los pueblos indígenas así como sobre los bosques y el medio ambiente.

Desde la sociedad civil consideramos necesario que la Junta de portavoces respete el acuerdo del Pleno y se recoja el Dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología; la misma que debe consultar a la sociedad civil y expertos los efectos de la propuesta. El debate debe incluir la posición y análisis de los pueblos indígenas, a quienes afectaría directamente la propuesta de norma.

Desde las Organizaciones Indígenas se han emitido numerosos pronunciamientos[5] en rechazo a esta autógrafa, señalando que la misma debe pasar por el proceso de Consulta Previa Libre e Informada, alertando que se pone

---

[1] Mongabay Latam. 2017. Bosques de Ucayali: un botín para los traficantes de tierras en Perú. Por Yvette Sierra Praeli. https://es.mongabay.com/2017/09/bosques-ucayali-botin-los-traficantes-tierras-peru/ , Mongabay Latam. 2018. Tráfico de tierras en Ucayali: funcionarios detenidos por pertenecer a mafia. Por Yvette Sierra Praeli. https://es.mongabay.com/2018/12/trafico-tierras-ucayali-bosques-desaparecen/, Epicentro_TV y Proética. 2022. Documental Los Expedientes de la Tala. https://youtu.be/MghPe07XKw0

[2] Ojo Público 2022. Defensores ambientales: La Impunidad somete a los deudos a un duelo eterno. https://ojo-publico.com/3516/defensores-ambientales-el-duelo-eterno-de-sus-deudos

[3] Ver enlace del Dictamen de insistencia por la Comision Agraria del Congreso de la Republica: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NTY1MDU=/pdf/PL%20649%20Y%20OTROS%20(U)

[4] Oficio 1160 - 2022 - 2023 - ADP - D/CR. Carta de la junta de portavoces del Congreso de la República dirigida a la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

[5] https://twitter.com/aidesep_org/status/1564251528713707520?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet, https://twitter.com/OrpioA/status/1564265318263947270?t=tyAwfN-TTnciqT4mG_Mfpg&s=08, https://twitter.com/aidesep_org/status/1595869523701375089, https://www.facebook.com/501896603296148/posts/pfbid0r8Zjx4o6ekfB6wQZRhBW2pzfRRR3sEYmZUHSk73RjbyAAE7f2UApZC1GngMHnSB6l/?d=w&mibextid=,https://www.facebook.com/PERUDAR/videos/823341775459749/,

en riesgo los territorios indígenas. Instamos a los señores congresistas a considerar que la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos, fueron consultados ampliamente a los pueblos indígenas, como resultado de las mesas de diálogo establecidas tras los lamentables sucesos de Bagua. Los intentos de modificar por insistencia la citada norma, sin tomar en cuenta las preocupaciones de los pueblos indígenas, evidencia la impericia e irrespeto de la vida no solo de los pueblos indígenas sino de toda la humanidad porque atentar contra la Amazonía es ecocidio y recrudece aún más la crisis climática actual.

Cabe señalar que a la fecha la Defensoría del Pueblo[6], el Ministerio de Desarrollo Agrario[7] y Riego, el Ministerio de Cultura[8] y el Ministerio del Ambiente[9] han señalado los riesgos y vicios de la propuesta. La sociedad civil, a nivel nacional e internacional ha compartido varios análisis[10] sobre el impacto de la autógrafa y ha observado la falta de análisis técnico de la misma. Considerando que la pérdida de bosques asciende a 2,774,562 hectáreas en el periodo 2001-2021[11] es vital que tanto el Ejecutivo y el Legislativo contemplen la magnitud del daño que ocasiona la propuesta de modificatoria. Se agudizarán los problemas de tala ilegal, cambio de bosques a monocultivos, incremento de los cultivos ilícitos - narcotráfico, tráfico de tierras, pérdida de biodiversidad por degradación de ecosistemas, procesos de sabanización, incendios forestales, despojo de tierras de población indígena, conflictos atomizados, ocupación desordenada del territorio por proyectos de conectividad y extractivos de gran escala. Generando gran inseguridad ciudadana, mayor exposición y vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos, sobrepasando con creces la capacidad del estado para el control, fiscalización ambiental.

Asimismo, la propuesta del Congreso desconoce los esfuerzos del Ejecutivo en los procesos de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor y de zonificación forestal, que coadyuvan a un manejo ordenado del territorio. Según información pública del MIDAGRI[12] a la fecha se han aprobado tres resoluciones de dirección general de la DGAAA con fines de titulación en los departamentos amazónicos de San Martín, Loreto, Amazonas y Ucayali que cubren un total de 13 millones de hectáreas clasificadas por su capacidad de uso mayor. Además, respecto a la zonificación, de acuerdo al SERFOR[13], si bien el avance del proceso a nivel nacional es de 19.37%; se tienen avances significativos en las cinco regiones amazónicas que concentran mayor área de bosques, la

---

https://twitter.com/onamiap/status/1596211812378103808?s=20&t=qicvYkpVF-zHN_nG5qrW2w,
https://twitter.com/onamiap/status/1596215731347128320?s=20&t=qicvYkpVF-zHN_nG5qrW2w,
https://twitter.com/Servindi/status/1595923973786959872?s=20&t=qicvYkpVF-zHN_nG5qrW2w,
https://twitter.com/aidesep_org/status/1595869523701375089?s=20&t=qicvYkpVF-zHN_nG5qrW2w

[6] https://twitter.com/defensoria_peru/status/1563692262302818304?s=24&t=xlVa2vPrxl8kx7VOcOZYmw,
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1595909066177785857?s=19

[7] https://twitter.com/midagriperu/status/1563668835630305281?t=n39TavNVxifiHZuAnLpASw&s=08

[8] https://twitter.com/MinCulturaPe/status/1563702301176565761?t=IoITGI1REMpW0ST7npjBQQ&s=08

[9] https://twitter.com/MinamPeru/status/1563910414798229506?t=DIpfyKJBUV0TI0_FiJhpgg&s=08 ,
https://twitter.com/MinamPeru/status/1563642707079155712?t=mz-0ICg2i9Z-ecXN0TTrUg&s=08

[10] DAR. 2022. Normas que impactan bosques: Análisis de la reciente norma que debilitaría la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. https://dar.org.pe/normas-que-impactan-bosques-analisis-de-la-reciente-norma-que-debilitaria-la-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre/. Actualidad Ambiental. 2022. Sin sustento técnico: Congreso aprobó propuesta que debilitaría la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. https://www.actualidadambiental.pe/congreso-aprobo-propuesta-que-debilitaria-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre/

[11] Como se sustenta en el Oficio N° 250-2022-PR con las observaciones del Ejecutivo, según el Programa Nacional de Conservación de Bosques y Cambio Climático del MINAM el año 2020 se alcanzó las 203,272 hectáreas de pérdida de bosques, representando un incremento del 37% de pérdida de bosques comparando con el año 2019. Ese mismo año también se degradaron más ecosistemas que en cualquier año previo; particularmente las regiones con mayor degradación fueron Loreto (4,549,040.64 ha perdidas), seguido por Ucayali (2,321,331.66 ha perdidas), San Martin (2,256,313.23 ha perdidas), Madre de Dios (1,645,677.99 ha perdidas) y Cusco (1,527,004.98 ha perdidas).

[12] Resoluciones de Dirección General N°s 300-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, N° 410-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, N°656-2022-MIDAGRI-DVDIAR-DGAAA.

[13] https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1rBWlgdSv6bgul4RaAyMnpnW9myR3t-sB/page/HHh6B

PRONUNCIAMIENTO:

ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ARCHIVAR LA AUTÓGRAFA QUE MODIFICA Y DEBILITA LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, OBSERVADA POR EL EJECUTIVO

región de San Martín tiene aprobada su zonificación forestal totalmente, Amazonas tiene un avance del 93.71%, Huánuco: 57%, Loreto: 43.24% y Ucayali: 93.71%.

De otro lado, la aprobación de esta modificatoria de la ley forestal, no sólo promovería el avance de la deforestación en la Amazonía peruana y crearía un mal precedente jurídico al otorgar impunidad a grandes empresas que han deforestado la Amazonía ilegalmente durante los últimos años, sino que además pone a nuestro país en riesgo de no cumplir con los compromisos internacionales suscritos como la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+ suscrita entre los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania (DCI), el Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos, los compromisos internacionales en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y de Diversidad biológica (CDB), entre otros, para combatir el cambio climático, la reducción de gases de efecto invernadero en el país y la protección de nuestra biodiversidad.

Solo el cumplimiento de las políticas nacionales, la legislación nacional y los compromisos internacionales, permitirán el manejo sostenible de las más de 68 millones de hectáreas de bosques, que representan casi el 60% del territorio y que la población presente y futura pueda disfrutar de los diversos servicios ecosistémicos que brindan los bosques, que son la base de la producción de los sectores agropecuarios, forestal y pesquero, además, evitan la dispersión de enfermedades zoonóticas como la COVID-19 y próximas pandemias, y sus impactos sociales y económicos. Un retroceso de esta magnitud en la legislación forestal peruana, no solo perjudicará a los pueblos indígenas y población local amazónica cuya vida depende de los bosques, sino a toda la población en su conjunto, por eso hacemos un llamado al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo y Legislativo a que se continúe con los esfuerzos de fortalecer la gobernanza del sector forestal y que el Congreso archive definitivamente el dictamen de los Proyectos de Ley N° 649, N° 894 y N° 2315/2021-CR.

Suscriben:

1. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP
2. Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central – ARPI SC
3. Consejo Machiguenga del Río Urubamba - COMARU
4. Organización Regional Aidesep Ucayali – ORAU
5. Organización Regional de Mujeres Indígenas de la Provincia de Atalaya - ORMIPA
6. Comunidad Campesina de San Pedro de Casta
7. Comunidad Amalai - Cusco
8. Institución Nativa Oyate Sonqoyoc
9. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR
10. Animal Defenders International - ADI
11. Agencia De Investigación Ambiental (EIA- Environmental Investigation Agency)

PRONUNCIAMIENTO:

ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ARCHIVAR LA AUTÓGRAFA QUE MODIFICA Y DEBILITA LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, OBSERVADA POR EL EJECUTIVO

12. Asociación Servicios Educativos Rurales
13. Asociación Amazónicos Por La Amazonía - AMPA
14. Asociación Nacional Del Centro -ANC
15. Asociación Marianista de Acción Social - AMAS Marianistas
16. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor - Pasco
17. Asociación de Cosecha y Siembra de Agua (ASYCA) - San Pedro de Casta
18. Asociación Arariwa
19. Asociación civil JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía
20. Asociación ProPurús
21. Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
22. Asociación Tecnología Ecología y Desarrollo – DETEC
23. Asociación para el Desarrollo y Conservación de los Recursos Naturales del Perú – ACRENAP
24. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible - IDLADS
25. Instituto de Defensa Legal - IDL
26. CASA PERÚ
27. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
28. Centro Bartolomé De Las Casas - CBC
29. Centro para el Desarrollo de los Pueblos AYLLU - CUSCO
30. Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación - CEDEP Perú
31. Centro de Investigación y Educación Popular Alternativa
32. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
33. Centro de Culturas Indígenas del Perú CHIRAPAQ
34. Comisión Episcopal De Acción Social - CEAS
35. Casa del Protector Marcahuasi
36. Centro de Desarrollo Agropecuario

PRONUNCIAMIENTO:

ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ARCHIVAR LA AUTÓGRAFA QUE MODIFICA Y DEBILITA LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, OBSERVADA POR EL EJECUTIVO

37. CUIDAR
38. Centro de Derechos y Desarrollo - CEDAL
39. Confederación General de Trabajadores del Perú - CGTP
40. Centro de Prevención de la Mujer - CPM Micaela Bastidas
41. Centro de Desarrollo Andino - CDA SISAY
42. Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional - CEPRODEP
43. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado - CIPCA de Piura
44. Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
45. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - DESCO
46. Centro de Estudios para el Desarrollo Regional - CEDER de Arequipa
47. Centro Bartolomé de las Casas de Cusco
48. Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte- CEDEPAS Norte
49. Centro de Investigación y Promoción Popular CENDIPP
50. Centro de Desarrollo Agropecuario - CEDAP Ayacucho
51. Comisión de Ecología y Cuidado de la Creación de la Diócesis de Lurín
52. Centro de Investigación, Capacitación, Asesoría y Promoción-CICAP
53. Derechos Humanos Sin Fronteras - DHSF
54. Diócesis de Chosica - Departamento de Dignidad Humana
55. ECODES Tiempo de Actuar
56. Fomento de la Vida - FOVIDA
57. Fondo Socioambiental del Perú
58. Grupo Pastoral Cuencas Sinodales
59. Centro de educación y comunicación ILLA
60. Iniciativa Interreligiosa Para Los Bosques Tropicales - IRI PERÚ
61. Instituto Del Bien Común
62. Instituto Runa Pacha - IRUPA

PRONUNCIAMIENTO:

ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ARCHIVAR LA AUTÓGRAFA QUE MODIFICA Y DEBILITA LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, OBSERVADA POR EL EJECUTIVO

63. Grupo Género y Economía
64. Grupo Propuesta Ciudadana - GPC
65. Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Kenė
66. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático - MOCICC
67. Movimiento Manuela Ramos
68. Movimiento Laudato Si Perú
69. Asociación Paz y Esperanza
70. Plataforma de Empresas y Derechos Humanos
71. Red Ambiental Peruana- RAP
72. Red Muqui
73. Red Eclesial Panamazónica - REPAM - PERÚ
74. Red Uniendo Manos Perú
75. Red Infanto Juvenil por el Buen Vivir - REDINJUV
76. Red Agua Desarrollo y Democracia - REDAD
77. Pastoral Social de Dignidad Humana.
78. Red Pueblos Indígenas y Ecología Integral
79. Red Latinoamericana Iglesias y Minería - Nodo Perú
80. Red Wiphalas / Wiphalas Network
81. Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE
82. Red Nacional De Conservación Voluntaria Y Comunal "AMAZONÍA QUE LATE"
83. Servicios Educativos Rurales (SER)
84. Sociedad Zoológica de Fráncfort Perú-SZF
85. SEDYS Trujillo-Perú- Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad.
86. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA
87. Taller de Derecho Ambiental José Antonio Bonifaz Moreno
88. TierrActiva Perú

PRONUNCIAMIENTO:

ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ARCHIVAR LA AUTÓGRAFA QUE MODIFICA Y DEBILITA LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, OBSERVADA POR EL EJECUTIVO

89. Tierra Firme
90. Vicariato Apostólico de Iquitos
91. Asociación Yunkawasi
92. Rosa Guillen Velarde DNI 06098186
93. Josefina Huamán DNI 07242254
94. Giuliana Larrea Aguinaga - 40826401
95. Ramón Rivero Mejía DNI 40684427
96. Maya Carlina Corminboeuf, antropóloga suiza/boliviana
97. Gloria E. Sarmiento Valenzuela DNI 22091995
98. Hugo Che Piu Deza DNI 10726429
99. Alexis Díaz Limaco DNI 09870846
100. Rosario Narvàez Vargas DNI 07594485
101. Lucía Ruiz Ostoic DNI 08767259
102. Ivan Brehaut Larrea DNI 25738550
103. Irma Elvira Ganoza Macchiavello. 07831713
104. Julia Carmen Espinoza Bernal, DNI 25614801
105. Félix Rojas Orellana DNI 28311915
106. Isabel Coral Presidenta DNI 09373151
107. Ibis Fernández Honores - DNI: 07399151
108. Carmen Valverde Garaban Presidenta DNI 07952336
109. Carmen Aleman, Directora DNI 08673234
110. César Ipenza DNI 40287902

ANEXO

10

REPORTE DE DOCUMENTOS REMITIDOS

MESA DE PARTES DIGITAL

USUARIO : 09670957 - ANGELA LUCILA PAUTRAT OYARZUN

23/03/23 03:26 PM

NÚMERO DE RU :**--**

DESDE :**--** HASTA :**--** ESTADO :**TODOS**

CANTIDA DE REGISTROS : 1

NÚMERO DE RU	TIPO DE DOCUMENTO	NRO. DOCUMENTO	ASUNTO	FECHA DE REGISTRO	ESTADO	DESTINATARIOS
1099635	CARTA	SIN NÚMERO	SOLICITA ABSTENERSE DE SUSTENTAR Y SOLICITAR LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE INSISTENCIA ANTE LAS OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A LA AUTÓGRAFA RECAÍDA EN EL PROYECTO DE LEY N° 649/2021-CR	23/03/23 03:24 PM	REGISTRADO	COMISION AGRARIA / COMISION DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGIA

Lima, 23 de marzo del 2023

Señora
NILZA MERL Y CHACON TRUJILLO
Presidenta de la Comisión Agraria
Congreso de la República del Perú
Presente. -

Referencia: ***Solicita abstenerse de sustentar y solicitar la aprobación*** *del Dictamen de Insistencia ante las observaciones del Presidente de la República a la Autógrafa recaída en el Proyecto de Ley N° 649/2021-CR, 89412021-CR y 2315/2021-CR con texto sustitutorio que Modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la Zonificación Forestal"*

De mi consideración:

En relación al asunto de la referencia, cumplo con informarle que con fecha ***05 de agosto de 2022*** *interpuse* ***demanda de amparo ante el Tercer Juzgado Especializado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente Nº 05654-2022-0-1801-J R-DC-03) contra el Congreso de la República*** *peticionando, entre otros, que el Poder Judicial ordene al* ***CONGRESO DE LA REPUBLICA*** *que se* ***ABSTENGA de iniciar, tramitar, continuar y/o concluir cualquier procedimiento legislativo de aprobación y/o de promulgación por insistencia o por cualquier otra vía del contenido de la Disposición Complementaria Final Única de la Autógrafa de la "Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre****, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal;* ***ello por su carácter abiertamente inconstitucional al constituir una amenaza de vulneración del Derecho Constitucional colectivo a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida,*** *tal como está acreditado en la demanda y en los medios probatorios ofrecidos.*

Con fecha 15 de febrero del 2023, el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la Resolución N° 05, mediante la cual ***Concede la apelación con efecto suspensivo a la Resolución N° 04, en consecuencia, dispone que se eleven los autos correspondientes al Superior Jerárquico[1].***

Asimismo, con fecha 18 de marzo del 2023 se presentó una ***Medida Cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el "Dictamen de Insistencia ante las observaciones del Presidente de la República a la Autógrafa recaído en el Proyecto de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 2315/2021-CR con texto sustitutorio de la Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre,*** *y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal"[2].*

En ese sentido y ***mientras que se resuelva en definitiva la controversia constitucional citada en el mencionado proceso, resulta aplicable el Artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial*** *que establece en su parte pertinente que* ***"Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano constitucional";*** *de tal manera que,* ***hasta que se defina judicialmente que la eventual aprobación y/o promulgación de la antes mencionada Autógrafa de Ley configura una amenaza de vulneración de derechos constitucionales****; vuestro Despacho se ve impedido de realizar cualquier acto de avocamiento que tienda a su promulgación y/o aprobación por el Pleno del Congreso de la República, ello mientras que el proceso judicial se encuentre en trámite y no concluya mediante sentencia FIRME.*

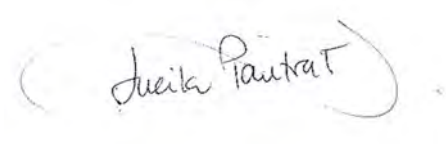
---

[1] *Ver documento en: https://keneamazon.net/Documents/Demanda-Amparo-Autografa/15-02-23-Resolucion-05.pdf?_ga=2.99481816.753069114.1679529732-1036046428.1666548477.*

[2] *Ver: https://keneamazon.net/Documents/Demanda-Amparo-Autografa/2023-03-18-Solicitud-de-MC-ante-CIDH.pdf?_ga=2.91806556.753069114.1679529732-1036046428.1666548477.*

En consecuencia y hasta que se emita sentencia firme en el mencionado proceso judicial, le solicito sirva abstenerse de sustentar y/o solicitar ante el Pleno del Congreso de la República la aprobación del Dictamen de insistencia *ante las observaciones del Presidente de la República a la Autógrafa recaída en el Proyecto de ley 649/2021-CR, 89412021-CRY 2315/2021-CR con texto sustitutorio que modifica la Ley 29763, Ley forestal y de fauna silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal" BAJO RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVA, conforme a Ley.*

Atentamente,



ANGELA LUCILA PAUTRAT OYARZÚN
D.N.I. Nº 09670957
Domicilio Legal: Calle Libertad Nº 116, Departamento 12-B (Ahora 1202), distrito de Miraflores.

Adjunta:
- Resolución Nº 05 de fecha 15 de febrero de 2023 emitida por el Tercer Juzgado Especializado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima en el Expediente Nº 05654-2022-0-1801-JR-DC-03.
- Solicitud de Medida Cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE : 05654-2022-0-1801-JR-DC-03
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZA : OCAÑA CHALCO, GISELA
ESPECIALISTA : ALVARADO SANTILLAN JHONY
DEMANDADO : CONGRESO DE LA REPUBLICA
DEMANDANTE : PAUTRAT OYARZUN, ANGELA LUCILA

Resolución N° 05
Lima, 15 de febrero de 2023.-

AUTOS Y VISTOS; **DANDO CUENTA**; A Los escritos con ingreso N° 428-2023 y N° 432-2023, ingresado por mesa de partes electrónica con fecha 04 de enero de 2023, presentado por Wilfredo Tsamash Cabrera en calidad de presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indigenas de San Martin (CODEPISAM); **Al principal**: Por interpuesto el recurso de apelación. Y ATENDIENDO: **Primero:** Que, CODEPISAM interpone recurso de apelación contra resolución n° 04 SENTENCIA, de fecha 20 de diciembre de 2022, que resuelve declarar improcedente la demanda. **Segundo**: Que, interpone recurso de apelación dentro Ley y cumpliendo con fundamentar los agravios irrogados, conforme a lo previsto en el artículo 22 inciso b del Código Procesal Constitucional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del citado código; por lo que, se dispone: **Concédase la apelación con efecto suspensivo la resolución n° 04**, en consecuencia elévese los presentes autos al Superior Jerárquico, devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución; **Al otrosí digo**: Téngase por otorgado las facultades generales de representación a favor de los letrados que se indican.

DANDO CUENTA; Al escrito con ingreso N° 770-2023, ingresado por mesa de partes electrónica con fecha 05 de enero de 2023, presentado por la parte demandante; **Al principal**: Por interpuesto el recurso de apelación. Y ATENDIENDO: **Primero:** Que, la parte demandante interpone recurso de apelación contra resolución n° 04 SENTENCIA, de fecha 20 de diciembre de 2022, que resuelve declarar improcedente la demanda. **Segundo**: Que, interpone recurso de apelación dentro Ley y cumpliendo con fundamentar los agravios irrogados, conforme a lo previsto en el artículo 22 inciso b del Código Procesal Constitucional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del citado código; por lo que, se dispone: **Concédase la apelación con efecto suspensivo la**

resolución n° 04, en consecuencia elévese los presentes autos al Superior Jerárquico, devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.

Avocándose al conocimiento de la presente causa, la Jueza que suscribe la presente resolución, dispuesto por Resolución Administrativa N° 000045-2023-P-CSJLI-PJ.

NOTIFÍQUESE.-

FORMULARIO PARA SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES

SECCIÓN I: DATOS DE LA PERSONA/S PROPUESTA/S COMO BENEFICIARIA/S Y LA PARTE SOLICITANTE

1. DATOS DE LA/S PERSONA/S PROPUESTA/S COMO BENEFICIARIA/S

Por favor indique los datos de la persona o grupo a cuyo favor se interpone la solicitud de medidas cautelares (persona/s propuesta/s como beneficiaria/s). Si se trata de más de una persona, por favor crear un nuevo perfil para cada una de ellas.

- 1 -

Nombre completo	Pueblos indígenas del Perú
Nombre con el que la propuesta beneficiaria se identifica	Pueblos indígenas del Perú
Género	N/A
Ocupación	N/A
Nacionalidad	Peru
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)	N/A
Dirección postal	N/A
Teléfono	N/A
Fax	N/A
Correo electrónico	lpautrat@keneamazon.net
Información adicional	Si bien no se ha identificado a un grupo indígena en particular, se considera que la Defensoría del Pueblo cuenta con información oficial y detallada de las organizaciones nacionales representativas de los pueblos indígenas. Para mayor información sobre el particular, el correo electrónico de la Defensora del Pueblo es defensor@defensoria.gob.pe
Propuesta beneficiaria está privada de libertad	No

- 2 -

Nombre completo	Ciudadanos del Perú
Nombre con el que la propuesta beneficiaria se identifica	Ciudadanos del Perú
Género	N/A
Ocupación	N/A
Nacionalidad	Peru

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)	N/A
Dirección postal	N/A
Teléfono	N/A
Fax	N/A
Correo electrónico	lpautrat@keneamazon.net
Información adicional	Si bien no se ha identificado a una persona individual, se considera que la Defensoría del Pueblo tiene la competencia estatal de defender los derechos humanos de la persona y de la comunidad. Para mayor información sobre el particular, el correo electrónico de la Defensora del Pueblo es defensor@defensoria.gob.pe
Propuesta beneficiaria está privada de libertad	No

En caso de que la solicitud de medidas cautelares sea presentada a favor de un colectivo, indicar con la mayor precisión posible a cuántas personas ascenderían las personas propuestas como beneficiarias, su ubicación y las características que identifican a los miembros (por ejemplo, su ubicación, pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización):

La organización solicitante se dirige a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para expresar nuestra profunda preocupación y solicitar con carácter de urgencia el otorgamiento de medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas del Perú por la amenaza a sus Derechos Humanos a la Consulta Previa y a las Tierras, Territorios y Recursos Naturales, y a favor de la ciudadanía peruana por la amenaza a su Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano; como consecuencia del “Dictamen de Insistencia ante las observaciones del Presidente de la República a la Autógrafa recaído en el Proyecto de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 2315/2021-CR con texto sustitutorio de la Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal” (en adelante “DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS”) aprobado el 4 de noviembre de 2022 por la Comisión Agraria del Congreso de la República del Perú (Anexo 1.1: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NTY1MDU=/pdf/PL%20649%20Y%20OTROS%20(U)).

El DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS busca modificar la legislación forestal y de fauna silvestre vigente contenida en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, “LFFS”; Anexo 1.2: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1035931), sin someterla a un proceso de consulta previa con las organizaciones representativas de pueblos indígenas; a pesar de que para la aprobación de la LFFS sí se realizó dicho proceso entre los años 2010 y 2011 conforme con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales (“C169-OIT”) aprobado por Resolución Legislativa N° 26253 en el año 1993 (Anexo 2: https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/1081EE0AA5C9A39605257DCC006AFD3D/%24FILE/13_Aprueban_Convenio_169_OIT_pueblos_ind%C3%ADgenas_26253.pdf), vigente y exigible en el Perú desde 1995. La consulta previa realizada para la aprobación de la LFFS se puede revisar en el portal del mismo Congreso de la República (Anexo 3.1: https://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2010/agraria/ley_forestal/objetivos.htm; Anexo 3.2: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Comisiones/2010/leyfor.nsf/5F2DD6688E899C0505257887006BA860/$FILE/ATTTW3A3.pdf; Anexo 3.3: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Comisiones/2010/leyfor.nsf/_v2; Anexo 3.4: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Comisiones/2010/leyfor.nsf/FF54C502782FB236052578990074D7BA/$FILE/ATTTYVF7.pdf; Anexo 3.5: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Comisiones/2010/leyfor.nsf/0239DFE6FFA3627E0525789B006433C9/$FILE/ATT88177.pdf; Anexo 3.6: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Comisiones/2010/leyfor.nsf/3D4A3A6A312219BE0525789D007B1128/$FILE/ATT3IMSK.pdf; y, Anexo 3.7: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Comisiones/2010/leyfor.nsf/500992A8D9E7A2B80525789D007A0CB0/$FILE/ATTQYEU2.pdf). Asimismo, desde el 2011 se encuentra vigente la Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT, la cual ordena a todas las entidades del Estado peruano, incluyendo al Congreso de la República, a realizar procesos de consulta previa con los pueblos indígenas en el caso de “medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente”.

Además, el DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS busca dejar sin efectividad las siguientes disposiciones de LFFS aprobadas para proteger el patrimonio forestal de la Nación: (i) la prohibición de realizar actividades agropecuarias en tierras de capacidad de uso mayor forestal y de capacidad de uso mayor para protección (artículo 37 de la LFFS); (ii) la obligación de realizar estudios para determinar el tipo de tierras con cobertura boscosa previo a la realización de actividades agropecuarias (artículo 38 de la LFFS); iii) la obligación de titulares de tierras clasificada “de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes” de solicitar una “autorización de cambio de uso actual a fines agropecuarios”. De esta manera, toda actividad (de pequeña, mediana o gran escala) que haya generado deforestación, invadiendo y/o traficando bosques y tierras

indígenas, incumpliendo las mencionadas prohibiciones y obligaciones obtendría impunidad administrativa y/o penal.

En tanto el DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS puede ser aprobado directamente por el Congreso de la República (es decir, sin necesidad de que la Presidencia de la República pueda volver a observar la propuesta normativa), además de promover la legalización de la impunidad de infracciones y delitos ambientales, constituye una grave amenaza para la subsistencia de los pueblos indígenas del Perú por los daños que se generarán en sus Derechos a las Tierras, Territorios y Recursos Naturales, y para el resto de la ciudadanía nacional (generaciones actuales y futuras), cuyo Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano se verá seriamente menoscabado.

2. DATOS DE LA PARTE SOLICITANTE

Por favor indique los datos de la persona o grupo que presenta la solicitud de medidas cautelares. En caso de tratarse de una organización de la sociedad civil, incluir el nombre de la/s persona/s designada/s que recibirá/n las comunicaciones. En caso de tratarse de más de una parte solicitante, por favor cree un nuevo perfil para cada una de ellas.

En ciertos casos, la Comisión puede mantener en reserva la identidad de la parte solicitante, si así se le solicita expresamente y se exponen las razones respectivas. Esto significa que sólo el nombre de la/s persona/s propuesta/s como beneficiaria/s será comunicado al Estado. Asimismo, en caso que la CIDH otorgue las medidas cautelares, la resolución pública tampoco mostrará el nombre de la parte solicitante.

Mientras que es posible mantener en reserva el nombre de la parte solicitante, la tramitación de una solicitud de medidas cautelares requiere poner en conocimiento del Estado la identidad de la/s persona/s propuesta/s como beneficiaria/s, lo cual es indispensable para que el Estado conozca a quién o quiénes debe proteger en caso de adoptarse las medidas solicitadas. En casos excepcionales, la Comisión podrá restringir al público la identidad de la/s persona/s propuesta/s beneficiaria/s en los documentos que se publican (como en una resolución), mediante la sustitución del nombre completo por sus iniciales o el uso de seudónimos. La solicitud de que se restrinja la identidad de la persona propuesta como beneficiaria debe ser hecha de manera expresa a la Comisión, con una exposición de sus razones.

En casos en que la/s persona/s propuesta/s como beneficiaria/s y la parte solicitante sean la/s misma/s persona/s y se desea que se restringa la identidad de la/s persona/s en su capacidad como solicitante, la solicitud deberá expresarse en tercera persona. Un ejemplo de lo anterior sería: "el propuesto beneficiario alega que…" (en lugar de "yo fui víctima de..." o "mi hijo fue víctima de…").

¿Incluir a la persona que complete este formulario como parte solicitante?	Si

Nombre completo	ANGELA LUCILA PAUTRAT OYARZÚN
Organización	KENÉ INSTITUTO DE ESTUDIOS FORESTALES Y AMBIENTALES
Siglas de la Organización	KENÉ
Nacionalidad	Peru
Dirección postal	15084
Teléfono	51 965100252
Fax	
Correo electrónico	lpautrat@keneamazon.net

En caso de presentar la solicitud a favor de otra persona o grupo de personas ¿Cuenta con su expresa conformidad?	No

Explique las razones por las cuales la ausencia de consentimiento se encontraría justificada.

La solicitud de medidas cautelares está dirigida a proteger a la colectividad en general, así como a los pueblos indígenas como grupos vulnerables a la decisión legislativa. En tal sentido, no se ha identificado a alguna organización específica que represente a la colectividad nacional. No obstante, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 005-2021-MC (Anexo 4: https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-crea-la-comision-multisectorial-de-natur-decreto-supremo-n-005-2021-mc-1938410-1), el Ministerio de Cultura incorpora a las siguientes organizaciones nacionales representativas de pueblos indígenas, a la “Comisión Multisectorial de naturaleza permanente encargada de proponer, realizar el seguimiento y fiscalizar la implementación de las medidas y acciones estratégicas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas u originarios en el país”: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA). Asimismo, sería relevante poder incorporar en el respectivo proceso de consulta previa, a las organizaciones representativas regionales de pueblos indígenas de la Amazonía peruana como son la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la Organización Regional de AIDESEP-Ucayali (ORAU), la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes - Feconau, la Central Ashaninka de Rio Tambo (CART), la Central Ashaninka del Río Ene (CARE), entre otras más.

¿Reservar la identidad de la parte solicitante?	No

En caso de haber seleccionado mantener identidad de la parte solicitante en reserva, sírvase explicar:

N/A

3. ASOCIACIÓN CON UNA PETICIÓN O MEDIDA CAUTELAR

¿Ha presentado antes una petición ante la Comisión sobre estos mismos hechos?	No	

¿Ha presentado antes una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión sobre estos mismos hechos, o ha sido anteriormente beneficiaria/o de una medida cautelar otorgada por la Comisión?	No	

SECCIÓN II: SUSTENTO DE LA SOLICITUD

1. ESTADO MIEMBRO DE LA OEA RESPECTO DE LA CUAL SE PRESENTA LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES:

Peru

2. SOLICITUD

a) Señalar si la situación que motiva su solicitud se encuentra identificada en alguno de los siguientes supuestos:

	Desaparición de personas
	Deportación o extradición
	Aplicación de pena de muerte
	Amenazas, hostigamientos y/o agresiones en contra de la vida e integridad personal

	Falta de acceso a tratamiento médico que ponga en peligro la vida, integridad personal y salud
	Situaciones de riesgo relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión
	Precarias condiciones de privación de la libertad
	Riesgo de pérdida del vínculo familiar
Otra	Amenaza contra los derechos humanos a la Consulta Previa, Tierras, Territorios y Recursos Naturales de los Pueblos Indígenas, así como el derecho humano de la ciudadanía en general a un medio ambiente sano.

b) Indicar qué derechos considera usted que estarían en riesgo:

Los Derechos Humanos que se encuentran amenazados por el Congreso de la Republica del Perú son el Derecho a la Consulta Previa, el Derecho a las Tierras, Territorios y Recursos Naturales y el Derecho al Medio Ambiente Sano.

El Derecho a la Consulta Previa es reconocido por los artículos 6 y 17 del C169-OIT y el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, “DNUDPI”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Corte IDH”, ha señalado en varias oportunidades que “el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y tribales, además de constituir una norma convencional, es también un principio general del Derecho Internacional que está cimentado, entre otros, en la estrecha relación de dichas comunidades con su territorio y en el respeto de sus derechos a la propiedad colectiva y a la identidad cultural. Dichos derechos deben ser garantizados, particularmente, en una sociedad pluralista, multicultural y democrática” (Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015, párrafo 158). Asimismo, ha señalado que la obligación de consultar a los Pueblos Indígenas sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos (reconocidos en la normativa interna e internacional) “está en relación directa con la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención (artículo 1.1). Esto implica el deber de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y, en general, de todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos” (Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párrafo 166).

El Derecho a las Tierras, Territorios y Recursos Naturales se encuentra reconocido en los artículos 13 al 19 del C169-OIT y los artículos 8, 10, 25 al 30 y 32 de la DNUDPI. En el Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, la Corte IDH afirmó que “conforme al artículo 21 de la Convención [sobre el derecho a la propiedad privada], los Estados deben respetar la especial relación que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio a modo de garantizar su supervivencia social, cultural y económica” (Sentencia de 28 de noviembre de 2007, párrafo 91). Profundizando en su razonamiento, en el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, la Corte señaló que “los conceptos de propiedad y posesión en las comunidades indígenas pueden tener una significación colectiva, en el sentido de que la pertenencia de ésta “no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad”. Esta noción del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde a la concepción clásica de propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21 de la Convención Americana” (Sentencia de 29 de marzo de 2006, párrafo 120).

A su vez, la Corte IDH reconoce la “conexión entre el territorio y los recursos naturales que han usado tradicionalmente los pueblos indígenas y tribales, y que son necesarios para su supervivencia física y cultural, así como el desarrollo y continuidad de su cosmovisión, deben ser protegidos bajo el artículo 21 de la Convención. Esta protección tiene como fin el garantizar que los pueblos indígenas y tribales puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetados, garantizados y protegidos por los Estados” (Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309. párrafo 164).

El Derecho al Medio Ambiente Sano es reconocido por el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, y en términos de la Corte IDH, también “debe considerarse incluido entre los derechos […] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta” (Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Sentencia de 6 de febrero de 2020, párrafo 202). Además, en la Opinión Consultiva “Medio Ambiente y Derechos Humanos”, la Corte IDH precisó que el Derecho al Medio Ambiente tiene tanto una dimensión colectiva: “constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras”; como individual: “en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros” (OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafo 59).

c) Sustento de la solicitud:

i) Describir de manera detallada y cronológica los hechos por los cuales se considera que los derechos de la/s persona/s propuesta/s como beneficiaria/s estaría/n en una situación de riesgo en los términos del artículo 25 del Reglamento. Señalar con precisión las circunstancias de modo, tiempo (fechas) y lugar que sustentarían la situación de riesgo (por ejemplo: respecto de amenazas, hostigamientos, persecuciones, actos de violencia, o cualquier otra situación que considere pertinente poner en conocimiento de la Comisión). De contar con la información, explicar las fuentes que originarían tal situación de riesgo (por ejemplo, si los eventos de riesgo provendrían de actos u omisiones de autoridades o agentes del Estado, delincuencia organizada, terceros particulares, etc.).

Conforme se puede verificar en el expediente digital (Anexo 5: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/649), el 05 de noviembre de 2021, la Congresista de la República del Perú, Elizabeth Sara Medina Hermosilla, en coautoría con 6 congresistas del Grupo Parlamentario Perú Libre, presentan el Proyecto de Ley N° 00649/2021-CR, denominado “Ley que modifica al artículo 29 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre e incorporan disposiciones transitorias para su actualización de los límites del bosque de producción permanente”; propuesta normativa que fue derivada a la Comisión Agraria del Congreso de la República para su estudio y dictamen, conforme lo establece el artículo 105 de la Constitución Política del Perú (Anexo 6.1: https://www.congreso.gob.pe/Docs/files/constitucion/constitucion-noviembre2022.pdf) y el procedimiento contemplado en el artículo 73 del Reglamento del Congreso de la República (Anexo 6.2: https://www.congreso.gob.pe/Docs/files/reglamento_noviembre2022/reglamento_novienbre_2022.pdf).

Posteriormente, se acumuló la referida propuesta legislativa con los Proyectos de Ley N° 00894/2021-CR (presentado por la congresista Lady Camones, en coautoría con 7 congresistas del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, conforme se puede revisar en el respectivo expediente digital, Anexo 7.1: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/894) y N° 02315/2021-CR (presentado por el congresista Pedro Martínez Talavera, en coautoría con 6 congresistas del Grupo Parlamentario Acción Popular, conforme se puede revisar en el respectivo expediente digital, Anexo 7.2: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2315) para su análisis conjunto.

Seguido el proceso legislativo, el 07 de julio de 2022, el Pleno del Congreso de la República aprueba el Texto Sustitutorio de la propuesta legislativa (con 105 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, conforme ser puede revisar en el Anexo 8.1: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDE0OTc=/pdf/PL_649) y, en la misma fecha, aprueba la exoneración de la segunda votación del Texto Sustitutorio (con 103 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones, cuyo detalle se puede revisar en el Anexo 8.2: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDE0OTQ=/pdf/PL_649_EXO). Según lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, tras la aprobación de la propuesta legislativa por el Pleno del Congreso, el 14 de julio de 2022, se envió la “Autógrafa” (versión aprobada del proyecto legislativo, la cual puede ser revisada en el Anexo 8.3: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/Mzc2MTU=/pdf/AU649-7-7-22) a la Presidencia de la República para promulgación u observación.

En ejercicio de las atribuciones dispuestas en el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución Política, el 08 de agosto de 2022, la Presidencia de la República presentó sus observaciones a la Autógrafa en mención ante el Congreso de la República (Anexo 8.4: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDE4MjY=/pdf/PL_649). En la misma fecha, dichas observaciones son derivadas a la Comisión Agraria (Anexo 8.5: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDE4MjY=/pdf/PL_649), para el respectivo análisis. Asimismo, el 31 de agosto de 2022, se derivaron las observaciones a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (Anexo 8.6: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDM4OTc=/pdf/PL%20649%20Y%20OTROS%20(PASE%20A%20COMISI%C3%93N%20DE%20PUEBLOS%20ANDINOS), la cual emitió un Dictamen mayoritario a través del cual “recomienda el archivo de la Autógrafa de Ley observada por el Poder Ejecutivo de los Proyectos de Ley 649/2021-CR, 894/2021-C y 2315/2021-CR” (Anexo 8.7: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NzM0MDU=/pdf/PL%20649%20(MAY)). Como parte de su análisis, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología expone los siguientes argumentos:

- “Sostenemos firmemente que la Autógrafa de Ley violenta la Ley Forestal y de Fauna Silvestre pues el recurso forestal y de fauna silvestre, así como las medidas de conservación, uso, aprovechamiento y/o afectación (cambio de uso) trascienden la ubicación del recurso, es decir no importa si la flora o fauna silvestre se halle en tierras públicas o privadas (…) resultaría contradictorio regular un régimen de excepción a la necesidad de exigir previamente a la afectación del patrimonio forestal con fines agrarios, la autorización de cambio de uso. La valoración de los bienes y servicios ecosistémicos es y debe ser integral, es lo que buenamente brindan los recursos forestales y de fauna silvestre, los cuales contribuyen a la sostenibilidad de las actividades económicas a ser desarrolladas” (pp. 36 y 37 del Dictamen que recomienda el archivo de la Autógrafa observada).
- “(…) se precisa que la Disposición Complementaria Final Única de la autógrafa de ley permite la exoneración de la autorización de cambio de uso, ello no va a permitir la implementación de medidas necesarias a los efectos del aseguramiento de la conectividad de los bosques. Es un libro abierto para legalizar una afectación a los bosques y fauna silvestre, generando potenciales riesgos de deforestación de los bosques. Asimismo, va a favorecer la regularización de situaciones ilegales en la que se otorgan títulos de propiedad o constancias de posesión, produciéndose incluso un cambio de uso no autorizado lo cual permite actividades ilegales. La norma así propuesta es una puerta abierta para exonerar de responsabilidad administrativa a personas que cuentan con predios con título de propiedad o certificados de posesión para actividades agropecuarias y que realizaron

un cambio de uso no autorizado" (p. 38 del Dictamen que recomienda el archivo de la Autógrafa observada).
- "Señalamos que la Autógrafa de Ley impacta directa y negativamente en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas u originarios de carácter territorial y ambiental, al punto de convertirse en una amenaza cierta hacia los mismos. Estos derechos se encuentran reconocidos en forma unánime por la Constitución Política del Estado y los principales instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos" (p. 40 del Dictamen que recomienda el archivo de la Autógrafa observada).
- "Dentro del análisis nos permitimos realizar una pregunta: ¿Si la norma en mención pone en algún riesgo la agricultura sostenible en la Amazonía?; somos de la opinión que sí pone en riesgo a la agricultura sostenible en la Amazonía porque al otorgarse derechos sobre tierras en las cuales no se ha podido analizar su real potencial para realizar actividades agropecuarias, es total y absolutamente contrario a los intereses de la nación, el cual es mantener el patrimonio forestal y de fauna silvestre, así como la sostenibilidad económica del agricultor en el tiempo, la misma que se vería garantizada al desarrollar la actividad agropecuaria en las zonas que presentan las condiciones para una buena producción. El riesgo y la incertidumbre son inherentes a la agricultura. Las fuentes de riesgo entre otras son las perturbaciones del mercado y el medio ambiente, en consecuencia, se afirma que la Autógrafa de Ley promueve la ilegalidad, poniendo en riesgo la institucionalidad ambiental, el ordenamiento territorial y forestal, así como la conservación de los bosques y la biodiversidad que albergan, afectando los derechos humanos de la población, particularmente de los pueblos indígenas de la Amazonía, cuya identidad, cultura y vida dependen de los bosques y los recursos y servicios que provee. Asimismo, se afirma que una de las causas de la deforestación viene de la agricultura migratoria y lo que hace es talar árboles, quemarlos y luego cultivar ahí, pero esa tierra solo va a ser productiva dos años y luego el agricultor migrará a otra área haciendo lo mismo, lo que traerá la deforestación paulatina y constante en el tiempo" (pp. 44 y 45 del Dictamen que recomienda el archivo de la Autógrafa observada).

Sin embargo, y conforme fue descrito al inicio de esta solicitud, el 04 de noviembre de 2022, la Comisión Agraria aprobó el "DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS" (Anexo 1.1), el mismo que, de acuerdo con el artículo 79-A, literal b) del Reglamento del Congreso de la República, es aquel Dictamen en el que "la comisión rechaza total o parcialmente las observaciones del Presidente de la República e insiste en el texto originario de la autógrafa. Se configura la insistencia, por lo tanto, cuando, habiéndose aceptado algunas de las observaciones del Poder Ejecutivo, al mismo tiempo se ha mantenido el texto originario de las otras disposiciones o artículos observados".

En este contexto, es necesario revisar literalmente las reglas del segundo y tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política del Perú:
- Segundo párrafo: "Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince días"; y,
- Tercer párrafo: "Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso".

Conforme con ello, el DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS puede ser aprobado directamente por el Congreso de la República (es decir, sin necesidad de que la Presidencia de la República pueda volver a observar la propuesta normativa). Considerando que el 07 de julio de 2022, el Pleno del Congreso de la República aprobó con 105 votos a favor la propuesta legislativa bajo revisión, es evidente que existe un riesgo inminente de que el DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS sea aprobado y promulgado por el Congreso de la República.

Con la finalidad de evaluar la grave situación que enfrentan los Derechos Humanos alegados en la presente solicitud, es necesario revisar el detalle del DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS, encontrándose la principal amenaza en la Disposición Complementaria Final Única (en adelante, "DCF-Única"), que se cita a continuación:

"DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL ÚNICA. Clasificación de tierras y reglas sobre cambio de uso para actividades agropecuarias existentes. Los predios privados que cuenten con títulos de propiedad o constancias de posesión emitidas por la autoridad competente con anterioridad a la vigencia de la presente ley o que se encuentren dentro de los alcances de la Ley 31145, Ley de saneamiento físico - legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales, que no contengan masa boscosa y que desarrollen actividades agropecuarias, son considerados, de manera excepcional, como áreas de exclusión para fines agropecuarios y por tanto están exceptuados de realizar su Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, así como también están exceptuados del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 38 de la Ley 29763. Esta excepción no exime la obligación de reserva mínima establecida en el cuarto párrafo del artículo 38 de la Ley referida al treinta por ciento de la masa boscosa en el predio privado, ni de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de los funcionarios públicos, personas naturales o jurídicas, que hayan incurrido en delitos relacionados con el tráfico de tierras".

Sobre la base de lo descrito, corresponde ahora detallar la gravedad del DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS bajo comentario. En primer lugar, se debe señalar que los bosques de la Amazonía peruana son fundamentalmente bosques naturales primarios o secundarios, y tierras forestales y de protección, cuyas condiciones bióticas y abióticas no son aptas para el cambio de uso a actividades agrícolas o pecuarias.

Debido a ello, la LFFS ha previsto que:
(i) Las áreas sobre las cuales se levantan los bosques amazónicos solo pueden ser objeto de actividades de protección y aprovechamiento sostenible

de recursos forestales y de fauna silvestre, de manera razonable, en tanto forman parte del Patrimonio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre con arreglo a la Constitución Política del Perú (artículo 66: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento”; y artículo 69: “El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada”) y la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (artículo 3: “se consideran recursos naturales (…) b. el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de protección; c. la diversidad biológica: como las especies de flora, de la fauna (…) y los ecosistemas que dan soporte a la vida (…)” y artículo 4: “los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean éstos renovables o no renovables son Patrimonio de la Nación”; Anexo 9: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H775246); y,
(ii) En consecuencia, las áreas sobre las cuales se levantan los bosques amazónicos no pueden ser objeto de actividades que no tengan como finalidad la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre de manera razonable.

Para mayor detalle, a continuación, se citan las principales disposiciones de la LFFS que sustentan ambas afirmaciones.

- El artículo 4, literales b) y f) de la LFFS establece claramente que los “recursos forestales y de fauna silvestre mantenidos en su fuente” y “las tierras de capacidad de uso mayor forestal y tierras de capacidad de uso mayor para protección, con bosques o sin ellos”, integran el patrimonio forestal de la Nación. Asimismo, el artículo 5, literales a) y c) de la LFFS establecen que “los bosques naturales” y “las tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal y para protección, con o sin cobertura arbórea”, son recursos forestales. Al respecto, es preciso señalar que los bosques no solo abarcan recursos forestales maderables, sino que incluyen toda la Biodiversidad, fauna y servicios ecosistémicos que dichos bosques generan, recursos vitales para la sobrevivencia y buen vivir de los pueblos indígenas, y respecto de los cuales, el Estado peruano ha suscrito compromisos internacionales en materia de cambio climático y la justicia climática.

- El artículo 8 de la LFFS define a las tierras de capacidad de uso mayor forestal como “aquellas que, por su valor intrínseco, características ecológicas y edáficas, tienen capacidad para la producción permanente y sostenible de bienes y servicios forestales, o potencial para la forestación o reforestación”. A continuación, el artículo 9 de la LFFS define a las tierras de capacidad de uso mayor para protección como “aquellas que, por sus condiciones biológicas de fragilidad ecosistémica y edáfica, no son aptas para el aprovechamiento maderable u otros usos que alteren la cobertura vegetal o remuevan el suelo. Las tierras de protección se destinan a la conservación de las fuentes de agua, nacientes o cabeceras de cuencas, riberas de ríos hasta del tercer orden, y a la protección contra la erosión. En ellas es posible la recolección y aprovechamiento de productos forestales no maderables, el manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre, así como usos recreativos y actividades educativas o de investigación científica, en la medida en que no se afecte su existencia ni sus funciones protectoras”.

- El artículo 37 de la LFFS establece las siguientes prohibiciones relacionadas con actividades agropecuarias: “en tierras de capacidad de uso mayor forestal y de capacidad de uso mayor para protección, con o sin cobertura vegetal, se prohíbe el cambio de uso actual a fines agropecuarios. Se prohíbe el otorgamiento de títulos de propiedad, certificados o constancias de posesión en tierras de dominio público con capacidad de uso mayor forestal o de protección con o sin cobertura forestal, así como cualquier tipo de reconocimiento o instalación de infraestructura pública de servicios, bajo responsabilidad de los funcionarios involucrados”.

- El artículo 38 de la LFFS establece la posibilidad de realizar actividades agropecuarios en tierras con cobertura boscosa clasificadas como “de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes”, siempre que se cuente con una autorización de cambio de uso actual de las tierras a fines agropecuarios: “cuando exista cobertura boscosa en tierras de dominio público técnicamente clasificadas como de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes, según el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, el SERFOR puede autorizar su cambio de uso actual a fines agropecuarios, respetando la zonificación ecológico-económica, de nivel medio o superior, aprobada por el gobierno regional o gobierno local correspondiente, y previa opinión vinculante del Ministerio del Ambiente de acuerdo al procedimiento administrativo que aprueben ambas autoridades para tal fin. Autorizado el cambio de uso actual para realizar el retiro de la cobertura boscosa, se procede según lo establecido en el artículo referido a desbosque en lo que corresponda. En los casos de predios privados cuya cobertura vegetal actual contenga masa boscosa, el cambio de uso requiere autorización de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre sustentado en un estudio técnico de microzonificación”.

- Por último, en cuanto al desbosque, el artículo 36 de la LFFS establece lo siguiente: “El desbosque consiste en el retiro de la cobertura forestal mediante cualquier método que conlleve la pérdida del estado natural del recurso forestal, en áreas comprendidas en cualquier categoría del patrimonio nacional forestal, para el desarrollo de actividades productivas que no tengan como fines su manejo forestal sostenible, tales como la instalación de infraestructura, la apertura de vías de comunicación, incluyendo caminos de acceso a áreas de producción forestal, la producción o transporte de energía, así como operaciones energéticas, hidrocarburíferas y mineras. Requiere la autorización previa del SERFOR o de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre correspondiente, de acuerdo al nivel de evaluación ambiental exigible en cada caso, según lo dispuesto en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y conforme a lo que se establezca en el reglamento de la presente Ley. Si estos desbosques pudiesen afectar a las comunidades campesinas y nativas, rige el derecho a la consulta previa del Convenio 169 de la OIT. Junto con la presentación de la solicitud, el titular de la actividad adjunta la evaluación de impacto ambiental, aprobada por la autoridad competente según la actividad a

desarrollarse. Dicha evaluación demuestra que la actividad propuesta no puede llevarse a cabo en otro lugar y que la alternativa técnica propuesta garantiza el cumplimiento de los estándares ambientales legalmente requeridos. Asimismo, asegura que el área materia de desbosque es la mínima posible y que se llevará a cabo con la mejor tecnología, prácticas y métodos existentes para reducir al mínimo posible los impactos ambientales y sociales, incluyendo evitar las áreas de alto valor de conservación. (…)".

En consecuencia, se verifica que la DCF-Única del DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS traería graves modificaciones a la normativa estatal vigente en materia de protección del patrimonio forestal de la Nación. De manera detallada, la DCF-Única del DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS pretende que a toda persona con un título sobre un determinado predio (título de propiedad, posesión o encontrarse dentro del proceso de saneamiento físico legal establecido por la Ley N° 31145) en el cual hubiese realizado actividades agropecuarias (de pequeña, mediana o gran escala) sin que dicho predio hubiese sido clasificado como "tierras de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes": (i) se le reconozca a dicho predio la categoría de "áreas de exclusión para fines agropecuarios; (ii) NO SE LE REQUERIRÁ que presente el estudio de suelos que concluya que el predio tiene la clasificación de "capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes"; (iii) NO SE LE REQUERIRÁ que cuente con una autorización de cambio de uso actual de las tierras a fines agropecuarios, ni con una autorización de desbosque (que debe incluir una evaluación de impacto ambiental, aprobada por la autoridad competente).

Por lo tanto, dichas personas podrían haber realizado actividades agropecuarias en "tierras de capacidad de uso mayor forestal" o en "tierras de capacidad de uso mayor para protección" y haber incumplido las prohibiciones dispuestas en el antes comentado artículo 37 de la LFFS, sin asumir ninguna consecuencia.

De igual manera, se les habilitaría a incumplir con los requisitos previstos en el artículo 38 de la LFFS (esto eso, contar con las autorizaciones de cambio de uso actual de las tierras a fines agropecuarios, una autorización de desboque y una evaluación de impacto ambiental aprobada) sin asumir ninguna consecuencia.

De esta manera, por ejemplo, no se le podrá perseguir por el delito "contra los bosques o formaciones boscosas" contemplado en el artículo 310 del Código Penal (Anexo 10.1: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H682692), cuyo tipo penal sanciona la destrucción, quema, daño o tala, en todo o parte, de bosques o formaciones boscosas sin contar con los respectivos permisos, licencias, autorizaciones o concesiones: "Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas el que, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente, destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones".

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado y dispuesto como doctrina jurisprudencial que para la configuración del delito contra los bosques o formaciones boscosas, será suficiente que la actividad dañina del ambiente se realice sin contar con al menos uno de las autorizaciones requeridas legalmente: "El tipo penal señala un número cerrado -numerus clausus- de actos administrativos, típicos para la configuración del delito, que son cuatro: Permiso, Autorización, Licencia, o Concesión. Pudiendo, según sea el caso, configurarse el delito con la sola ausencia de cualquiera de dichos documentos, pese a contar con otros. Ejemplo: Se puede tener la concesión de un territorio -título que adjudica áreas del Estado a favor de un tercero-, pero no con la autorización de cambio de uso de tierra, título que facultaría al tercero a modificar el territorio adjudicado para otro fin. Teniendo conocimiento de los permisos que se necesitan para el desarrollo de ciertas actividades en el medio ambiente con el fin de evitar la contaminación o destrucción ambiental, resulta necesario precisar que la autorización de desbosque, y la autorización de cambio de uso de tierra, en la legislación pasada (Ley N° 27308) y en la vigente (Ley N° 29763) tienen diferente regulación, evidenciando que son actos administrativos diferentes e independientes (…) En dicho sentido, si bien se cuenta con un título de adjudicación, uno de cambio de uso de tierra, debe poseerse asimismo un titulo que faculte el desbosque" (Vigésimo sétimo y vigésimo octavo fundamentos jurídicos de la Sentencia de Casación N° 389-2014 de la Sala Penal Permanente del 07 de octubre de 2015, Anexo 10.2: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/69d7fd0043b4ddbf8250afd60181f954/CAS+389-2014+San+Mart%C3%ADn.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=69d7fd0043b4ddbf8250afd60181f954).

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente (2022), entre los años 2001 al 2021 se perdieron 2'774,562 hectáreas de bosques amazónicos en el Perú con una tasa promedio de 131 mil hectáreas por año, la cual se incrementa desde el año 2012 a 150 mil hectáreas por año. La deforestación ha continuado incrementándose en plena pandemia en el año 2020, en los departamentos Amazónicos de Ucayali, Loreto y Madre de Dios con un promedio 200 mil hectáreas por año. (Anexo 11.1 https://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php).

En consecuencia, de aprobarse el DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS, SE LEGALIZARÁ Y/O FORMALIZARÁN ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE MANERA ILÍCITA, tales como, cambio de uso de la tierra, tala ilegal, deforestación, desbosque, usurpación de tierras, invasiones, ampliaciones de fronteras agrícolas, plantaciones ilícitas (sin estudios de suelos ni autorizaciones de cambio de uso para monocultivos agroindustriales), cultivos ilícitos de coca y amapola, minería ilegal, tráfico de tierras, narcotráfico (pistas de aterrizaje, campamentos, caminos ilegales, pozas de maceración), entre otras que, con su realización afectarían el patrimonio forestal de la Nación, conformado por los

Bosques Amazónicos y las tierras forestales y de protección, ya que fueron desarrolladas sin autorización alguna.

Asimismo, NO SE PODRÁ PERSEGUIR PENALMENTE por la comisión de delitos “contra los bosques o formaciones boscosas” y otras formas delictivas asociadas con el crimen organizado (casos que a la fecha ya vienen siendo investigados por las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental – FEMA y las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada - FECOR) a aquellas personas que deforestaron bosques primarios y secundarios amazónicos para luego realizar actividades agropecuarias SIN CONTAR con un estudio de suelos que concluya que el predio tiene la clasificación de “capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes”, la autorización de cambio de uso actual de las tierras a fines agropecuarios, la autorización de desboque o la evaluación de impacto ambiental aprobada correspondiente.

Junto con lo anterior, el DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS tiene un incentivo perverso que PROMUEVE CONTINUAR CON LA DEFORESTACIÓN INDISCRIMINADA DE LOS BOSQUES AMAZÓNICOS. Al proponer que los predios privados “no contengan masa boscosa”, se incentiva a que los beneficiarios de la propuesta legislativa (titulares de los títulos de propiedad, de posesión o que se encuentren dentro del proceso de saneamiento físico - legal de la Ley N° 31145) a deforestar en lo máximo posible la extensión de sus predios.

Pero, además, es posible que dicha deforestación tenga, en la práctica, efectos perjudiciales adicionales. Si bien el DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS sería aplicable únicamente para las situaciones anteriores a su promulgación (es decir, a la deforestación del pasado convalidando las invasiones y delitos recientes), es altamente probable que luego de su promulgación, más personas busquen deforestar otras áreas para luego hacerse de “predios que no contengan masa boscosa” (es decir, nueva deforestación) a través de “títulos” irregulares de fecha previa a la promulgación de esta propuesta normativa.

Por lo tanto, la aprobación del DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS, en la práctica, conllevará A DEJAR SIN EFECTO LAS DISPOSICIONES DE LA LFFS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES AMAZÓNICOS, derivando en una deforestación muchísimo mayor que la registrada en los últimos años.

Por todo lo expuesto hasta aquí, resulta evidente que la aprobación del DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS, al afectar el Patrimonio Forestal de la Nación, vulnerará el Derecho Humano al Medio Ambiente Sano de la ciudadanía en general. Se debe recordar que en el caso Comunidades Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, la Corte IDH ha señalado que, “rige respecto al derecho al ambiente sano no solo la obligación de respeto, sino también la obligación de garantía prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en PREVENIR VIOLACIONES” (Sentencia de 6 de febrero de 2020, párrafo 207).

A reglón seguido, la Corte señala que “en materia específica ambiental, debe destacarse que el PRINCIPIO DE PREVENCIÓN DE DAÑOS AMBIENTALES, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y ENTRAÑA LA OBLIACIÓN DE LOS ESTADOS DE LLEVAR ADELANTE LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS EX ANTE LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al [...] ambiente”. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental” (Sentencia de 6 de febrero de 2020, párrafo 208).

En sentido concordante, la Corte IDH ha indicado que “el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, PROTEGE LOS COMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTE, TALES COMO BOSQUES, ríos, mares y otros, COMO INTERESES JURÍDICOS EN SÍ MISMOS, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, SINO POR SU IMPORTANCIA PARA LOS DEMÁS ORGANISMOS VIVOS CON QUIENES SE COMPARTE EL PLANETA, TAMBIÉN MERECEDORES DE PROTECCIÓN EN SÍ MISMO” (OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafo 59).

Por lo tanto, en atención a los criterios jurisprudenciales antes citados, resulta evidente que la aprobación del DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS conllevará a la afectación del Patrimonio Forestal de la Nación y, consecuentemente, al Derecho Humano al Medio Ambiente Sano de toda la ciudadanía.

Junto con lo anterior, es necesario destacar la vulneración a los derechos humanos a la consulta previa y a las tierras, territorios y recursos naturales. Conforme con todo lo antedicho, evidentemente la aprobación del DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS afectará los derechos de los Pueblos Indígenas del Perú, en la medida que sus territorios se encuentran, en muchos casos, sobre tierras con cobertura forestal. Por ende, dichos tierras y territorios se verán invadidos y presionados por terceros para la realización de actividades agrícolas.

Ante esta amenaza, se debe recordar que, y tras una serie pronunciamientos relacionados con el derecho aludido, la Corte IDH ha precisado un

conjunto de estándares sobre la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, entre los cuales se encuentran: "(…) 6) el Estado debe garantizar la propiedad efectiva de los pueblos indígenas y abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de su territorio; 7) el Estado debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas de controlar efectivamente y ser propietarios de su territorio sin ningún tipo de interferencia externa de terceros, y 8) el Estado debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas al control y uso de su territorio y recursos naturales. Con respecto a lo señalado, la Corte ha sostenido que no se trata de un privilegio para usar la tierra, el cual puede ser despojado por el Estado u opacado por derechos a la propiedad de terceros, sino de un derecho de los integrantes de pueblos indígenas y tribales para obtener la titulación de su territorio a fin de garantizar el uso y goce permanente de dicha tierra" (Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2018. Serie C No. 346.22, párrafo 117). Asimismo, la Corte IDH reconoce el derecho de los pueblos indígenas "a los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio, ya que sin ellos su supervivencia económica, social y cultural está en riesgo" (Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309. párrafo 164).

Se debe añadir que los Derechos a las Tierras, Territorios y Recursos Naturales antes comentados tienen una especial vinculación con el Derecho Humano al Medio Ambiente Sano, el cual tiene se encuentra reconocido por los artículos 4, 7 y 32 del C169-OIT y el artículo 29 de la DNUDPI como parte de los derechos colectivos de estos pueblos. Conforme con ello, la Corte IDH ha señalado que "el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, puede redundar positivamente en la conservación del medioambiente. Así, el derecho de los pueblos indígenas y las normas internacionales de medio ambiente deben comprenderse como derechos complementarios y no excluyentes (Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párrafo 173).

Asimismo, en el Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, la Corte IDH ha señalado que "diversos derechos pueden verse afectados a partir de problemáticas ambientales, y que ello "puede darse con mayor intensidad en determinados grupos en situación de vulnerabilidad", entre los que se encuentran los pueblos indígenas y "las comunidades que dependen, económicamente o para su supervivencia, fundamentalmente de los recursos ambientales, [como] las áreas forestales o los dominios fluviales". De acuerdo con lo mencionado "con base en 'la normativa internacional de derechos humanos, los Estados están jurídicamente obligados a hacer frente a esas vulnerabilidades, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación'" (Sentencia de 6 de febrero de 2020, párrafo 209).

En tanto el DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS afectará sus Derechos Humanos sobre sus Tierras, Territorios y Recursos Naturales, el Congreso de la República se encuentra obligado a seguir un proceso de Consulta Previa con las organizaciones representativas de pueblos indígenas conforme lo establece los artículos 6 y 17 del C169-OIT y el artículo 19 de la DNUDPI, así como los artículos 2 y 9 de la Ley N° 29785, "Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)" (Anexo 12: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1039114); conforme sucedió entre los años 2010 y 2011, para la aprobación de la LFFS.

Al respecto, se debe recordar que, en el Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, la Corte IDH expresó que "está claramente reconocida hoy en día la obligación de los Estados de realizar procesos de consulta especiales y diferenciados cuando vayan a afectar determinados intereses de las comunidades y pueblos indígenas" (Sentencia de 27 de junio de 2012, párrafo 165), siendo "deber del Estado -y no de los pueblos indígenas- demostrar efectivamente, en el caso concreto, que todas las dimensiones del derecho a la consulta previa fueron efectivamente garantizadas" (párrafo 179). Así también, en el Caso de la Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras, la Corte señaló que las consultas previas se deben realizar "en el marco de decisiones del poder público que afectarían sus derechos e intereses" debiendo realizarse "con carácter previo, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo, adecuada, accesible e informada" (Sentencia de 8 de octubre de 2015, párrafo 160); todo lo cual no ha sido respetado por el Congreso de la República.

Por lo antedicho, el DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS, además de constituir una grave amenaza contra el Derecho Humano al Medio Ambiente Sano de la ciudadanía peruana, también representa una grave amenaza contra los Derechos Humanos a la Consulta Previa y a las Tierras, Territorios y Recursos Naturales de los pueblos indígenas del Perú.

ii) Explicar las razones por los cuales la situación alegada sería grave, urgente y requeriría medidas cautelares para prevenir daños irreparables en los términos del artículo 25 del Reglamento:

Como se ha detallado, la gravedad y urgencia de la situación descrita se puede sintetizar en los siguientes puntos:

- El DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS se encuentra listo para poder ser debatido por el Pleno del Congreso de la República, en cuyo caso, la decisión puede ser adoptada directamente por dicha entidad "con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del

Congreso". En la medida que el 07 de julio de 2022, el Pleno del Congreso de la República ya aprobó con 105 votos a favor la propuesta legislativa bajo revisión, existe un riesgo inminente de que el DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS sea aprobado y promulgado por el Congreso de la República.

- En el caso de que el DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS sea aprobado, se vulnerará el Derecho Humano al Medio Ambiente Sano de la ciudadanía en general, legalizando y formalizando actividades realizadas de manera ilegal, que incumplieron con las prohibiciones y requisitos previstos en la LFFS y afectaron el patrimonio forestal de la Nación, tales como la tala ilegal, la usurpación e invasiones de tierras con capacidad de uso mayor forestal y de capacidad de uso mayor para protección, ampliaciones de fronteras agrícolas, plantaciones ilícitas, entre otras.

- Asimismo, la aprobación del DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS pondría término a las investigaciones administrativas y penales que se encuentren en curso por la comisión de infracciones y delitos ambientales, lo que conllevará a la impunidad por los daños ambientales y la afectación del Derecho Humano al Medio Ambiente Sano de la ciudadanía.

- Junto con ello, la aprobación del DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS incentivará a continuar con la deforestación indiscriminada de los bosques amazónicos, tanto por parte de los beneficiarios de esta propuesta, así como por terceros que intentarán insertarse en el régimen excepcional de la modificatoria legal propuesta, promoviendo una deforestación aun mayor que la registrada en los últimos años.

- Por último, dado que la aprobación del DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS también representa una amenaza contra los Derechos Humanos a las Tierras, Territorios y Recursos Naturales de los Pueblos Indígenas del Perú, requiere que se realice un proceso de Consulta Previa con sus organizaciones representativas nacionales. En tal sentido, si no se lleva a cabo dicho proceso, también se vulnerarán directamente los Derechos a la Consulta Previa y a las Tierras, Territorios y Recursos Naturales de los Pueblos Indígenas del Perú.

iii) Informar si se interpusieron denuncias o si se solicitaron medidas de protección ante las autoridades estatales o locales, así como la respuesta obtenida. En caso de no haberse presentado, explicar las razones:

Ante la aprobación de la Autógrafa de la propuesta legislativa, con fecha 05 de agosto de 2022, se presentó una demanda de amparo en el fuero constitucional contra el Congreso de la República (Anexos 13.1: https://keneamazon.net/Documents/Demanda-Amparo-Autografa/Demanda-de-Amparo.pdf?_ga=2.264530502.8565068.1679117349-835311422.1674267734) con la finalidad de que se ordene el cese de la amenaza de vulneración del derecho constitucional a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.

No obstante, con fecha 20 de diciembre de 2022, el Tercer Juzgado Constitucional de Lima emite sentencia declarando improcedente la demanda de amparo (Anexo 13.2); motivo por el cual, el 05 de enero de 2023 se presentó el recurso de apelación respectivo (Anexos 13.3: https://keneamazon.net/Documents/Demanda-Amparo-Autografa/APELAN-SENTENCIA-IRREGULAR-EN-PROCESO-DE-AMPARO.pdf?_ga=2.268805432.8565068.1679117349-835311422.1674267734), el mismo que se encuentra aún pendiente de resolución. No obstante, debido a las atribuciones del Congreso de la República, el DICTAMEN POR INSISTENCIA – MODIFICATORIA LFFS podría entrar a la agenda y debate del pleno del Congreso de la República en cualquier momento, motivo por el cual el agotamiento de los recursos internos devenga en un mayor estado de indefensión de los Derechos Humanos de la colectividad nacional y de los Pueblos Indígenas del Perú.

En tal sentido, se considera que la crítica situación de riesgo y vulneración de derechos humanos continúa acrecentándose con el pasar del tiempo.

iv) Explicar qué tipo de medidas requiere que sean adoptadas por parte del Estado para proteger sus derechos. En caso de que cuente con alguna medida de protección, explicar con detalle en qué consistiría y los motivos por los cuales considera que no sería inadecuada o inefectiva atendiendo a su situación de riesgo:

En atención a los hechos descritos en la presente comunicación, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, solicitamos encarecidamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, producto del análisis de la presente solicitud, evalúe la dación de las medidas cautelares con la finalidad de que cese la amenaza y no se concrete la vulneración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas del Perú a la Consulta Previa y a las Tierras, Territorios y Recursos Naturales, así como el Derecho Humano de la ciudadanía peruana al Medio Ambiente Sano; por parte del Congreso de la República del Perú, en el marco del proceso legislativo que busca aprobar el “Dictamen de Insistencia ante las observaciones del Presidente de la República a la Autógrafa recaído en el Proyecto de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 2315/2021-CR con texto sustitutorio de la Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal.

Conforme con lo anterior, expresamente solicitan las siguientes medidas cautelares:

1) Se requiera al señor José Daniel Williams Zapata, Presidente del Congreso de la República, o a quien la suceda, que archive el “Dictamen de Insistencia ante las observaciones del Presidente de la República a la Autógrafa recaído en el Proyecto de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 2315/2021-CR con texto sustitutorio de la Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal” por ser una amenaza cierta e inminente contra los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas del Perú a la Consulta Previa y a las Tierras, Territorios y Recursos Naturales, así como el Derecho Humano de la ciudadanía peruana al Medio Ambiente Sano, y cuya aprobación generará la vulneración de los Derechos Humanos antes señalados.

2) Se requiera a las y los Congresistas de la República del Perú que en los procesos legislativos que sigan en adelante, en sus diferentes instancias (formulación, análisis, dictaminación y debate en el Pleno del Congreso), adopten las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado peruano en materia de respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos, poniendo énfasis en los Derechos Humanos a la Consulta Previa y a las Tierras, Territorios y Recursos Naturales de los Pueblos Indígenas del Perú, y en el Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano de las generaciones actuales y futuras de la ciudadanía peruana.

3) Se requiera a las y los Congresistas de la República del Perú que en la presentación, análisis y debate de propuestas legislativas:

3.1. SE EXCLUYAN FÓRMULAS LEGALES que vulneren los Derechos Humanos a la Consulta Previa, a las Tierras, Territorios y Recursos Naturales y a un Medio Ambiente Sano.
3.2. SE EXCLUYAN FÓRMULAS LEGALES que permitan la legalización y formalización de actividades que, de manera ilegal, que incumplieron con las prohibiciones y requisitos previstos en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y afectaron el patrimonio forestal de la Nación.
3.3. SE EXCLUYAN FÓRMULAS LEGALES que permitan evitar y poner término a las investigaciones administrativas y penales que se encuentren en curso por la comisión de infracciones y delitos ambientales, con el fin de impedir que se dejen impunes daños ambientales cometidos y la afectación del Derecho Humano al Medio Ambiente Sano.
3.4. SE EXCLUYAN FÓRMULAS LEGALES que promuevan una deforestación indiscriminada de los bosques amazónicos del Perú.

v) En caso de que la situación se encuentre relacionada con la aplicación de una pena de muerte, indicar cuál es la situación que guarda el proceso interno y, de ser el caso, si existe una fecha programada para la ejecución:

N/A

vi) En caso de que considere que la situación se encuentra relacionada con una desaparición, indicar desde cuándo no se tendrían noticias de la/s persona/s propuesta/s beneficiaria/s:

N/A

vii) En caso de que su situación esté relacionada con una posible deportación o extradición, indicar si existiría una fecha programada al respecto. Asimismo, precisar o aclarar si se interpuso algún recurso contra la decisión en cuestión y el estado actual de los procesos administrativos y/o judiciales:

N/A

SECCIÓN III: DOCUMENTOS PERTINENTES

Adjuntar la documentación que se considere pertinente para sustentar la solicitud de medidas cautelares.

• El envío de documentos puede resultar útil para valorar la situación de riesgo. De considerarlo pertinente, puede adjuntar archivos tales como imágenes, videos, audios, fotografías o captura de pantallas sobre mensajes amenazantes, decisiones judiciales y/o administrativas relacionadas con la situación de riesgo, certificaciones médicas para temas relacionados con salud, denuncias o solicitudes de protección interpuestas ante autoridades, entre otros.
• No es necesario que los documentos estén certificados, apostillados, legalizados o autenticados legalmente.

• No enviar documentos originales.

• Los documentos deben encontrarse en el idioma oficial del Estado, siempre que se trate de un idioma oficial de la OEA (español, inglés, portugués o francés). Si esto no es posible, explicar las razones (ver pregunta 1 del apartado III Estado Miembro de la OEA respecto del cual se presenta la solicitud de medidas cautelares).

Anexo 1.1. Dictamen por insistencia - modificatoria LFFS	Anexo 1.1. Dictamen por insistencia - modificatoria LFFS.pdf	6620 Kb
Anexo 1.2. LFFS	Anexo 1.2. LFFS.pdf	981 Kb
Anexo 2. Resolución Legislativa 26253 con la cual el Estado peruano aprueba el C169-OUT	Anexo 2. Resolución Legislativa 26253 con la cual el Estado peruano aprueba el C169-OUT.pdf	141 Kb
Anexo 3.1. Website del Proceso de consulta previa del Proyecto de Ley Forestal y Fauna Silvestre 4141	Anexo 3.1. Website del Proceso de consulta previa del Proyecto de Ley Forestal y Fauna Silvestre 4141.pdf	291 Kb
Anexo 3.2. Convocatoria del 2 de mayo de 2011 al Encuentro Nacional de Diálogo Intercultural	Anexo 3.2. Convocatoria del 2 de mayo de 2011 al Encuentro Nacional de Diálogo Intercultural.pdf	31 Kb
Anexo 3.3. Proceso de consulta previa del Proyecto de Ley Forestal y Fauna Silvestre Nº 4141 (actas)	Anexo 3.3. Proceso de consulta previa del Proyecto de Ley Forestal y Fauna Silvestre Nº 4141 (actas).pdf	350 Kb
Anexo 3.4. Acta del encuentro nacional 12 - 14 de mayo de 2011	Anexo 3.4. Acta del encuentro nacional 12 - 14 de mayo de 2011.pdf	1320 Kb
Anexo 3.5. Acta del encuentro nacional 24 de mayo de 2011	Anexo 3.5. Acta del encuentro nacional 24 de mayo de 2011.pdf	980 Kb
Anexo 3.6. Acta del encuentro nacional 25 de mayo de 2011	Anexo 3.6. Acta del encuentro nacional 25 de mayo de 2011.pdf	817 Kb
Anexo 3.7. Acta del encuentro nacional 26 de mayo de 2011	Anexo 3.7. Acta del encuentro nacional 26 de mayo de 2011.pdf	978 Kb
Anexo 4. Decreto Supremo N° 005-2021-MC	Anexo 4. Decreto Supremo N° 005-2021-MC.pdf	211 Kb
Anexo 5. Expediente digital del Proyecto de Ley 00649-2021-CR	Anexo 5. Expediente digital del Proyecto de Ley 00649-2021-CR.pdf	221 Kb
Anexo 6.1. Constitución Política del Perú	Anexo 6.1. Constitución Política del Perú.pdf	2246 Kb
Anexo 6.2. Reglamento del Congreso de la República	Anexo 6.2. Reglamento del Congreso de la República.pdf	1069 Kb
Anexo 7.1. Expediente digital del Proyecto de Ley 00894-2021-CR	Anexo 7.1. Expediente digital del Proyecto de Ley 00894-2021-CR.pdf	220 Kb
Anexo 7.2. Expediente digital del Proyecto de Ley 02315-2021-CR	Anexo 7.2. Expediente digital del Proyecto de Ley 02315-2021-CR.pdf	192 Kb
Anexo 8.1. Aprobación del Texto Sustitutorio de la propuesta legislativa	Anexo 8.1. Aprobación del Texto Sustitutorio de la propuesta legislativa.pdf	2378 Kb
Anexo 8.2. Aprobación de exoneración de segunda votación del Texto Sustitutorio de la propuesta legislativa	Anexo 8.2. Aprobación de exoneración de segunda votación del Texto Sustitutorio de la propuesta legislativa.pdf	2384 Kb
Anexo 8.3. Autógrafa enviada a la Presidencia de la República	Anexo 8.3. Autógrafa enviada a la Presidencia de la República.pdf	1217 Kb
Anexo 8.4. Observaciones de la Presidencia de la República a la	Anexo 8.4. Observaciones de la Presidencia de la	5943 Kb

Autógrafa enviada por el Congreso	República a la Autógrafa enviada por el Congreso.pdf	
Anexo 8.5. Envío de observaciones de la Presidencia de la República a la Comisión Agraria	Anexo 8.5. Envío de observaciones de la Presidencia de la República a la Comisión Agraria.pdf	5943 Kb
Anexo 8.6. Envío de observaciones de la Presidencia de la República a la Comisión Pueblos, Ambiente y Ecología	Anexo 8.6. Envío de observaciones de la Presidencia de la República a la Comisión Pueblos, Ambiente y Ecología.pdf	352 Kb
Anexo 8.7. Dictamen de la Comisión Agraria concluyendo archivar la autógrafa observada	Anexo 8.7. Dictamen de la Comisión Agraria concluyendo archivar la autógrafa observada.pdf	16169 Kb
Anexo 9. Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	Anexo 9. Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.pdf	189 Kb
Anexo 10.1. Código Penal	Anexo 10.1. Código Penal.doc	4238 Kb
Anexo 10.2. Sentencia de Casación 389-2014	Anexo 10.2. Sentencia de Casación 389-2014.pdf	1561 Kb
Anexo 11. Deforestacion Peru 2001 - 2021	Anexo 11. Deforestacion Peru 2001 - 2021.pdf	98 Kb
Anexo 12. Ley de consulta previa	Anexo 12. Ley de consulta previa.pdf	198 Kb
Anexo 13.1. Demanda de amparo contra Congreso de la República (primera parte)	Anexo 13.1. Demanda de amparo contra Congreso de la República (primera parte).pdf	18607 Kb
Anexo 13.1. Demanda de amparo contra Congreso de la República (segunda parte)	Anexo 13.1. Demanda de amparo contra Congreso de la República (segunda parte).pdf	19901 Kb
Anexo 13.1. Demanda de amparo contra Congreso de la República (tercera parte)	Anexo 13.1. Demanda de amparo contra Congreso de la República (tercera parte).pdf	13661 Kb
Anexo 13.2 Sentencia que declara improcedente demanda de amparo contra Congreso de la República	Anexo 13.2 Sentencia que declara improcedente demanda de amparo contra Congreso de la República.pdf	130 Kb
Anexo 13.3. Recurso de apelación contra sentencia que declara improcedente demanda de amparo contra Congreso de la República	Anexo 13.3. Recurso de apelación contra sentencia que declara improcedente demanda de amparo contra Congreso de la República.pdf	9003 Kb

FIRMA : lpautrat@keneamazon.net
FECHA : 18/03/2023 09:13 p.m.

ANEXO

11

CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA

ORGANISMO REPRESENTATIVO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS
CONSTITUIDA EL 03 DE OCTUBRE DE 1974

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 29 de marzo de 2023

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
AREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
29 MAR. 2023
RECIBIDO
Firma: Hora: 3:30pm.

CARTA N°012-2023-CNA/CEN

Señor
JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Presente.-

Asunto: *Solicitud de ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de autógrafa que modifica la Ley N° 29763 a partir de los proyectos de ley N° 649/2021-CR, 894/2021-CR y 2315/2021; y EN CONTRA DE LA RECONSIDERACIÓN a la votación de esta autógrafa.*

De mi especial consideración:

Reciba el saludo de la Confederación Nacional Agraria – CNA, gremio nacional representativo de los pueblos indígenas, comunidades y agricultores dedicados a la agricultura familiar.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al debate de la autógrafa recaída sobre los proyectos de ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 2315-2021 con texto sustitutorio de la Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal, que se llevó a cabo el jueves 23 de marzo del presente año; autógrafa que, no obstante haber obtenido 51 votos en contra, pretende ser sometida una reconsideración en su votación a partir de pedidos presentados por los congresistas Nilza Chacón y Elvis Vergara, a pesar de que se ha advertido que su aprobación promoverá graves impactos negativos sobre los bosques, como son la "deforestación legal", la degradación de los suelos y el incremento de conflictos por superposición de tierras, beneficiando todo ello únicamente al sector económico conformado por los agroindustriales.

Asimismo, alertamos que el Dictamen de la Comisión Agraria que promueve esta modificación de la LFFS no resolverá los problemas de superposición de derechos existentes en los bosques de producción permanente, ya que si bien el referido dictamen agrega una nueva disposición para crear "áreas de exclusión para fines agropecuarios" (en las que basta que haya actividades agropecuarias para que no se realice una clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, quitando así el filtro para identificar si un área es tierra forestal o agrícola y con ello se pueda acceder a la titulación), ésta contradice abiertamente a la propia LFFS, pues ésta prohíbe expresamente el cambio de uso de tierras forestales y para protección, así como el otorgamiento de títulos de propiedad, certificados o constancias de posesión en tierras con o sin cobertura forestal (ver artículo 37 de la LFFS). Entonces, lejos de plantear una alternativa orgánica y coherente con las normas existentes, este Dictamen solo promoverá un incentivo perverso para ocupar la tierra sin importar si es viable para actividades agropecuarias, con la ilusión de titularse.

MISIÓN - CNA
Somos un gremio agrario nacional de campesinos, indígenas y pequeños productores empoderados que promueven agricultura sostenible, seguridad y soberanía alimentaria, mercados locales y liderazgo de hombres y mujeres desde sus bases.

RU1104327

Jr. Antonio Miroquesada 327 - 341 - Cercado de Lima
Telef.: 428 - 3805 Telefax: 428 - 3805 / 428 - 2926
E-mail: cna@cna.org.pe
www.cna.org.pe

Denunciamos que este falso discurso a favor de los agricultores que se viene utilizando para legitimar este dictamen, en realidad busca beneficiar a otros sectores. En efecto, recordemos que con este dictamen también se pretende exonerar de cumplir los requisitos que exige la LFFS en su artículo 38 para el proceso de cambio de uso de la tierra, pero sin distinguir si ello será para los emprendimientos agropecuarios de los pequeños agricultores o de los agroindustriales, quienes, por la magnitud de su actividad, están obligados a presentar una certificación ambiental de acuerdo al Reglamento de Gestión Ambiental del sector Agrario. Es más, queda claro que al retirar los requisitos del artículo 38 de la LFFS y exonerarles de realizar la clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, también se pretende dejar impunes las infracciones de aquellas actividades que han deforestado la Amazonia para actividades agroindustriales y monocultivos. Por ello, lamentamos y rechazamos que se estén usando las legítimas expectativas de los pequeños agricultores con el único propósito de beneficiar al sector agroindustrial.

En estos momentos de grave crisis climática que viene sufriendo nuestro país no solo por el fenómeno de El Niño sino sobre todo por la reiterada negligencia de las autoridades nacionales, regionales y locales, el Congreso de la República, en vez de promover la deforestación de nuestros bosques y la degradación de nuestros suelos, debería fortalecer hoy más que nunca el desarrollo de una agricultura familiar vinculada a ecosistemas sostenibles.

Por todo lo expuesto, demandamos que esta autógrafa sea ARCHIVADA de manera definitiva, conforme al pedido cursado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

Finalmente, recordamos que desde CNA participamos del proceso de consulta previa de la LFFS y sus reglamentos, por lo que cualquier cambio que afecte a los territorios y prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas a los que también representa la CNA requieren ser sometidos necesariamente al proceso de consulta previa, libre e informada que establece el Convenio N°169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la Ley y reglamento de consulta previa y la sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el fundamento 41 del expediente N°0022-2009-PI/TC (sobre las etapas del proceso de consulta a los pueblos indígenas).

Atentamente,

Confederación Nacional Agraria
Rosalía A. Clemente Tacza
PRESIDENTA

RCT/mcf

MISIÓN - CNA

Somos un gremio agrario nacional de campesinos, indígenas y pequeños productores empoderados que promueven agricultura sostenible, seguridad y soberanía alimentaria, mercados locales y liderazgo de hombres y mujeres desde sus bases.

Jr. Antonio Miroquesada 327 - 341 - Cercado de Lima
Telef.: 428 - 3805 Telefax: 428 - 3805 / 428 - 2926
E-mail: cna@cna.org.pe
www.cna.org.pe

ANEXO

12

ANEXO

12

CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES AMAZÓNICAS DEL PERÚ
DEFENSA DE LA CULTURA Y BIODIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

Lima, 13 de abril de 2023

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRÁMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
19 ABR. 2023
RECIBIDO
Firma: Hora: 12:15pm.

CARTA N° 018-2023/PRESIDENTE-OBS.

Señor
JOSÉ WILLIAMS ZAPATA
Presidente del Congreso de la República del Perú
Lima. -

Asunto: Solicitamos el archivamiento de los proyectos de Ley que proponen la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763

Referencia: Proyectos de Ley N° 649/2021-CR, N° 894/2021-CR y N° 2315/2021-CR

Reciba el saludo cordial de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú - CONAP; organización nacional representativa de los Pueblos Indígenas amazónicos, trabajamos desde 1987 en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas, en revalorar la identidad cultural y difundirla, en la conservación de la biodiversidad, en el manejo de nuestros bosques en forma sostenible y sustentable y en la mejora de los medios de vida de nuestra población. La CONAP representa a más de 900 comunidades nativas afiliadas a 70 organizaciones indígenas en las regiones de Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín y Cusco.

El motivo de la presente es para reiterar al Congreso de la Republica, a través de su despacho, el archivamiento de los proyectos de Ley N° 649/2021-CR, N° 894/2021-CR y N° 2315/2021-CR, por ser atentatorios para nuestra Amazonía peruana, lugar donde habitamos los pueblos indígenas u originarios, pues su aprobación traerá como consecuencia la invasión de territorios de los pueblos indígenas por traficantes de tierras, una deforestación masiva, perdida de la biodiversidad de las cuales dependemos y crímenes por la ocupación del territorio que pondrá en mayor riesgo la vida de nuestros líderes indígenas que luchan por la integridad de la Amazonía. Se adjunta pronunciamiento institucional de julio de 2022.

En tal sentido, exigimos el archivamiento de dichos Proyectos de Ley que pretenden modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763.

Asimismo, desconocemos cualquier intención o acción que vayan en contra de nuestros ideales y posición institucional, realizadas por terceros que no tienen el consentimiento ni el respaldo de nuestra organización.

Atentamente,

CONAP
Oseas Barbarán Sánchez
Presidente - CONAP

RO111846

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú - CONAP
Av General Garzón N° 2474, Jesús María-Lima-Perú
Telefax: (511) 261-4579- email: conap.orgperu@gmail.com
Web: conap.org.pe

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú- CONAP, en defensa de los recursos naturales de la cual dependemos como pueblos indígenas originarios; frente a la aprobación de la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre LEY Nº 29763.

El Pasado 07 de julio del 2022, en Sesión Virtual del Pleno del Congreso de la República, se aprobó la modificación de la Ley 29763, luego de que la Comisión Agraria del Congreso, propuso como texto sustitutorio de los artículos 29 y 33 de la citada Ley, en síntesis, lo siguiente: "*El MIDAGRI sea el ente rector que establezcan los Bosques de Producción Permanente - BPP y apruebe la Zonificación Forestal. Además, legalizaría el cambio de uso no autorizado con fines agropecuarios de tierras (de uso mayor forestal y de uso mayor para protección) que forman parte del patrimonio forestal y de fauna silvestre*".

Si bien la propuesta de Ley, prohíbe el otorgamiento de título habilitantes en áreas de comunidades que se encuentran en trámite de reconocimiento, titulación y ampliación, y áreas de PIACI, no menos cierto es que, nuestros pueblos indígenas dependen de los recursos naturales (bosques, animales, peces y otros), por lo mismo, esto implicaría una grave vulneración a los derechos de las comunidades indígenas colindantes, en la cual el gobierno Peruano estaría brindando un incentivo desmedido a terceros, para el uso y explotación de los recursos en estos territorios. Por el contrario, se debió haber implementado un proceso de consulta previa, como se hizo para la dación de la Ley que se pretende modificar, mecanismo que asegura la incorporación del enfoque garantista de derechos de los pueblos indígenas.

Por estas consideraciones:

1. Exhortamos al presidente de la República, observar las modificaciones sobre la presente Ley, ya que, de ser promulgada se estaría dando un retroceso en cuanto a la lucha contra la deforestación y el tráfico de tierras en la Amazonía Peruana, del cual las comunidades nativas y organizaciones indígenas venimos resguardando como hábitat de nuestra existencia, cultura, cosmovisión y conocimientos ancestrales.
2. Hacemos un llamado a los sectores públicos, sociedad civil, cooperación internacional, organizaciones indígenas y a la población en general a pronunciarse y a generar conciencia sobre esta modificatoria de ley, que atenta contra la protección a nuestros bosques amazónicos, contra nuestras comunidades indígenas y sobre todo al buen vivir y vida digna que merecemos los peruanos.
3. El Congreso de la Republica debe realizar acciones coordinas con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y autoridades

sectoriales competentes, no anteponiendo los beneficios de un grupo, desconociendo los derechos de los pueblos indígenas y ecosistemas que sirven de sostén ambiental.

4. Exigimos al SERFOR a pronunciarse con respecto a esta modificatoria, ya que se le estaría restando competente, en cuanto a la protección del uso de tierras y bosques para poder delimitar las obligaciones y requerimientos de las personas que hacen uso de ellas.
5. Solicitamos la intervención de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República y a la Defensoría del Pueblo para detener este atropello que se pretende realizar, caso contrario nos veremos obligados a tomar otras medidas en resguardo a la no afectación de nuestros derechos.

Finalmente, extendemos nuestras reflexiones, en torno a esta situación crítica y compleja, que envuelve a un gran país con biodiversidad y cultura, que requiere el compromiso real de las autoridades para seguir protegiendo y preservando sus bosques y a sus pueblos originarios.

CONAP

CONSEJO DIRECTIVO – CONAP

ANEXO

13

CONFIEP

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
13 DIC 2023
RECIBIDO
Firma ..... Hora 6:04 pm

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 13 de diciembre de 2023

PRE- 297/2023

Señor
Alejandro Soto Reyes
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la República
Presente.-

De nuestra especial consideración:

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente en calidad de representante de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) para abordar un tema de suma importancia que atañe a la estabilidad económica, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de nuestro país.

La seguridad jurídica y el reconocimiento de los derechos otorgados por el Estado son pilares fundamentales para garantizar el progreso y la equidad en nuestra sociedad. En ese sentido, nos permitimos instar respetuosamente a la discusión y análisis en el pleno del Congreso de la República sobre la insistencia de los Proyectos de Ley 649, 894 y 2315, los cuales buscan modificar la Ley Forestal y Fauna Silvestre.

Es imperativo resaltar que negar o desconocer los derechos previamente otorgados por el Estado constituiría una violación flagrante del derecho al trabajo y una seria amenaza para la promoción de inversiones en un sector que ha sido un motor de crecimiento económico sostenido en las últimas tres décadas en nuestro país. La estabilidad jurídica es un elemento vital para la confianza de los inversionistas y el fomento de la actividad económica, en este caso, en el sector agrario. Además, estos proyectos no solo garantizan la seguridad jurídica a los agricultores ya establecidos, sino que también procuran una armonización necesaria con normativas internacionales, como la reciente normativa europea de importación cero deforestación. El enfoque equilibrado de estas propuestas legislativas no promueve la deforestación futura ni afecta áreas forestales intactas, sino que busca regularizar actividades ya existentes en terrenos degradados.

Consideramos de suma importancia que se dé prioridad a este debate en el Congreso de la República, reconociendo el impacto trascendental que tendrá en la estabilidad económica, la seguridad jurídica y el cumplimiento de los derechos adquiridos por aquellos que han contribuido al crecimiento del sector agrario y, por ende, de la economía nacional.

Agradecemos sinceramente su atención a esta solicitud y confiamos en su compromiso con el desarrollo sostenible y la justicia en nuestro país, haciendo propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de estima y consideración.

Atentamente,

Alfonso Bustamante Canny
Presidente

Av. Víctor Andrés Belaunde 147
Real Tres Of 401, Lima 27, Perú
T(511) 415 2555 F(511) 415 2566
www.confiep.org.pe

RU: 1356661

ANEXO

14

GOBIERNO TERRITORIAL AUTÓNOMO
DE LA NACIÓN WAMPÍS

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

0 4 ENE 2024

RECIBIDO

Firma ..... Hora 12.30hrs.

Soledad, 29 de diciembre de 2023

Señor:
Alejandro Soto Reyes
Presidente del Congreso de la República del Perú

Con copia: Comisión de Pueblos del Congreso, Congresistas, MINAM, MIDAGRI, GOREs, Opinión Pública, OIT-Denuncias, CIDH, ONU-OACNUDH, ONU-Relatoría Pueblos Indígenas, ONU-CERD/Racismo, Gobiernos de Noruega, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra

Asunto: Rechazo y No aprobación de proyectos de ley N° 649, 894 y 2315 del 2021, de cambios en ley forestal (arts.29,33 y otros) para destruir la Amazonía y Pueblos Indígenas

De nuestra consideración:

El Gobierno Territorial de la Nación Wampis (GTANW) que articula 85 comunidades (26 titulares con 59 anexos) y 16,000 ciudadanos peruanos Wampis, que defendemos desde hace más de 7000 años nuestro territorio ancestral de 1'327,760 Has, aplicando nuestro Estatuto basado en el cuidado de la ***Naturaleza a Perpetuidad*** de las Cordilleras del Cóndor, Kampankias y Tuntanain, sus ríos Kanús (Santiago) y Kankaim (Morona), en los distritos fronterizos de Río Santiago y Morona, de las provincias de Condorcanqui y Datem del Marañón, en las regiones de Amazonas y Loreto; manifestamos nuestro profundo y ***enérgico rechazo a los proyectos de ley mencionados*** que por insistencia el Congreso Nacional pretende aprobar; por constituir cambios estructurales de fondo, anti constitucionales, ilegales e irracionales, que aumentarán la deforestación, degradación y contaminación de la Amazonía, así como la mayor violencia de invasores que ya han asesinado a 33 defensores indígenas, ***acelerando el tráfico de tierras, a favor del narcotráfico, colonos, agronegocio, menonitas, palma aceitera, monocultivos, minería***, y otros por los fundamentos siguientes:

a) Exonerar la Zonificación Forestal, significa destruir 30 años de ordenamiento racional. Es el aval del Congreso a las mafias ilegales de los actuales invasores, muchos encima de territorios indígenas pendientes de titulación, y es un incentivo para multiplicarlas geométricamente. La frase de respetar a las que "están en trámite" es una trampa burocrática a nuestro derecho fundamental imprescriptible. Avala el ***desperdicio de fondos climáticos, sean públicos o de donantes, dedicados a las zonificaciones***, y revela la gran estafa al respecto de algunos funcionarios y entidades estatales involucradas en "aumentar fondos para zonificación" y luego desactivarlas, y que fueron débiles e incoherentes en el debate congresal, cediendo a presiones de terceros de empresarios y algunas ONGs, con el cuento de ***"proteger al colono para que no aumenten"***.

RU: 1369572

a) Exonerar de la Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso Mayor (CTCUM) es aval directo para tumbar bosques, estén o no, nunca se sabrá, encima de suelos de uso agrario, forestal o de protección. Significa que ***el tractor congresal arrasará con los bosques***, en beneficio de las mafias extractivistas que han penetrado el poder político.

b) Imponer la ***dictadura forestal amazónica del Ministerio de Agricultura (MIDAGRI) y de los Gobiernos Regionales (GORE)*** por encima de las opiniones del Ministerio de Ambiente (MINAM) y del Servicio Forestal (SERFOR) que terminarán subordinados; significa poner al "gato de despensero", porque son ellos los incapaces por inacción, lenidad o complicidad, según los casos, de detener el tráfico de tierras y deforestación, bajo el cuento de ***"agricultura inteligente"*** con apoyo de ingenuos donantes e irresponsables ONGs

c) Darles 1,095 días (3 años) para que tumben más selvas, a estos negocios depredadores, significa una clara voluntad política de arrasar con los bosques, expandir los monocultivos legales o ilegales no les importa, y destruir la conectividad y diversidad biológica, indispensables para la vida de nuestros pueblos, sean vecinos o no. Perú es el segundo país con más Amazonía luego del Brasil, y el congreso actual es responsable de empujar a toda la cuenca amazónica al punto de no retorno, de convulsión y desertificación acelerada. Crimen contra el Perú y la humanidad, y este congreso será responsable ante la historia.

Por lo expuesto, solicitamos y llamamos la atencion a lo siguiente:

1. La ***directiva del congreso***, debe aceptar la reconsideración propuesta a la aprobación de dichos proyectos, y revertir la insistencia, para que queden sin efecto. Caso contrario, sus integrantes, al igual que los de la Comisión agraria, deben ser investigados y sancionados. Estos delitos no prescriben, y tarde o temprano habrá justicia.

2. El ***MINAM y SERFOR***, deben asumir una posición de rechazo frontal a esta colonización y depredación, y no terminar subordinados por presiones (con informes "previos" de adorno o "compensaciones" con bosques luego de destruirlos) a los grupos de interés detrás de los GORE, MIDAGRI y empresas. Deben dejar atrás posiciones confusas, ingenuas o interesadas de la visión y mafias "agraristas" de la Amazonía, con el cuento de la "agricultura inteligente" por parte de tecnócratas que practican la "puerta giratoria" entre el "servicio público" y los negocios anti biodiversidad y amazónicos.

3. Los ***donantes forestales y climáticos, especialmente Noruega (NICFI), Alemania, Estados Unidos e Inglaterra***, entre otros, deben pronunciarse rechazando esta aberración deforestadora, y ***detener invitaciones*** a cualquier miembro del congreso para ir a pasearse y burlar acuerdos; así como ***suspender los fondos de la DCI*** (Declaración Conjunta de Intenciones) y otros fondos climáticos y forestales; y ***suspender los acuerdos de créditos de carbono*** que involucren a Perú ya que quedan desestabilizados y fragilizados; hasta que haya un gobierno y congreso que dé garantías de credibilidad y no corrupción en la protección de la Amazonía y sus pueblos, y de reducir la deforestación y GEI (Gases de Efecto Invernadero).

4. Las ***instancias de la ONU y de la OEA***, deben activar sus mecanismos de acción e intervención según el caso, para que esta grave agresión a la Amazonía y nuestros pueblos, con impacto al clima global y la humanidad, sea detenida o revertida. Se trata de que la ***OIT-sección denuncias***, realice una visita oficial al Perú sobre violación del Convenio 169-OIT. Que la ***CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)*** abra un expediente de caso sobre estos delitos sobre derechos humanos y ambientales, sus responsables y soluciones. Que la ***ONU-OACNUDH (Alto Comisionado Perú en Derechos Humanos), NU-Relatoría Pueblos Indígenas y la ONU-CERD***

(Comisión de Erradicación del Racismo) abran expedientes de caso sobre discriminación, racismo, violencia, muerte de defensores por deforestación, acceso a medios de vida, de los pueblos indígenas amazónicos, que incluya las visitas de campo y audiencias internacionales respectivas.

5. Llamar a nuestro pueblo Wampis y organizaciones indígenas de la Amazonía Peruana, a que en caso se apruebe este desastre legal, a ejercer la defensa activa de la constitución y normas internacionales, y ***no aceptar y rechazar cualquier invasión, colonización, menonitas, agronegocios, monocultivos, mineros y otros***, amparados en estas aberraciones legales. Nuestra vida, futuro e historia como pueblos se juega en ello y está por encima de papelitos de tinterillos congresales pasajeros.

6. Que la ***opinión pública se movilice*** ante esta agresión, que producirá menos agua, refrigeración, alimentos a Lima y ciudades costeras y andinas, y les traerá más inseguridad y violencia, por la impunidad de las mafias delincuenciales en la Amazonía que se suman o alimentan a las similares en las urbes. La opinión pública debe castigar con el rechazo político hoy, mañana, en cualquier elección a los responsables políticos de este crimen social y ambiental, y que deben ser identificados: ***repudio a los autores individuales y partidos, que son de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Renovación Nacional, Podemos, Perú Libre, Partido Magisterial***.

Para cualquier información, les agradecemos nos comuniquen al siguiente correo institucional: gtawampis@gmail.com

Sin otro particular, agradeciéndoles la atencion a la presente, les expresamos nuestra consideración y estima.

Atentamente,

GOBIERNO TERRITORIAL AUTONOMA
DE LA NACION WAMPIS
TEÓFILO KUKUSH PATI
DNI: 40573757

Teófilo Kukush Pati
Pamuk GTANW

GOBIERNO TERRITORIAL AUTONOMO NACIÓN WAMPIS
GOBIERNO TERRITORIAL AUTONOMO DE LA NACIÓN WAMPIS
Galois Flores Pizango
PAMUK AYATKE

Galois Flores Pizango
Ayatke Pamuk GTANW

ANEXO

15

Prog. 649 y otros

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
12 ENE 2024
RECIBIDO
Firma ..... Hora 11:56

9 de enero de 2024

Señor:
ALEJANDRO SOTO REYES
Presidente del Congreso de la República del Perú Lima.
–

ASUNTO: Reconsideración y archivamiento definitivo de la modificación a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que viene promoviendo inconsultamente el Congreso de la República

Las organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas u Originarios, integrantes de la Plataforma de los Pueblos Indígenas frente al Cambio Climático (en adelante PPICC), nos dirigimos a usted para reiterar nuestra preocupación y expresar nuestro rechazo respecto a la propuesta de Ley aprobada por insistencia que modifica la Ley 29763, LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, Y APRUEBA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ORIENTADAS A PROMOVER LA ZONIFICACIÓN FORESTAL.

Ello porque promueve la deforestación y facilita el otorgamiento de derechos sobre nuestros bosques a favor de terceros y haber violado nuestros derechos a la consulta y consentimiento previo libre e informado. Con el agravante de seguir promoviendo el despojo de nuestros territorios integrales ancestrales y poniendo en grave riesgo nuestra vida e integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual.

Al tomar conocimiento de la aceptación de los dos pedidos de reconsideración de la votación del 14 de diciembre de 2023, presentados por las Congresistas Ruth Luque Ibarra y Susel Paredes Piqué, y que ello deberá ser resuelto por el Pleno del Congreso en la próxima legislatura, requerimos al Congreso de la República que actúe conforme a derecho y archive definitivamente la citada propuesta normativa. Esto por atentar no solo contra nuestros derechos fundamentales reconocidos en el corpus iure internacional y constitucional como son los derechos al territorio integral ancestral y a la consulta y consentimiento previo libre e informado; sino también por comprometer internacionalmente al Estado peruano al incumplir acuerdos asumidos para proteger los bosques y culminar la zonificación forestal.

Cabe recordar que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigente fue aprobada por el Congreso de la República través de un proceso participativo con los pueblos indígenas, en aplicación de las obligaciones asumidas con la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y el Reglamento de la Ley fue aprobado en el marco de la Ley de Consulta Previa. A pesar de ello, aún sigue pendiente que esta norma cumpla con adecuarse al corpus iure internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y a los acuerdos que se tuvieron

RU: 1376732

en este proceso, como el de restituirnos en propiedad nuestros bosques y compatibilizar las áreas naturales protegidas a los territorios integrales ancestrales de los pueblos y naciones indígenas.

Resulta necesario mencionar el accionar vulneratorio del Congreso que aprueba proyectos de ley en contra de los pueblos indígenas. A pesar de los pronunciamientos y múltiples cartas dirigidas a los congresistas desde las organizaciones indígenas que han manifestado esta modificatoria pone en riesgo los bosques, la diversidad biológica y sobre todo vulnera los derechos colectivos como pueblos indígenas, siendo que somos los principales defensores de la Amazonía frente al avance de actividades como la tala de madera, agricultura y minería ilegales, la invasión y el tráfico de tierras, entre otras, que serán beneficiadas con la mencionada modificatoria.

Lo más lesivo de esta modificatoria es el cambio de uso de tierra con fines forestales y de tierras con fines de protección para fines agropecuarios, que se realizaba de manera excepcional y cumpliendo reglas técnicas. Sin embargo, ahora se podrá realizar cambios "legalmente" sin respetar criterios técnicos, haciendo impune el atentado contra los bosques, que nos protegen de los impactos de la crisis climática. Señalamos la incongruencia del Estado peruano que, a nivel internacional y en espacios como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 28), asume compromisos para reducir la deforestación, pero en la práctica promueve este tipo de leyes y acciones depredatorias e ilegales contra la Amazonía. La modificación de la Ley Forestal también afecta de manera directa al compromiso climático del Perú en el marco del Acuerdo de París, al reducir las condiciones necesarias para considerar la zonificación de predios que demuestren supuestamente no tener "bosques" y liberar a dichos espacios de un mecanismo que permite proteger las áreas que mantienen aún una cobertura boscosa. Está bastante documentado que los predios individuales son áreas con una alta deforestación, liberarlos de la zonificación forestal significa alentar la deforestación, que es la principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú.

Finalmente, recordar también que de no reconsiderar la votación de esta ley y su archivamiento conforme a derecho, los responsables pueden incurrir en responsabilidad administrativa funcional, responsabilidad civil y/o responsabilidad penal; todas ellas, vías legales que la PPICC, como la institucionalidad indígena dentro de la estructura del Estado, no dudaremos en utilizar hasta lograr la derogatoria de la citada propuesta normativa que vienen impulsando; así como también se determine las responsabilidades en las que incurran los funcionarios y/o servidores públicos.

Atentamente

CC:
Ruth Luque Ibarra - presidenta de la CPAAAAE del Congreso de la República del Perú
Susel Paredes Piqué - Congresista de la República del Perú

Confederación Campesina del Perú
Wilder Sánchez Chávez
PRESIDENTE

Confederación campesina del Perú (CCP)

Confederación Nacional Agraria
Rosalía A. Clemente Tacza
PRESIDENTA

Confederación Nacional Agraria (CNA)

AIDESEP
Jorge Pérez Rubio
PRESIDENTE

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

CONAP
Oseas Barbarán Sánchez
Presidente - CONAP

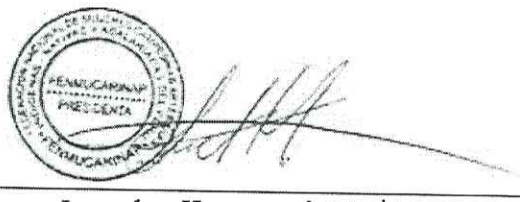
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP)

UNCA - PERÚ
Isidro Linfache Carita
DNI. 40332342
PRESIDENTE

Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA)

PRESIDENTA ONAMIAP

Ketty Marcelo Lopez
Presidenta
ONAMIAP



Lourdes Huanca Atencio
Presidente de FENMUCARINAP

ANEXO

16

CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA

Organización representativa de los pequeños agricultores y pueblos indígenas
Constituida el 03 de octubre de 1974

Lima, 09 de enero de 2024

CARTA N°001-2024-CNA/CEN

Señor
Alejandro Soto Reyes
Presidente Mesa Directiva
Congreso de la República de Perú

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
12 ENE 2024
RECIBIDO
Firma ..... Hora 11:56

Señora
Jennifer Lizetti Contreras Álvarez
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Señora
Leslie Carol Urteaga Peña
Ministerio de Cultura

Señora
Albina Ruiz Ríos
Ministerio del Ambiente

Señor
Luis Alberto Gonzales - Zúñiga Guzmán
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

Señor
Josué Gutiérrez Cóndor
Defensoría del Pueblo

Presente. -

Asunto: Solicitamos archivo y rechazo total la norma aprobada por el Congreso de la República Peruana (Autógrafa sobre Proyectos de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 2315/2021-CR) que pone en riesgo a los bosques, flora y fauna nacional y pueblos indígenas.

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a nombre de La Confederación Nacional Agraria (CNA), organización gremial representativa de los pueblos indígenas y originarios organizados en comunidades campesinas y comunidades nativas, y de los pequeños y medianos productores agrícolas en el Perú

Mediante la presente, queremos manifestar nuestra preocupación para la aprobación de la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, con medidas que promueven la deforestación en la Amazonia, lo cual va en contra de los compromisos del Perú frente a la lucha contra el cambio climático, tratados internacionales sobre temas ambientales, de comercio y de derechos humanos.

En esta línea, para contextualizar, recordemos que el Congreso de la República aprobó por insistencia la autógrafa que contiene el PL 649/2021-CR, 894/2021-CR y 2315/2021 CR. "Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal".

Este proyecto de ley aprobado incluye una disposición complementaria final en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que modificaría las reglas del cambio de uso de la tierra at crear "áreas de exclusión para fines agropecuarios", los cuales serían exceptuados de realizar su clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, así como de Nos requisitos del cambio de uso de la tierra (que son exigidos en el artículo 38 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre)

RU: 1375988

MISIÓN CNA

Somos un gremio agrario nacional de campesinos, indígenas y pequeños productores que promueve Agricultura sostenible, seguridad y soberanía alimentaria, mercados locales; seguridad de tierras y territorios; el liderazgo de hombres y mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos colectivos; e incidencia en políticas públicas para el buen vivir de los pueblos.

Dirección: Jr. Santa Rosa 327 - 341 - Cercado de Lima
Telef: 360 - 8138 / E-mail: cna@cna.org.pe
www.cna.org.pe cnaperuoficial cna_peru

Con ello, se convertiría en un mecanismo de pernicioso al instalarse actividades agropecuarias o agroindustriales sin evaluar previamente si un área tiene capacidad para ser usada como tierra forestal o agropecuaria, beneficiando a empresas que hayan incumplido previamente con los requisitos exigidos en la Ley forestal y de Fauna Silvestre, debilitando la protección a los bosques y la gestión ambiental, y promoviendo la deforestación legal, con el riesgo de incentivar nuevas y mayores deforestaciones en el futuro sin considerar que la principal causa de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú -que impulsa el cambio climático- es la deforestación que ocurre por el cambio de uso del suelo.

Así, este proyecto de ley, lejos de atender un problema social, podría agudizar otros, como (i) la ocupación desordenada del territorio sin filtros ni criterios técnicos sobre la capacidad y uso de la tierras, afectando los bosques, y que incluso se puedan convenir en inversiones ineficientes que alteren y empobrezcan el ecosistema amazónicos ; (ii) el tráfico de tierras; (iii) la superposición con tierras de comunidades nativas en proceso de titulación que vulnere sus derechos al territorio, entre otros; yendo en contra de los principios de la propia Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.

Esta autógrafa aún no ha sido publicada y no debe serlo, atendiendo el pedido de reconsideración de las congresistas Susel Paredes y Ruth Luque, que solicitaron en las sesiones del Pleno del 13, 14 y 15 de diciembre de 2023. Tal y como mencionan las congresistas, es necesario que se vote y apruebe esta reconsideración, por corresponder a derecho, más aun considerando que una iniciativa legislativa de este tipo tendría efectos irreversibles en territorios de pueblos indígenas que aún no están titulados y agravaría el cambio climático al deforestar los bosques en todo el territorio nacional, poniendo en riesgo la biodiversidad, ecosistemas, flora y fauna de *la* costa, sierra y *sedVa* del Perú, lo que afecta incluso a toda la humanidad.

Adicional a ello, se debe considerar la posición y acciones requeridas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio del Ambiente, SERFOR, Ministerio de Cultura y Defensoría del Pueblo, considerando que incluso la Presidencia de la República observó en el 2022 dicha propuesta legislativa, siendo devuelta al Congreso para revisión En dicho contexto, las Embajadas del Reino Unido y Noruega expresaron su preocupación por el avance de esta propuesta. Tras ello, en marzo de 2023, el Congreso votó mayoritariamente en contra de la aprobación de esta Ley, presentándose ese mismo día un pedido de reconsideración desde la comisión Agraria de la votación realizada. En ese marco, el tema resurgió 9 meses después en la agenda parlamentaria tras un pronunciamiento de CONFIEP del 13 de diciembre 0e 2023, pidiendo la aprobación de la modificatoria.

La aprobación de dicha modificatoria no ha tomado en cuenta que sociedad civil y organizaciones Indígenas expresaron su rechazo ante dicha norma, recordando que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue aprobado luego de un amplio proceso de consulta previa a los pueblos indígenas, por lo que cualquier modificación *debería* respetar *sus* derechos colectivos.

En ese sentido, desde sociedad civil y organizaciones indígenas, se ha suscrito un pronunciamiento que cuenta con el apoyo de más de 4000 firmas, entre organizaciones y personas naturales, el cual se adjunta a la presente. Considerando las graves consecuencias de esta autógrafa, es necesario que se tome en cuenta la voluntad popular y la participación que se manifiesta a través de este pronunciamiento.

En consecuencia, se solicita.

Al Congreso de la República del Perú y a la Mesa Directiva: SE ABSTENGA DE ORDENAR LA PUBLICACIÓN DE LA AUTÓGRAFA APROBADA DEL PL 649/2021-CR, 894/2021-CR Y 2315/2021-CR, ya que el estado procesal de la misma está en reconsideración a partir de los recursos presentados por las congresistas Susel Paredes y Ruth Luque sobre las votaciones de dicha Autógrafa.

MISIÓN - CNA

Somos un gremio agrario nacional de campesinos, indígenas y pequeños productores que promueve Agricultura sostenible, seguridad y soberanía alimentaria, mercados locales; seguridad de tierras y territorios; el liderazgo de hombres y mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos colectivos; e incidencia en políticas públicas para el buen vivir de los pueblos.

Dirección: Jr. Santa Rosa 327 - 341 - Cercado de Lima
Telef: 360 - 8138 / E-mail: cna@cna.org.pe
www.cna.org.pe cnaperuoficial cna_peru

Asimismo, se exhorta a los congresistas a que voten a favor de la reconsideración presentada por las congresistas referidas, así como que reevalúen con un amplio debate y análisis técnico la Autógrafa, tomando en cuenta los dictámenes de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Además, solicitamos que se desarrolle una propuesta integral que atienda las necesidades de los pequeños agricultores en coordinación con el Ejecutivo, con un enfoque de derechos y de sostenibilidad; ello teniendo en cuenta que sin bosques no es sostenible la agricultura en la Amazonia y que es responsabilidad del Ejecutivo el desarrollo agropecuario con asistencia técnica que incluya incentivos positivos con la integración de la gestión forestal.

Al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: SE PRONUNCIE EN LA MISMA LÍNEA DE LO EXPRESADO EL 27 DE AGOSTO DE 2022, donde expone su preocupación por el atentado a nuestros bosques por esta modificatoria a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Al Ministerio de Cultura: CUMPLA CON SU RESPONSABILIDAD DE VELAR POR LA APLICACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE ESTA MODIFICATORIA, sin la cual no se puede ni debe aprobar. Asimismo, se pronuncie para que no se modifiquen los acuerdos de la consulta previa de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus Reglamentos, la cual se pretende desconocer con esta modificación, recordando que los artículos que se pretenden modificar fueron parte del análisis, diálogo y acuerdos de consulta previa. Además, la modificatoria pone en riesgo el vínculo cultural, espiritual y económico de los pueblos indígenas con su territorio, como lo manifestó el MINCUL el 27 de agosto de 2022.

Al Ministerio del Ambiente: SE PRONUNCIE EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS EN LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL y manifieste nuevamente su rechazo a los cambios que pretende realizar esta autógrafa por poner en peligro el patrimonio forestal y la diversidad biológica de todo el país, como se hizo anteriormente el 28 de agosto de 2022.

Al Servicio nacional Forestal y de Fauna *Silvestre* (SERFOR): QUE MANIFIESTE SU RECHAZO A ESTA AUTÓGRAFA por atentar contra su principal función que es la promoción de la gestión sostenible de la flora y fauna silvestre del país.

A la Defensoría del Pueblo: QUE REITERE SU PRONUNCIAMIENTO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, así como lo expresado en las notas de prensa del 29 de marzo de 2023 y del 6 de junio de 2023, donde advertía la grave afectación a la Amazonia y a cerca de 400 000 indígenas, exhortando que este Poder del Estado debe velar por el respeto a la Constitución y las leyes, así como la aplicación del enfoque ecosistémico que debe contar con la participación del MIDAGRI, entre otras.

Al Poder Ejecutivo: QUE CUMPLA CON LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES, ASI COMO ACUERDOS SUSCRITOS POR EL ESTADO PERUANO como la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+, el Convenio 169 de la OIT, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Estrategia de Crecimiento Verde en el marco de la OCDE, TLC de Perú con la Unión Europea (UE) y el APC con Estados Unidos.

Por ello, es preciso recordar que, en un Estado Constitucional de Derecho, se debe efectivizar derechos de forma progresiva. Sin embargo, en el contexto actual, se está haciendo lo contrario, lo que se refleja con esta iniciativa de modificatoria impulsada por el Congreso de la República.

Ante esta situación, es menester que las instancias mencionadas se pronuncien y defiendan los derechos adquiridos y reconocidos en normas nacionales e internacionales, en el marco del cumplimiento de sus funciones y demostrando que aún existe institucionalidad.

Atentamente,

Confederación Nacional A...
Rosalía A. Clemente Tacza
PRESIDENTA

MISIÓN - CNA

Somos un gremio agrario nacional de campesinos, indígenas y pequeños productores que promueve Agricultura sostenible, seguridad y soberanía alimentaria, mercados locales; seguridad de tierras y territorios; el liderazgo de hombres y mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos colectivos; e incidencia en políticas públicas para el buen vivir de los pueblos.